



APUNTES

DE

# DERECHO CONSTITUCIONAL

ANTECEDENTES NACIONALES Y EXTRANJEROS

POR

M. A. Lancelotti y Luis A. Galli



Biblioteca de la  
Corte Suprema de Justicia de la Nación

No. Orden

Clasificación

83.297

F-2603

BUENOS AIRES

IMPRENTA "LA BUENOS AIRES"

CALLE MORENO ESQUINA PERÚ

1898





## ADVERTENCIA

---



Estos apuntes fueron escritos el año pasado exclusivamente para nuestro uso particular, sin haber tenido jamás la intención de publicarlos; pero, en vista de los reiterados pedidos de varios estudiantes amigos, nos hemos decidido darlos á la publicidad. Poco propio hemos hecho; nuestro trabajo se ha limitado á extractar, con la mayor concisión posible, de varios autores,—cuyas obras siempre costosas y muy extensas, lo son más bien de consulta que de estudio — aquellos puntos que directamente responden el programa, facilitando así la tarea al estudiante. Recomendamos, no obstante, á los que desean profundizar la materia, consulten las conferencias del Dr. Aristóbulo del Valle, (parte histórica).

Si conseguimos con ésto prestar algún servicio á nuestros compañeros de estudio, se habrán colmado nuestras aspiraciones.

M. A. LANCELOTTI Y L. A. GALLI.





*Antonio Zamaguer*  
*Diciembre 4 1885.*



## CAPITULO I

### ANTECEDENTES PATRIOS

SUMARIO.—I. Carácter de la legislación de Indias. La religión y la Corona durante la época colonial. Sistema restrictivo en la administración.— II. El Rey. — III. Consejo de Indias. — IV. Casa de Contratación.— V. Virreynato del Río de la Plata. — Antecedentes de su erección.— VI. Virreyes. — VII. Intendencias. — VIII. Audiencias. — IX. Cabil- dos. — X. Consulado.

I.—Descubierta la América y posesionada España de la mayor parte de su continente en virtud del derecho indiscutible que el hecho del descubrimiento confería al descubridor, y de otros títulos á cual más absurdos, pero considerados entonces irrefutables y lejítimos, como la bula de Alejandro VI, « la guerra justa » con el fin de reducir á los salvajes y enseñarles la relijión cristianas, y « la palabra divina », (Véase Apéndice a)—era de preveerse que se impusiera la necesidad de reglas precisas, de leyes que respondieran á un órden de cosas totalmente nuevo; que sirvieran, en una palabra, para regir los destinos de las nuevas colonias en formación, que surgían, de las selvas vírgenes de América, abatidas bajo el hacha de



sus conquistadores; y ésto tanto más, cuanto que,— las exigencias y las necesidades del momento, el diverso y variado teatro de acción en que se desarrollaría la actividad individual, la sed misma de las riquezas convertida, en esa época de civilización decrepita, en patrimonio exclusivo de cuanto aventurero arribaba á las playas de América, como la idea falsa erróneamente basada en la creencia á su vez absurda de que el acaparamiento del oro constituye la felicidad y el engrandecimiento de los pueblos,—así lo exigían.

De ahí que, desde los primeros tiempos de la conquista, los reyes de España asesorados por sus consejeros, se vieran obligados á reglamentar el gobierno general de las colonias por medio de cédulas reales que legislaran en detalle, las cuestiones y los asuntos referentes á sus posesiones de las Indias Occidentales, reglamentando su administración y en general, todo aquello que tuviera hasta la más mínima relación con el comercio.

Estas leyes, dictadas para sociedades en formación, cuyo futuro desarrollo no era dable preveer, aumentaron de tal modo á medida que el desenvolvimiento de la civilización colonial iba tomando mayores proporciones que, coleccionadas por el Consejo de Indias, que como veremos, era el tribunal supremo en todo lo relativo al gobierno colonial, llegaron á formar cuatro grandes volúmenes, en los que, sin la disposición ni el orden conveniente, hallábanse aglomerados todos los decretos, mandatos y disposiciones que constituían la legislación indiana; un verdadero laberinto



de disposiciones expedidas arbitrariamente y sin con-  
cierto alguno y cuyo fondo estaba basado en la idea  
capital de mantener á la América en una dependen-  
cia absoluta, para obtener todas las ventajas que su  
explotación mercantil pudiera reportar.

Como es presumible, estos cuerpos informes de re-  
glas aglomeradas; esta legislación desordenada, sin  
ilación alguna, ocasionaba no pocos inconvenientes, y  
su estudio uniforme y metódico no podía hacerse sin  
gran suma de tiempo y de labor. Además, los reyes  
no podían conseguir por este médio hacer eficaz la  
promulgación de sus reales cédulas y como las exigen-  
cias de las diversas épocas los habían obligado por  
diversas ocasiones á derogar un gran número de dis-  
posiciones, el estudio de la legislación de Indias, pre-  
sentaba sérios inconvenientes, no sólo á las Audiencias  
americanas, á los tribunales inferiores, si no hasta á  
los mismos encargados de aplicarlas en España.

De aquí resultó la necesidad de formar una reco-  
pilación de esas leyes, que comenzó á mediados del  
siglo XVI y se llevó á cabo recién en 1680, después  
de un sinnúmero de tentativas, bajo el reinado de Cár-  
los II, y con cuya pumulgación, dada por Real Cédula,  
en Madrid, á 10 de Mayo de dicho año « que acordó  
fuerza legal á la *Recopilación de leyes de los reynos  
de las Indias* », con cuyo nombre es conocida, las  
colonias americanas quedaron dotadas de un có-  
digo en el cual estaban legislados todos los puntos  
referentes á la administración general de sus provincias.  
(Véase Apéndice b).



Estas leyes, que muestran en el legislador las más sanas intenciones, no obstante el carácter restrictivo que parece haberlas dictado, han sido diversamente juzgadas y apreciadas por sus distintos comentadores.

Pero, como bien dice el distinguido catedrático de la materia en nuestra Facultad, doctor Montes de Oca (M. A.), todo juicio absoluto en punto á legislación es incompleto y por consiguiente equivocado. El criterio del legislador está siempre dominado por infinidad de circunstancias que se entrelazan y combinan, y solo puede hacerse responsable del acierto que demuestra para encontrar la resultante de ellas. De ahí, que, la legislación de Indias no es hija exclusiva del capricho individual de sus autores; es, además, el fruto de las ideas de la época y de la atmósfera social que envolvió todas las instituciones.

Podrán censurarse, entonces, las disposiciones aisladas que han exagerado absurdamente el despotismo monárquico y el principio de la ciega obediencia de los vasallos; podrá aplaudirse el humanitarismo que revelan algunos preceptos y la cordura y precisión que encieran otros;—pero no podrá hacerse la crítica de la economía general de la legislación de Indias, sin inquirir previamente si las bases en que se apoya, se armonizan con las tendencias de la sociedad y el grado de civilización alcanzado en los tiempos en que se dictó.

Procediendo de esta suerte, se encuentra que el Código de Indias traduce, con la fidelidad exigible en las obras humanas, el estado social de España y las ideas

dominantes respecto á sus conquistas de ultramar, y consulta, en cierto modo y bajo ciertos puntos de mira, las necesidades mismas de las colonias americanas. (1).

En España lo mismo que en los demás países de Europa, va expirando el feudalismo al paso que los poderes se centralizan al rededor del trono. Dividida siempre é imposibilitada su unidad territorial por la configuración física de su suelo, por las grandes cordilleras que la atraviesan separándola en multitud de regiones naturalmente aisladas, é invadida sucesivamente por los moros y los judíos que convirtieron-la en un inmenso campo de batalla por espacio de más de siete siglos — desde 711 hasta 1492 — y desalojada de la península la religión cristiana por una religión exótica, que provocaba la indignación de sus habitantes, cual era la mahometana;—cuando formado el reino de España por la unión de las coronas de Castilla y de León,—los reyes Católicos establecieron como base de su política dos objetivos primordiales: la unidad monárquica y la unidad religiosa. Para lograr esto último era indispensable arrojar á los moros de sus últimas posesiones:—la cruenta lucha entre cristianos y mulsumanes tuvo su fin en la ciudad de Granada (año de 1492), y los reyes Católicos «cosecharon el éxito de la gigantesca cruzada contra los infieles, que comenzó en los campos de Guadalete».

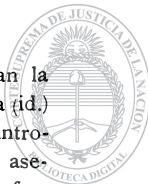




En esa misma época, Cristóbal Colón tocaba las playas del continente americano.

La legislación comenzó, por consiguiente, en circunstancias en que la religión católica reconquistaba la península y apasionaba á sus habitantes de tal suerte que, con la opinión, la concurrencia y el aplauso de la nación se llevaban á cabo medidas que el criterio actual calificaría de monstruosas y que tendían á la pureza de la fé:—La tétrica figura del Cardenal Ximenez de Cisneros, el Tribunal de la Inquisición y el decreto de expulsión de los Judíos, no fueron más que productos espontáneos de los tiempos cuyo espíritu debía servir de pauta á las primeras disposiciones coloniales. (Montes de Oca, confs. cit.)

Hasta 1680, en que, bajo el reinado de Carlos II, se dictó la Recopilación de Indias, continuó imperando en España la omnímoda influencia de la religión, la cual se había hecho sentir desde épocas remotas en ese pueblo, como consecuencia ineludible del aspecto de la naturaleza, de las hambres, las epidemias, los terremotos y otros azotes que, al abreviar el término ordinario de la vida, excitan la imaginación del hombre, que se acostumbra á implorar el auxilio de una fuerza superior, sobrenatural, sin cuyo concurso se considera impotente para dominar los peligros que le rodean. Las supersticiones, sueños, apariciones y visiones eran tan frecuentes en la antigua España, que no hay memoria de una batalla, de un combate, de un simple encuentro, ocurrido durante la larga lucha contra los moros, en que no se citen hechos



singulares, fenómenos, misterios, que anunciaran la voluntad divina precidiendo el éxito de la jornada (id.)

Pero, á principios del siglo XVI empiezan á introducirse en la Iglesia grandes abusos y, segun lo asegura Bossuet, desde siglos atrás se deseaba la reforma en la disciplina eclesiástica; la reforma vino iniciada por Zuinglio en Suiza, Calvino en Ginebra, y Lutero en Alemania; un abismo profundo separó á católicos y protestantes, y la lucha se inició con todos los horrores y atrocidades que acompañan casi siempre á las contiendas que tienen por objeto materia de religión ó de fé. Así, mientras en España el Tribunal de la Inquisición llevaba á sus límites extremos la persecución católica, en Inglaterra, los protestantes imponían á sus rivales las penas de los traidores á la patria, porque consideraban que abrazar el catolicismo era desconocer la soberanía del Rey. Solo los procedimientos variaban: en los países protestantes, los católicos perecían decapitados; en los países católicos, los protestantes sucumbían entre las llamas de las hogueras.

Durante este siglo, Carlos I y Felipe II, encarnaron en el más alto grado el poder avasallador de la religión, imponiendo á su vez el despotismo monárquico y consiguiendo fundir en un solo molde el respeto á la Iglesia y el respeto á la Corona. El primero, que ocupó tambien el trono de Alemania con el nombre de Carlos V, á semejanza de los Reyes Católicos, no tuvo más propósito, más norma de gobierno, que mantener





en alto la influencia prepotente de la Corona y eliminar todo lo que pudiera afectar la estabilidad y omnipotencia de la fé católica:—de ahí la explicación de sus innumerables guerras especialmente contra Francisco I rey de Francia, sus luchas contra los príncipes de los Estados septentrionales de Alemania, y el celo con que persiguió la herejía en los Países Bajos.—El segundo, Felipe II, que le sucedió en el trono en 1555 hasta 1598, no hizo más que seguir los pasos de su predecesor. Su gran preocupación fué dominar la reforma en Europa y hacer que la vieja fé recobrara su esplendor.

De aquí que, nacida la legislación de Indias en los momentos más ardientes de la lucha religiosa, y dictada, en gran parte, por los soberanos que más hicieron sentir el predominio de su autoridad, debía necesariamente traducir las ideas de la época y reflejar esos sentimientos de obsecuente respeto á la corona y á la religión, que, con razgos tan salientes se observaban en la metrópoli.

Si alguna diferencia sustancial se nota entre las leyes vigentes en España y las leyes especiales para la América, ella se caracteriza, dice el doctor Montes de Oca (confs. cit.), por la mayor suma de atribuciones reservadas por el Rey, en los preceptos coloniales, y por el mayor empeño que los mismos demostraron para difundir el imperio de la fé. Y la causa eficiente de esta desigualdad se impone á la más vulgar observación. La América estaba habitada por salvajes cuyas creencias religiosas, armónicas con su civilización, pugna-

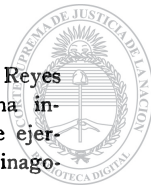


ban con los dogmas del cristianismo. Era indispensable llevar á cabo su conversión y extender el catolicismo en toda la vasta extensión del territorio descubierto.

Este, por otra parte, jamás fué considerado como parte integrante de España.

La colonia, y la metrópoli, dice el distinguido historiador general Mitre, no constituían una sustancia homogénea. La América española en que algunos han creído ver una especie de imperio independiente, era considerada como un feudo personal del monarca español, más que por razón del descubrimiento, por la población y la posesión, por razón de la bula de Alejandro VI que la constituyó en tal, «en virtud de la jurisdicción que como cabeza del linaje humano tenía el Papa sobre el mundo» segun la doctrina del más profundo comentador de la constitución colonial: Solórzano.

«La máxima fundamental de la jurisprudencia española en cuanto concierne á la América, escribe Robertson, es que todo lo adquirido en ese país pertenece á la corona no al Estado ó á la Nación. La bula de Alejandro VI, que es como la carta magna sobre la que España funda sus derechos, confirió en donación pura á Isabel y Fernando, todos los países que habian sido y fueren descubiertos. Estos príncipes y sus sucesores se consideraron constantemente como propietarios absolutos de los vastos territorios conquistados en el nuevo mundo por el valor de sus súbditos.» (Véase Apéndice c)



En tales condiciones, era natural que los Reyes consideraran sus posiciones coloniales como una inmensa factoría en que su omnimoda voluntad se ejercía sin contrapeso, como un feudo cuya fuente inagotable de recursos servía para mantener en Europa su poderío; para aumentar la prosperidad de la Metrópoli á expensas de las riquezas que extraía de sus posesiones, en la suposición de que la acumulación de los metales preciosos constituía la riqueza de las naciones y cuyo error económico, tuvo sus resultados funestos á la vuelta de poco tiempo.

En síntesis: La Recopilación de Indias no es más que el reflejo del estado social de la época en que fueron dictadas sus numerosas resoluciones, demostrando bien claramente que, en la administración colonial, los Reyes se propusieron dos objetivos primordiales: la propagación de la fé y la explotación comercial. Para lograrlos, se practicó el centralismo mas completo en materia de gobierno; el monopolio más absurdo en materia de intercambio.

II

El absolutismo real predomina sobre todo en ella, y los elementos indispensables para mantenerlo por intermedio de sus representantes. Los Reyes, lo dominaban todo: nombraban las autoridades que habían de asumir el gobierno civil y militar de sus estados; eran los jefes de la Iglesia Americana como Vicarios Apostólicos; llenaban los destinos vacantes; administraban sus rentas; limitaban el comercio á los que lo ejercían con su previa autorización y como para rematar con tal suma de atribuciones, se les conside-

raba Reyes por derecho divino y reputados unidos por Dios mismo, para robustecer en la tierra la autoidad de la fé.



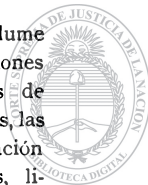
III.—La más alta en cantidad del gobierno colonial despues del Rey, que como hemos visto se le consideraba unido por Dios mismo, era el Consejo de Indias creado por Cárlos V en 1524, para conocer de todos los asuntos eclesiásticos, civiles, militares y de comercio que se relacionaban con sus colonias americanas (Véase Apéndice d). Era el tribunal más notable de la monarquía española, por su dignidad y por sus atribuciones ó facultades; la encarnación más viva del centralismo político y el medio por el cual el Rey ejercía sobre sus posesiones de América su acción despótica y opresora.

Hasta entonces los asuntos de América, se habían tratado en el Consejo de Castilla, como lo asegura Solórzano, ó por comisiones especiales que nombraba el rey para pedirles sus opiniones en cada caso que ocurría:—«cosa digna es á la real magnificencia, segun su loable costumbre, tener tales varones de consejo cerca de sí, y hacer y ordenar todas las cosas por consejos de tales,»—había dicho Alfonso XI, mas conocido con el apodo de Alfonso el Sabio; pero, el creciente desarrollo de la conquista, la extensión del territorio dominado y sus múltiples y variadas exigencias, hizo necesaria la creación de un consejo especial que vijilara de cerca, que interviniera constantemente, en todos los momentos de la vida diaria, por

decir así, de estas colonias; que mantuviera incólume el predominio de España en todas las manifestaciones de su actividad, imposibilitando que estas tierras de una fertilidad gigantesca, mataran con sus productos, las producciones españolas, prohibiendo sin autorización previa del monarca, la entrada de los extranjeros, limitando su comercio única y exclusivamente con la península, y en fin todo aquello, aun por insignificante que fuera, que importara un signo de bienestar ó de adelanto:—De ahí, la necesidad de la creación del Consejo de Indias.

Componíase este Consejo, de veinte y un miembros superiores y varios oficiales principales, entre los que figuraban, un Presidente: el Gran Canciller, que era el más alto funcionario de la corporación, ocho consejeros togados, de nombramiento régio, un fiscal, dos secretarios, un teniente del Gran Canciller, tres relatores, un escribano de Cámara, cuatro contadores, un tesorero general, dos solicitadores, un cronista mayor y cosmógrafo, y otros funcionarios de menos importancia, como un catedrático de matemáticas, un iniciador de procesos, un abogado y procurador de pobres, un capellan y un alguacil.

Eran calidades requeridas para ser miembro de esta alta corporación, estar versado en los ramos de los conocimientos humanos, «*saber historias*» dice Solórzano, conocer especialmente la geografía y la navegación del Nuevo Mundo, requisitos éstos que, como lo recuerda el Dr. del Valle, se hallan especificados en la Ley I, título I, libro II de la Recopilación, que





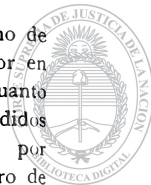
manda que los Consejeros «deben ser aprobados en costumbre, nobleza y limpieza de linaje, temerosos de Dios y escojidos en letras y prudencia»; lo que claramente indica que para ser miembro del Consejo de Indias, se requerían hombres de ciencia, doctos é ilustrados.

Organizado de este modo y reglamentado minuciosamente, este Consejo conocía de todos los asuntos que se relacionaban con las distintas facultades de todo gobierno: ejecutivas, legislativas y judiciales:—ejercía su jurisdicción sobre todas las tierras descubiertas ó que en adelante se descubrieren. La Ley I, título I, libro II de la Recopilación así lo establece: «el Consejo de Indias, dice, tiene la jurisdicción suprema de toda las Indias descubiertas y que se descubrieren, con facultad de ordenar, prévia consulta, las leyes, pragmáticas y provisiones generales y particulares que por el tiempo y para el bien de aquellas provincias convinieren». Como se vé por esta ley, si bien el Consejo tenía amplias facultades para expedir leyes, pragmáticas y provisiones generales y particulares, estaba no obstante obligado á someterlas á la aprobación del Rey—«prévia consulta», dice la ley, sin cuyo requisito carecían de fuerza legal y de eficacia.

Bajo el punto de vista ejecutivo, el Consejo era el jefe de la administración de los asuntos americanos:—nombraba, prévia consulta con el Rey, los virreyes, corregidores, gobernadores, intendentes, oidores, jueces visitadores y de residencia, pudiendo revocarlos

cuando lo creyere conveniente; ejercía el derecho de patronato y tenía en fin una intervencion superior en todo lo concerniente á la Real Hacienda. En cuanto á los asuntos y cuestiones militares, eran atendidos y solucionados por una Junta de Guerra formada por cuatro miembros del Consejo de Indias y cuatro de la Junta de Guerra de España; y cuyas principales atribuciones eran: proveer los oficios militares de mar y de tierra; organizar y dirigir las armadas y flotas que debían escoltar los galeones y navíos con destino á las Indias, y entender como Tribunal militar, de todos los delitos cometidos á bordo y en general de todos los imputados á los militares de Indias, y como Tribunal de apelación, de las causas que correspondían á los Consejos de Guerra. En los juicios de residencia referentes á jefes militares, actuaba como Tribunal de primera Instancia.

En cuanto á sus facultades judiciales, el Consejo de Indias era unas veces Tribunal de primera Instancia y otras de segunda. Juzgaba en primera Instancia de la conducta observada por los virreyes, gobernadores, etc. en el desempeño de su mandato, despues de terminado éste, y, constituido en Tribunal de apelación, resolvía en segunda Instancia de las sentencias dictadas por la Casa de Contratación, en los asuntos comerciales.—Todos los demás Tribunales coloniales se hallaban bajo su jurisdicción suprema, entendiendo tambien en las cuestiones que versaban sobre propiedad y posesión de las encomiendas de indios.—Su fallo era inapelable.





IV.—Si causa de atraso y estagnación en el orden político fué para los pueblos nacientes de América, educados en la ausencia completa de toda aspiración, de todo ideal noble, sin la menor conciencia de los derechos que asisten á todo miembro de una sociedad civilizada, hasta el punto de podersele considerar como esclavo obligado á trabajar en provecho de su Rey ó Señor; si causa de ésto, decimos, fué el régimen despótico y absoluto seguido por España, en el orden económico, causa de males infinitamente mayores fué el monopolio comercial; monopolio que hemos dicho ya, fué de resultados desastrosos tanto para la Metrópoli como para las colonias.

El comercio debía ser exclusivo con la madre patria; se quería que todas las riquezas de las colonias pasaran á la Metrópoli y que España fuera la única proveedora de productos europeos para las necesidades y exigencias de América.

Todas las leyes respondían á este propósito: prohibición absoluta de todo comercio con el extranjero, de toda industria y de todo cultivo, cuyo resultado pudiera dar lugar á competencia con los productos españoles.

Para centralizar este monopolio tan funesto para la madre patria como para sus colonias, creóse en 14 de Febrero de 1503 la famosa Casa de Contratación en la ciudad de Sevilla «para la contratación y negociación de las Indias y de Canarias y de las otras islas que se habían descubierto y se descubriesen, á la cual se habían de traer todas las mercaderías y otras cosas



que necesarias fuesen para la dicha contratación, en las que se hubieren que llevar á las dichas islas y traer de ellas.» (1)

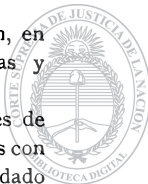
El gobierno de los asuntos de esta Casa (Montes de Oca, confs. cit.) en su interior y en sus relaciones con los mercaderes, flotas y armadas, estaba encomendado según la Ley II, título I, libro IX de la Recopilación de Indias, á una Real Audiencia, compuesta de un Presidente, tres jueces oficiales, Tesorero, Contador y Factor, tres Jueces letrados y un Fiscal. A cargo de este Tribunal corría, como lo dice la Ley XIV: «lo relativo á la navegación, trato y comercio de las Indias», fiscalización de las mercaderías importadas ó exportadas, derechos que debían abonar, naves que debían partir, su capacidad, porte y derrotero, en fin, todo lo relativo al comercio colonial, lo primordial como lo secundario, lo principal como lo ínfimo. La Casa de Contratación tenía además, facultades judiciales para juzgar los asuntos civiles y criminales que se suscitaban con motivo del comercio colonial.

---

V.—Antes de la creación del Virreynato del Rio de la Plata, las Provincias que más tarde debían formarlo constituían tres gobernaciones: la de Buenos Aires que comprendía las colonias fundadas en el litoral de los rios que desembocan en el Plata: Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fé, Corrientes, Mon-

---

(1).—Cédula fechada en Alcalá de Henares—citada por *Antunez* en su Memoria histórica sobre la legislación y gobierno del comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales.





tevídeo:—la de Tucumán que abarcaba las Provincias del Centro y del Norte: Córdoba, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Salta;—y la de Cuyo, dependiente de la Capitanía General de Chile, formada por las Provincias de Mendoza, San Juan y San Luis.

La vasta extensión de territorio que comprendía las dos primeras, extendiéndose del lado Oriental de la Cordillera, desde el Rio Desaguadero hasta las costas del Océano Atlántico, hallábase bajo la autoridad directa e inmediata del Virrey del Perú, con asiento en la ciudad de Lima; es decir, á cerca de mil leguas de distancia de Buenos Aires.

Demás está decir que, una organización semejante tenía que ser deficiente lo mismo para los asuntos exteriores que para la propia seguridad. La protección del Virrey del Perú era tardía y siempre incapaz, y si exceptuamos á Cuyo que dependía de la Audiencia de Chile, en el orden judicial, no había más Audiencia para el resto del país,—litoral, centro y Norte,—que la de Charcas, pues, si bien en 1661 se erigió una Audiencia en Buenos Aires, fué ella suprimida poco despues, viniendo recién á establecerse en 1783.

Estos inconvenientes que ya empezaban á hacerse notar desde mediados del siglo XVIII, unidos, á la enorme distancia de una población á otra; los pocos y difíciles medios de comunicación, causas frecuentes de desprestigio y de desobediencia á la autoridad del Virrey; el gran desarrollo que adquirió el contrabando

en Buenos Aires por su ventajosa situación en la boca de un gran estuario y por las dificultades que había y lo costoso que era el transporte por tierra, de las mercaderías desde Portobello, único puerto habilitado en toda la América para el comercio con la Metrópoli; las invasiones de los portugueses que pretendían extender su dominación hasta la desembocadura del Río de la Plata; el desprecio con que los Virreyes del Brasil y los jefes subalternos se burlaban de los Gobernadores de Buenos Aires; las frecuentes correrías de piratas y la ocupación injustificable y contra todo derecho de las Islas Malvinas por los ingleses,—decidieron á la Metrópoli á la creación de una autoridad suprema con asiento en Buenos Aires y á estilo de la que existía en el Perú, con el título y facultad de los Virreyes.

Un acontecimiento imprevisto anticipó la adopción de esta medida de suma trascendencia.

Don Juan José de Vértiz, á la sazón gobernador de Buenos Aires; de origen americano, hombre de recto criterio y espíritu progresista, exasperado por los continuos avances de los portugueses que llegaron á ocupar el territorio de Río Grande y de la Banda Oriental, organizó una expedición en el año 1773 con los escasos elementos de fuerza que pudo reunir, consiguiendo detener por algun tiempo las incursiones de los portugueses; pero, aumentadas de un modo considerable las fuerzas enemigas, nada pudo Vértiz y tuvo que replegarse. Como contestaran los portugueses con el silencio á los repetidos reclamos del Rey de España,





resolvió éste, obtener por la fuerza el reconocimiento de sus derechos ultrajados y organizó al efecto una numerosa expedición bajo las órdenes del teniente general don Pedro de Zaballos, Gobernador que había sido de Buenos Aires y de Madrid, trayendo consigo el título de Virrey y la Cédula ereccional del nuevo Virreynato.

Zaballos se apoderó de la isla de Santa Catalina, cayó enseguida sobre la Colonia del Sacramento que se rindió á discreción despues de cinco dias de sitio (Mayo de 1777) y cuando dirigíase á Rio Grande, para concluir una vez por todas con los continuos abusos de los portugueses, recibió orden de suspender las operaciones en virtud del tratado de paz de San Ildefonso, firmado entre España y Portugal el 11 de Mayo de 1778, y por el cual, la primera reconocía el dominio de Portugal sobre el Rio Grande, renunciando el Portugal para siempre á sus pretenciones sobre la Colonia del Sacramento.

Así quedó erigido el Virreynato de Buenos Aires, el cual, por la Real Cédula ereccional de 8 de Agosto de 1776, se dispuso, se formara con las gobernaciones del Rio de la Plata, Paraguay y del Tucumán, de la Presidencia de Charcas, las provincias de su distrito y los territorios de Cuyo, que se segregaban por la misma cédula del reino de Chile á que habían pertenecido hasta entónces. Esta extensa comarca representaba el territorio que ocupan hoy cuatro naciones: República Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay, incluso la provincia de Rio Grande perteneciente al

Imperio del Brasil (devuelto poco despues al Portugal por el tratado de San Ildefonso), y por último, la Patagonia y la Tierra del Fuego. Toda esta gran región quedaba limitada al sud por los mares australes, al norte por la línea divisoria que forma el Guaporé, entre Bolivia y el Perú, al poniente por la cordillera nevada de los Andes, al este por el Atlántico en la parte meridional y en la septentrional por los grandes ríos Uruguay, Paraná, Paraguay y sus tributarios, formando así la barrera entre el Brasil y los territorios españoles. Tales fueron los límites del Virreynato del Rio de la Plata.

—

VI.—Los virreyes eran los representantes directos de la corona y por consiguiente, la autoridad más alta de las colonias americanas. Solórzano los compara con los Prefectos del Pretorio, los Sátrapas de Persia y los Bajá de Turquía.

Estos virreyes, no solo representaban la persona del monarca, sino que tambien gozaban de todas las prerrogativas de la corona en toda su extensión, cada uno dentro de los límites de su gobierno, siendo jefes de la administracion y del ejército, verdaderos déspotas, con una corte semejante á la de Madrid, guardias de infantería y de caballería, una numerosa servidumbre, banderas propias y jurisdiccion en países cuya verdadera situacion é intereses desconocian por completo.

Estaban encargados de la gobernacion y defensa de su distrito; del buen tratamiento de los indios, del recaudo, administracion y cobranza de la Real Ha-



cienda; ponían en ejecución las Reales Cédulas; concedían encomiendas; proveían empleos; desempeñaban el vice-patronato en los asuntos eclesiásticos; en materia militar eran Capitanes Generales, siendo por consiguiente, jefes de las fuerzas de tierra y de las de mar estando en viaje para América. En los casos graves despachaban con el nombre y el sello del Rey; presidían las Audiencias, únicos tribunales que contenían su absoluta autoridad y firmaban las sentencias, si bien no votaban. En una palabra,—tenían todos los poderes de la Corona excepto aquellos que expresamente les estaban vedados. Así, les era prohibido: contraer matrimonio en el lugar de su destino, comerciar, ser propietarios y asistir á bodas ó entierros,—disposiciones éstas, muy poco respetadas en la práctica, pero que demuestran que lo que la ley había querido, era que las funciones de los Virreyes se ejerciesen sin contraer vínculo alguno ni con la tierra, ni con la sociedad que gobernaban; para cuyo efecto, se limitaba en tres años la duración de su mandato y eran amovibles á voluntad del Soberano. Al terminar sus funciones, se les sometía á un juicio de residencia y si no eran destituidos por mal desempeño en el ejercicio de las mismas, pasaban á ejercer otros cargos en la Metrópoli ó en sus posesiones de América. (Véase Apéndice *c*).

---

VII.—Creado el Virreynato del Rio de la Plata, se hizo sentir la necesidad de una division administrativa en el vasto territorio que aquel abarcaba por dis-

posición de la Real Cédula de 8 de Agosto de 1776.

A tal objeto, en 1782 se dictó la Ordenanza General de Intendentes del virreynato de Buenos Aires. Por ella, se dividía el virreynato en ocho intendencias, las que partiendo de norte á sur, se llamaban: La Paz, Cochabamba, Charcas, Potosí, Paraguay, Salta, Córdoba y Buenos Aires. Las cuatro primeras componían el Alto Perú, y las tres últimas que forman hoy el país Argentino, comprendían varias subdelegaciones: la Intendencia de *Salta*, las subdelegaciones de Tucumán, Santiago, Catamarca, Jujuy, Orán y Tarija; la de *Córdoba*, las subdelegaciones de la Rioja y Cuyo, que comprendían los corregimientos de Mendoza, San Juan y San Luis; y por fin la de *Buenos Aires*, que comprendía las subdelegaciones de Santa Fé, Entre Ríos y Corrientes; quedando dependientes del Virrey, el Uruguay, Misiones, Moxos y Chiquitos.

Dos de estas intendencias tenían una peculiaridad especial; la de Charcas, que debía ser gobernada por el Presidente de la Audiencia, por lo que, más tarde tomó el nombre de Presidencia; y la de Buenos Aires, que era gobernada por el Intendente, quién además de ejercer las funciones gubernativas en el territorio de su jurisdicción, era jefe de la administración rentística de todo el territorio del Virreynato ó sea el Presidente de la Junta de Ejército y Hacienda—tribunal que controlaba y fiscalizaba á todos los funcionarios en materia de rentas. (Montes de Oca. Confs. cit.)

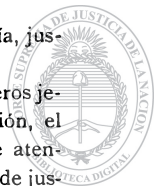
Las facultades gubernativas otorgadas á los Inten-



dentes se extendían á los cuatro ramos de: policía, justicia, hacienda y guerra.

Por lo que respecta al primero, eran verdaderos jefes de policía en el territorio de su jurisdicción, el que debían visitar frecuentemente con el fin de atender á sus necesidades generales. En materia de justicia, eran Jueces de Provincia; sus facultades abarcaban todo el territorio de su mando, á diferencia de las de los Alcaldes Ordinarios que estaban limitadas á la ciudad en que residían; fallaban en primera Instancia y eran sus sentencias apelables ante las Audiencias. En materia de hacienda, las atribuciones de los Intendentes eran muy vastas: salvaban el límite de lo que era propio del tesoro general y tocaban á lo peculiar de la vida comunal; eran encargados de recaudar las rentas públicas y controlar todas las erogaciones; y, no sólo se ocupaban de todo lo relativo al tesoro general, como acabamos de decir, sinó que también, se inmiscuían en los asuntos comunales interviniendo la Junta de Hacienda en lo relativo á propios y arbitrios,—no obstante ser ésta, atribución capitular,—según lo dispone la misma Ordenanza de Intendentes en su artículo quinto.

En materia de ejército aunque no tenían mando alguno militar, estaban no obstante facultados para administrar las rentas de los ejércitos, como también para pedir ayuda á los comandantes militares, cuando lo creyeren necesario para llevar á cabo providencias relativas á la justicia, la hacienda y la policía.— En resumen: las atribuciones de las Intendencias especial-





mente en materia de hacienda, eran mayores que las de los mismos Virreyes.



VIII.— Las Audiencias Reales eran, segun la expresión del doctor del Valle, las instituciones más acreditadas de la administración colonial. En la época en que empezó á regir la legislación de Indias existian doce en América, organizadas de diversas maneras segun la importancia de las localidades á que se las destinaba. La de Buenos Aires, fundada en 2 de Noviembre de 1661 por Felipe IV y que fué suprimida y restablecida despues en 1773, se componía de un presidente, gobernador y capitán general, tres oidores, un fiscal, un alguacil mayor y un teniente gran canciller; las principales atribuciones eran las propias de los Tribunales de justicia, es decir, conocian y entendían en las cuestiones litigiosas, como Tribunal de primera Instancia en los asuntos de capital importancia y de segunda ó sea de apelación, en los fallados por los Corregidores, Alcaldes de primero y segundo voto y otros jueces. Estas facultades judiciales estaban de tal manera reservadas á las Audiencias que los Gobernadores ó los Virreyes, aunque sus Presidentes, tenían prohibición de entrometerse en los acuerdos y poner obstáculo á sus discusiones. Tratándose de asuntos de justicia las facultades de las Audiencias eran excluyentes de toda otra autoridad (Montes de Oca Conf. cit). Pero esto no quiere decir que sus resoluciones fueran en un todo inapelables. Sus sentencias en las causas civiles, cuyo litigio versara sobre



una suma mayor de seis mil pesos, eran apelables ante el Consejo de Indias. En los demás juicios civiles ó comerciales, la sentencia de la Audiencia terminaba el pleito y del mismo modo se procedía en los asuntos criminales aún en el caso que los acusados fuesen condenados á la última pena.

Entre otras atribuciones de distinto orden, las Audiencias vigilaban la conducta de los Virreyes y hasta los auxiliaban, sirviendo sus miembros de consultores en los casos extraordinarios; vigilaban á los demás tribunales inferiores; conocían de los conflictos de jurisdicción entre los tribunales seculares y los tribunales eclesiásticos; fallaban en apelación de las resoluciones de los virreyes y capitanes generales en los asuntos de gobierno y de policía que se habían hecho contenciosos; formaban juicio de residencia á los funcionarios, excepción hecha de aquellos cuyo nombramiento emanaba directamente del Rey; nombraban y enviaban jueces pesquisadores, en acuerdo pleno y contra cualesquiera autoridad dentro de su jurisdicción territorial; y en fin, hacíanse cargo del gobierno interinamente—este cargo correspondía al oidor más antiguo—en caso de muerte, ausencia ó renuncia de los virreyes, gobernadores y capitanes generales; teniendo á su vez los miembros de tan alto Tribunal las mismas limitaciones que aquellos, como ser: prohibición de contraer matrimonio, sin prévia autorización, en el lugar donde residían, asistir á bodas ó entierros, comerciar, tener propiedades, etc. á fin de asegurar la más recta administración de equidad y de justicia.



IX.— Institución tradicionalmente española, los Cabildos, dice el señor Luis Dominguez, eran corporaciones comunales de origen popular destinadas al gobierno de los intereses locales, en numerosas ciudades de España. Representaban en la monarquía el elemento democrático y fueron el núcleo y centro de las libertades comunales hasta la aparición en el trono español, de la casa de Austria. (1) Pero transplantados, con la tradición referida, al Nuevo Mundo desde los primeros tiempos, ellos han dado lugar á críticas de las más contradictorias.—Para unos: Alberdi, Florencio Varela, Lucio V. López, han sido la cuna de las libertades llegando á compararlos con las comunas de Inglaterra y de la Confederación Helvética, porque se practicaba en ellos, aunque en modesta escala, el gobierno democrático representativo;—para otros, nada más inexacto. Tanto para el Dr. del Valle como para el Dr. López (V. F.). tras del gobierno colonial, no había ni podía haber libertad de ninguna naturaleza. Ni el pueblo elegía, ni los Cabildos tenían la extensión de atribuciones que el Dr. Alberdi les atribuye.

Sin llegar á estos extremos, sostienen otros—no desconociendo las deficiencias de esta institución, ni sus vicios, y que dicho sea de paso eran las que gozaban de más popularidad en la época del coloniage—que la democracia existió en gérmen en los Cabildos y que éstos fueron ocasión y teatro del desenvolvimiento de nuestra libertad. Sustentan esta opinión, nuestro historiador Dominguez, el sabio venezolano Bello y los historiadores chilenos Barros Arana y Vicuña Mackenna.



Por lo demás, esta opinión, dice el Dr. Montes de Oca (M. A.) reposa, al menos por lo que toca á los Cabildos argentinos, en numerosos hechos históricos comprobados, que sirven para explicar el constante y nunca desmentido apoyo que revelaron siempre los criollos de América por la institución de los cabildos.

—Los Cabildos existían en las ciudades y villas; y segun la importancia de éstas variaba el número de regidores.

Los Adelantados al fundar una ciudad estaban facultados para nombrar las personas que debían formar el primer Cabildo, éste á su vez estaba autorizado para nombrar el que debia sucederle y así sucesivamente, nombramiento que tenia lugar el primero de Enero de cada año, bajo la presidencia del gobernador político. Pero á poco andar este sistema de elección experimenta una verdadera transformación:—el cargo de regidor que segun lo acabamos de manifestar se obtenia por nombramiento directo del Cabildo, es puesto en venta en remate público y adquirido por aquel que mejor lo pagase; convirtiéndose además estos cargos, de temporales en perpétuos, pues viendo el Rey lo provechoso que podia ser para la renta el traspaso de ellos, dispuso por la Real Cédula de 1581 que los oficios se vendieran por una vida y otra vida más, entregando al fisco el segundo adquirente, la tercera parte del precio.

Esta forma de traspaso se llamaba *renuncia*.

Mas tarde, en el año 1606, se autorizó por una Cédula la transferencia ilimitada de estos cargos, viniendo de



ahí, los títulos de regidores perpétuos. Por la primera renuncia se pagaba la mitad al tesoro y por las sucesivas la tercera parte.

El único cargo que no era venal á pesar de su importancia era el de Alcalde Ordinario. Es que éstos además de ser los primeros funcionarios del Cabildo, eran al mismo tiempo funcionarios judiciales y los Reyes de España entendían siguiendo la máxima de Alejandro Severo, como dice el Dr. del Valle, que estos oficios no se debían vender, porque si el juez compraba su puesto era natural que despues vendiera su justicia.

—Eran requisitos para ser electo regidor: no debían desempeñar oficios viles, ni haber sufrido disminución alguna en su capacidad civil ó política. Se consideraba oficio vil el dedicarse al pequeño comercio, como, ser: mercaderes, despachantes de comestibles etc.—Era necesaria la vecindad. La ley 6, título 10, libro 4 de la Recopilación de Indias dice que, vecino es aquel que tiene casa poblada, aunque no tenga encomienda de indios; para obtener el derecho de vecindad era menester solicitarlo del Cabildo.

En cuanto á la edad, bastaba tener diez y ocho años.

—Presidían los Cabildos los gobernadores ó corregidores y en su defecto los alcaldes de primero y segundo voto respectivamente.

—Las funciones de los Cabildos eran: electorales deliberantes, administrativas y judiciales.

Los Cabildos, como ya hemos visto, antes de que



los oficios consejiles fueran vendibles, tenían atribución el primero de Enero de cada año de elegir las personas que debían formar el nuevo Cabildo y luego éstas entre sí, á aquellas encargadas de desempeñar los oficios públicos como ser: el de Alcalde Ordinario, el de Hermandad y el de Fiel ejecutor, encargado del buen estado y conservación de los edificios públicos, de la vigilancia de los mercados y del abasto de la ciudad; funcionarios cuyas atribuciones segun Solórzano, eran análogas á las de los ediles curules del tiempo de los romanos.

Esta elección debía necesariamente tener lugar en el mismo local del Cabildo, presidida por el Gobernador á quien bajo penas severísimas le era prohibido hacer presión de ningún género, ni directa ni indirectamente en el ánimo de los electores. No podían ser electos los padres, hijos ó hermanos de los cabildantes, ni tampoco votar el uno por el otro, los casados con dos hermanas. Estaban eliminados también de la elección los extranjeros y los que no fuesen vecinos.

Entre las facultades deliberantes estaban las de dictar y ejecutar todas las ordenanzas para el mejor gobierno de la ciudad. Esta facultad empero no era tan amplia, pues toda ordenanza dictada, requería la confirmación del Virrey ó del Consejo de Indias.

Los propios y arbitrios se hallaban bajo su dirección. Son *propios* segun Bobadilla, las calles y plazas, las casas, tierras y dehesas pertenecientes á la comuna y que el Cabildo podía vender, arrendar etc, Por *arbitrios* entendíanse las sumas extraordinarias que engro-



saban el tesoro, con destino á las necesidades locales.

Entre las funciones administrativas de los Cabildos se encontraban la asistencia pública, la instrucción primaria, el ornato é higiene de la ciudad, los hospitales, las vaquerías etc.

El derecho de vaquería era lo siguiente: diezmadados los campesinos por las grandes pestes desarrolladas durante los primeros años de la colonización, las haciendas que les pertenecían quedaron sin dueño y sin cuidado. Estas haciendas multiplicadas en gran número, convirtiéronse en ganados alzados que llegaban hasta las puertas de esta ciudad. Imposible saber á quien pertenecían y perdidos los derechos de propiedad, establecióse entónces el *derecho de vaquería*; derecho que generalmente se concedía á los que de algun modo acreditaban haber tenido ganado en la época primera y por el cual se hallaban autorizados á matar ganados para vender el cuero y sebo que les sacaban. Para obtener este derecho era necesario el pago de ciertos impuestos.

En cuanto á las funciones judiciales de los Cabildos, éstas eran muy limitadas. Intervenían en los asuntos de poca importancia y resolvían en apelación de las resoluciones de los alcaldes, siempre que el litigio versare sobre la aplicación de sus ordenanzas; desempeñando entónces jurisdicción contencioso-administrativa.

Además de los regidores eran tambien miembros del Cabildo, los Alcaldes Ordinarios. Estos no podían ser más de dos, de primero y segundo voto; los elegía el Cabildo de entre los vecinos más capaces de la

ciudad. Se les llamaba *ordinarios*, porque ejercían la jurisdicción ordinaria, comprendiendo á todos aquellos que no comprobasen el goce de algun fuero especial.

Los requisitos para ser Alcalde eran los mismos que para ser Regidor, solamente que el cargo de este último era incompatible con el del primero. Solórzano refiere un caso de excepción á esta regla. En 1620, siendo virrey del Perú el Príncipe de Esquilache, la ciudad de Lima pidió autorización para nombrar alcaldes de entre sus regidores, siéndole denegada; más tarde se le concedió, para que designara uno sólo de los dos, pero esto fué debido á un préstamo en dinero hecho por el Cabildo á la corona.

En cuanto á los Alcaldes, éstos desempeñaban el cargo durante un año, no pudiendo ser reelectos sino despues de un intervalo de tres años. Sus principales facultades eran las judiciales; entendían de los asuntos civiles y criminales en 1ª. Instancia, siendo sus fallos apelables ante las Audiencias; presidían el Cabildo á falta de gobernador; desempeñaban el gobierno interinamente, hasta tanto se nombrase otro, en caso de ausencia ó muerte del gobernador titular; tenían puesto señalado en las ceremonias y seguían en gerarquía á los Virreyes y Oidores.

El *cabildo abierto* que tan importante papel ha desempeñado en nuestra historia, era la reunión de los vecinos afincados de una ciudad llamados á deliberar con los Cabildantes en las emergencias imprevistas y trascendentales.

Esta institución jamás fué reglamentada por ley al-







guna. Estos consejos abiertos, como los llama Bobadilla, se establecieron en España por la costumbre, pasando luego á América donde se han celebrado repetidas veces.

Hemos dicho tambien en otro lugar, que los gobernadores ó corregidores tenian á su cargo la presidencia del Cabildo. Veamos quienes eran estos funcionarios.

Los gobernadores eran magistrados de inferior jerarquía que los virreyes y gobernaban los centros que se juzgaban de mayor importancia, de las Provincias mayores ó menores, y corregidores, los que actuaban en distritos de menos importancia, donde habían pueblos de indios encomendados.

Estos funcionarios eran de nombramiento régio; y sujetos al juicio de residencia, del mismo modo que los virreyes.

Estaban obligados á prestar juramento, antes de tomar posesión de su cargo, de desempeñarlo con fidelidad, de tratar bien á los indios, de no comerciar ni negociar con el sueldo de sus empleados inferiores. No podían tampoco casarse en el lugar de su residencia sin permiso especial, tener bienes raíces, ni ellos, ni sus hijos, ni sus sirvientes, ni emplear á sus parientes; en una palabra, todas las prohibiciones prescriptas á los Virreyes y Oidores, lo estaban tambien para ellos.

Para los fines del juicio de residencia la ley 8, título 2, libro 5 de la Recopilación, les imponía la obligación de inventariar sus bienes antes de hacerse cargo del mando; otra ley les obligaba á dar fianza para



responder de los abusos cometidos en el desempeño de su mandato.

—La duración del cargo de Gobernador variaba de tres á cinco años; tres años para los que residían ya en América y cinco para los que vivían en España. El sueldo que gozaban era fijado por el Rey.

—Los Gobernadores y Corregidores tenían jurisdicción civil y criminal para conocer en grado de apelación de las resoluciones de los Alcaldes Ordinarios, antes de crearse las Audiencias Reales; estaban encargados de visitar sus provincias con el fin de fiscalizar la conducta observada por los otros funcionarios. administraban justicia y reprimían por sí, los abusos en que hubiesen incurrido; estaban bajo la dirección de los virreyes y podían en muchos casos, hacer caso omiso de ellos y entenderse directamente con el Consejo de Indias.

Esta institución de los gobernadores, dice el Dr. del Valle, respondió á los buenos propósitos de la Corona respecto del gobierno de América y de los naturales; pero desgraciadamente, la realidad no respondió por cierto al anhelo de los reyes y los funcionarios que instituyeron con fines sanos fueron frecuentemente un verdadero azote de los pueblos.

—

X.—Los consulados eran juntas ó corporaciones con jurisdicción mercantil. El de Buenos Aires fué erigido por la Cédula ereccional de 30 de Enero de 1794, bajo los auspicios del virrey Arredondo; y cuya jurisdicción alcanzaba á todo el virreynato.



Era á la vez que un Tribunal de Comercio de 1.<sup>a</sup> Instancia, una Junta económica, protectora, y encargada del desénvolvimiento y desarrollo del comercio, la industria y la agricultura. Componíase de un Prior, dos Cónsules, nueve Conciliarios, un Síndico, un Secretario, un Tesorero, un Contador y otros empleados subalternos, teniendo cada uno un reemplazante en caso de ausencia, muerte, etc.

Como Tribunal de Comercio de 1.<sup>a</sup> Instancia dirimía los conflictos entre comerciantes; siendo apelables sus fallos para ante un Tribunal de Alzada cuando la importancia del asunto excediera de mil pesos; tribunal éste, compuesto por el Decano de la Audiencia y por dos colegas electos por el expresado Decano entre dos listas de candidatos, propuestas por las partes interesadas.

Cuando la sentencia de este tribunal era contraria á la del primitivo, podía entonces recurrirse á un Tribunal de tercera Instancia, compuesto tambien de Decano de la Audiencia y de otros dos colegas elegidos del mismo modo que los del Tribunal de Alzada. Si la sentencia era análoga, el litigio fenecía.

En la imposibilidad el Consulado, de poder atender de un modo conveniente en la vasta extensión de territorio sujeto á su jurisdicción, todos los asuntos y todos los litigios que se suscitaren, facultábalo la ley para designar delegados en las ciudades de mayor importancia; estos delegados, auxiliados por dos colegas entendían en todos los asuntos cuya importancia no excediera de mil pesos, siendo sus resoluciones inapelables.

Como Junta económica tenía las siguientes atribuciones: vigilar el comercio interior; cuidar de que las disposiciones del Rey se cumplieran, facilitar las comunicaciones entre las provincias y fomentar las industrias, etc.

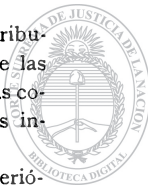
—Los miembros del Consulado eran elegidos periódicamente por los comerciantes; para ser elector se requería la mayor edad, ser de antecedentes honorables, español ó americano y poseer bienes raíces. Estos miembros eran asalariados, proviniendo sus sueldos en su mayor parte, del producto de los impuestos, principalmente el de avería ó sea el medio por ciento sobre el valor de todos los frutos y mercaderías, y duraban en sus funciones dos años. Estos empleos consulares eran obligatorios para los comerciantes, en el caso de rehusarlo sin motivo, se les multaba y aun podían ser apremiados al cargo.

El Consulado de Buenos Aires fué recién suprimido en el año 1862, creándose en su lugar dos Jueces letrados, cuyo número ha sido luego aumentado. Empero como dice un tratadista, (1) el Consulado tendrá que ser devuelto tarde ó temprano á la jurisdicción mercantil, perfeccionado en el tipo del jurado moderno, servido por un secretario y no por un escribano, y emancipado de toda influencia legista. (Montes de Oca, confs. cites.).

---

(1) PEREZ GOMAR — Lecciones de Derecho Mercantil.

---





## CAPITULO II

*Bolívar*



SUMARIO:—I. Revolucion de Mayo.—II. Junta Provisional Gubernativa.—III. Incorporacion de los Diputados—Juntas Provinciales.—IV. Creacion del Triunvirato.—V. Reglamento de la Junta Conservadora.—VI. Estatuto Provisional de 1811.—VII. Asamblea de 1812.—VIII. Segundo Triunvirato.—IX. Asamblea de 1813.—X. Directorio.—XI. Creacion de nuevas Provincias.—XII. Estatuto Provisional de 1815.

I.— Como todas las grandes revoluciones que, á pesar de ser hijas de un propósito deliberado, no reconocen autores, la revolucion argentina, dice Mitre, lejos de ser el resultado de una inspiracion personal, de la influencia de un círculo, ó de un momento de sorpresa, fué el producto espontáneo de gérmenes fecundados, por largo tiempo elaborados y la consecuencia inevitable de la fuerza de las cosas; de causas ó motivos que el Dr. Del Valle, siguiendo el camino trazado por historiadores tan notables como Mitre y López, ha agrupado en motivos sustanciales, entre los que se cuentan, la distincion entre españoles y americanos y su proporcion numérica, la distribucion de la riqueza frente al monopolio comercial y el sistema político administrativo de la colonia; y motivos ocasionales entre los que son de colocar, las dos invasiones inglesas: verdadero punto de partida del



período revolucionario según los historiadores; la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa y la invasión de Napoleón á España que no hizo más que acelerar los sucesos que inevitablemente habían de producirse.

Como causas sustanciales, el aumento de los hijos del país era evidente, dice el doctor Del Valle,— su número pasaba al de los españoles; y esta desproporción numérica entre la raza gobernante y la gobernada, debía ser necesariamente motivo más que suficiente para que esta última, con la conciencia de su fuerza, comenzara á invocar sus derechos contra las injusticias de que eran objeto por parte de la primera. Por otra parte, las clases superiores, los hijos de españoles que habían alcanzado cierto grado de instrucción en Chuquisaca ó en España, no se conformaban con la dependencia é inferioridad de su posición, de ahí ese sentimiento de viva oposición contra los peninsulares que se había desarrollado entre los americanos, motivada por otra parte por la irritante costumbre de que sólo los españoles habían de ser los dueños de los empleos y de los sueldos públicos, haciendo valer para ello títulos de tan buena ley como los que podían invocar los naturales del país. Y no hay porque hablar de la mala distribución de la riqueza y del monopolio comercial. En los primeros tiempos de la colonización, dice el autor de quien extractamos estos apuntes, la pobreza común unía á españoles y americanos; no había comercio; la única industria, era el comercio ocasional de cueros. El



cabildo abogaba por los intereses colectivos cuando enviaba sus procuradores á España para que solicitaran el permiso de comerciar con el Brasil, y con el reino de Angola; pero esta situacion se modificó poco á poco, y cuando el contrabando dió aliento á las industrias y desarrolló las transacciones obediendo á leyes naturales, el americano se dedicó á la ganaderia y fué el único y verdadero producto del país, mientras que el español, favorecido por sus relaciones con la administración pública aquí y en la península, monopolizaba los giros y negocios comerciales. Las divergencias y oposiciones de estos intereses se manifestó en muchas ocasiones, hasta que el doctor Moreno tomó la iniciativa para cambiar esta situacion, reuniendo á los estancieros y aconsejándoles se presentasen al rey reclamando el comercio libre y los puertos abiertos. Los hacendados, dice el doctor López (V. F.) aceptaron la iniciativa y la dirección del doctor Moreno; y éste redactó entonces esa famosa «Representacion de los Hacendados» que es uno de los más brillantes y nutridos escritos trazados por la pluma incomparable de este elocuentísimo patriota.

Como causas ocasionales, figuran en primera línea las dos invasiones inglesas. Estas dieron lugar á que no solo los hijos del país tuvieran el más pleno conocimiento de sus propias fuerzas, sinó que fué entonces, como dice el doctor del Valle, cuando se rompió la tradicion de sumiso respeto hacia el representante de la persona real y cuando se descubrió la tribuna donde la opinión habia de manifestarse en ade-





lante;—nos referimos á los cabildos abiertos de 1808 y 1807 en los que se destituyó al virrey Sobremonte, designándose en su reemplazo á Liniers, persona más digna de la confianza pública que su antecesor.

A parte de ésto, no menos influyeron al alzamiento de Mayo, la independendencia norte americana y la revolucion francesa, concurriendo á la revolucion argentina con el ejemplo y con la propaganda. Pero, los acontecimientos que más precipitaron la hora de la revolucion fueron la abdicación de Cárlos IV y de Fernando VII, el nombramiento de José I, la resistencia popular, la invasión del ejército francés, la creacion de juntas de gobierno que no eran sinó juntas de guerra para la defensa del territorio, sin carácter nacional ni poder legal segun los principios de la monarquía absoluta establecida en España. Junto con estas noticias, recibidas y divulgadas en Buenos Aires á pesar de todo el sigilo con que se las quiso rodear, el último momento de la vida colonial había llegado. Los sucesos se desarrollaron con una celeridad asombrosa; y mientras el virrey Cisneros, el 18 de Mayo, para aquietar los ánimos declaraba, en un manifiesto, el propósito de fidelidad á la Corona de España *aún cuando no le quedaran otras posiciones que las de América*, los patriotas se reunieron, dando, de acuerdo con los jefes militares que participaban de sus ideas, por caduca la autoridad de la Corona de España en América, resolviendo por lo tanto establecer un gobierno propio evitando en cuanto fuera posible trastornos dolorosos; recurriendo para este fin á la convo-



catoria de un cabildo abierto para que se decidiera cuales eran los mejores medios para asegurar la quietud pública. El virrey y el Cabildo vacilaron ante esta petición, pero, forzados por el imperio de las circunstancias, cedieron al fin, consintiendo en que se convocase al vecindario para que resolviera si había de organizarse una Junta de Gobierno, ó había de continuar Cisneros á la cabeza del virreynato. El día 22, dice el doctor López, se reunió en los Altos del Cabildo, una Asamblea compuesta de los principales empleados, el Obispo, los Canónigos, los jueces de la Audiencia ó Tribunal superior, los municipales y los vecinos afincados, citados todos por carta escrita, á discutir libremente el asunto.

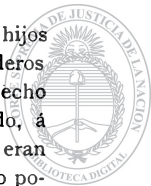
Y así se hizo:—«Los abogados argentinos Passo y Castelli, dice el autor citado, tomaron la voz por los demás amigos y sostuvieron que Cádiz no tenía derecho á gobernar la América: que Buenos Aires debía nombrar un gobierno compuesto de sus propios hijos. El obispo Lue contestó en nombre de los españoles, que España era la que había conquistado, poblado y civilizado á la América; que por consiguiente, mientras hubiese allá un pueblo, provincia ó ciudad, libre de franceses, en esa ciudad recaía el derecho de gobernar en nombre de la Metrópoli.

«A este argumento contestó Castelli que, los españoles que habían conquistado, poblado y civilizado á la América, no eran los españoles que se habían quedado en España, y mucho ménos los de Cádiz, sino los que habían venido á América y formado familia

en ella; que sus hijos eran los que se llamaban hijos del país; y los que por consiguiente, eran herederos únicos y legítimos de los conquistadores, con derecho propio á gobernar la tierra en que habían nacido, á falta de Rey: que como los vecinos de Cádiz no eran ni padres, ni hijos de los primeros pobladores, no podían invocar el derecho que les quería atribuir el Obispo.

«El fiscal de la Audiencia señor Villota, hombre muy respetable, conoció que además de ser irritantes las razones del Obispo, no podía negarse que Castelli, aprovechando el mismo tema, los había echado por tierra; y dijo que no era ese el aspecto en que debía tomarse el asunto, sino otro muy diverso: que nadie podía negar que Buenos Aires no era sino una de las ciudades del virreynato y que habiendo muchas otras con igual derecho á ser oídas, la justicia reclamaba que nada se resolviese sin consultarlas previamente, conservándose entre tanto el gobierno en manos del señor Virrey.—Claro era que el Fiscal se proponía ganar tiempo para que á pretexto de consulta, viniesen de Montevideo y otras partes, fuerzas y elementos con que sostener al Virrey y someter á los patriotas.

«Levantóse entonces el doctor Passo y dijo que el Fiscal tenía razón al considerar á todos los pueblos del Virreynato como miembros de una familia, pues en efecto, lo eran; lo que hacía que, en casos graves y urgentes que pueden complicar las cosas con ruina general, el derecho establecía que los hermanos pre-





sentes obraran en favor de los ausentes y tomasen su nombre para salvar los intereses comunes: seguros de que los ausentes, cuando se viesen libres, habían de aprobar lo hecho en su favor.»

Este discurso tuvo un éxito admirable, pero como el debate se iba postergando demasiado, se propuso que se votase «si había de formarse ó nó un gobierno de Junta en lugar del gobierno del Virrey», como así se hizo, encargándose al Cabildo para que nombrase la Junta que debía gobernar en su lugar. Y aquí es, donde aquella corporación empieza á torcer los procedimientos, como debía suceder, por que no era una corporación elegida por el pueblo y no representaba ni sus intereses ni sus aspiraciones, (Del Valle.) Pero, no se detiene en ésto, sinó que despues de dejar constancia de la resolución de la asamblea tal cual la hemos consignado, decide proceder en sentido contrario, burlando la confianza con que se le había honrado. El acta dice: «Y tratando los señores de conciliar los respetos de la autoridad superior con el bien general de estas interesantes provincias...acordaron, sin embargo de haber á pluralidad de votos, cesado en el mando el Exmo. Señor Virrey, no sea separado absolutamente, sinó que se le nombre acompañado con quienes haya de gobernar hasta la congregacion de los Diputados»; como así se hizo, estableciéndose un *Gobierno de Junta* compuesto de cinco vocales, bajo la presidencia del mismo virrey. Pero esto no satisfizo á la opinión pública. La eliminación completa de Cisneros se imponia. Los cuer-



pos cívicos reunidos en sus cuarteles, dice el señor Domínguez, habían querido muchas veces salir á pelear con las armas, la deposición de Cisneros y la formación de una Junta de su entera confianza, logrando sus jefes contenerlos con dificultad. En vista de esta agitación, Castelli y Saavedra habían ido á imponer á sus colegas de la Junta de lo que pasaba y á proponerles la renuncia colectiva. En la misma noche del 24, viendo Cisneros que no podía hacerse obedecer, hizo reunir al Cabildo y presentando su renuncia de Presidente, pretendió mantenerse como Virrey.

El 25 muy temprano, se reunió el Cabildo para tomar en consideración esta renuncia, y contestó en el acto que no la aceptaba, y que la Junta hiciera uso de la fuerza para hacerse respetar. Este fué el momento de la revolución.

«En estas circunstancias, dice el acta de aquel día, ocurrió multitud de gente á los corredores de las casas capitulares, y algunos individuos en clase de diputados se apersonaron en la Sala, exponiendo que, el pueblo se hallaba en conmoción y *que de ninguna manera se conformaba con la elección de Cisneros*, que el Cabildo se había excedido en sus facultades y que para evitar desastres que ya se preparaban, era necesario variar la resolución comunicada al pueblo» El Cabildo pretendió intentar un último esfuerzo, pero alarmado ya con el peligro imprudentemente provocado, cedió al fin, no quedándole más camino que aceptar la intimación escrita y firmada por una multitud de ciudadanos, en la que se les intimaba que el



pueblo no habiendo aceptado los nombres de la nueva Junta, exigía que se nombrase otra, compuesta de don Cornelio Saavedra como presidente, doctor don Mariano Moreno, y doctor don Juan José Passo, como ministros secretarios: y como vocales, don Juan José Castelli, don Manuel Belgrano, don Miguel de Azcuénaga, don Manuel Alberti, don Juan Larrea y don Domingo Matheu, con el nombre de «Junta Gubernativa Provisional del Río de la Plata.»

—

II—Esta Junta vino á ser pués, la primera entidad política, propia que sustituyó la del Virrey. Sus facultades y deberes en materia de gobierno, guerra y hacienda fueron tan ámplias como las virreynales, aunque con las especiales limitaciones de que el Poder Ejecutivo sería ejercido por la Junta; que el Cabildo vijilaría su conducta; que la Junta llenaría por sí misma sus vacantes; que el poder judicial sería independiente; que se daría publicidad al movimiento del tesoro público, y finalmente, «que la Junta no podría imponer pechos, gravámenes y contribuciones al vecindario sin consulta y consentimiento del Cabildo».

Otro hecho fundamental que conviene marcar, es el carácter provisorio de la Junta, pues, solo debía durar hasta la organización del congreso, que era uno de los objetos principales de su formación. También debe notarse como característico de este gobierno, la facultad reservada por el Cabildo, de vigilar la marcha de la Junta, para separar, llegado el caso, los

miembros que no cumpliesen con sus deberes, ó se apartasen de las reglas enunciadas.

Aunque excluida de lo judicial y limitada en su facultad de imponer contribuciones, era esta organización, propicia para los fines revolucionarios y los esenciales de la lucha en que se iba á entrar, sin duda, pero era inadecuada para corresponder á las exigencias de la libertad civil y política de los ciudadanos.

Siete días después de instalada, la Junta Gubernativa Provisional, creó *La Gaceta* para dar al país una exacta noticia de sus procedimientos; pero su verdadero objeto, era propagar las ideas liberales y fortalecer el patriotismo.

Poco después creó la biblioteca pública y la academia de música, sin olvidar la instrucción primaria; cuidó de los intereses comerciales é industriales; suprimió algunos derechos de exportación, y creó un fondo permanente para ayudar la explotación de los metales de Famatina, autorizando la exportación de la plata y del oro amonedados, para facilitar los cambios y saldar el comercio exterior.

—

III.—Sabido es, que entre las resoluciones de la asamblea del 22 de Mayo, figuraba, la de que los señores de la Junta, debían despachar órdenes, á los jefes del interior, con el encargo de que, por el intermedio de los respectivos Cabildos, se convocara la parte principal y más sana del vecindario, para que reunida en asamblea, eligiera sus representantes y los enviara «á la mayor brevedad á esta Capital, para establecer la





forma de gobierno que se considerara más conveniente.»

En consecuencia de esta convocatoria, principiaron á llegar á Buenos Aires los diputados de las Provincias, pero, como se retardara la instalación del Congreso por el escaso número de las ciudades representadas, los diputados que habían llegado, bajo la dirección del Deán Funes, exigieron su incorporación á la Junta. Reinaba entónces entre los miembros de ésta, la división más profunda en dos tendencias distintas, á la cabeza de cada una de las cuales se encontraba Saavedra y Moreno. El grupo saavedrista apoyó la pretensión de los diputados, obteniendo el triunfo, y así surgió la SEGUNDA JUNTA, con la oposición de Moreno que renunció su cargo (18 de Diciembre de 1810).

Uno de los actos principales de esta nueva Junta, fué el decreto del 10 de Febrero de 1811. Se establecían por este decreto, Juntas de dos categorías: las provinciales que debían constituirse en las capitales de provincia, y las subalternas que correspondían á cada ciudad ó villa, todas ellas con funciones análogas á la Junta Central y con derecho á designar representantes en el Congreso.

La particularidad de este decreto, es el reconocimiento expreso que en él se hace del derecho electoral del pueblo, pues es á éste á quien se atribuye el nombramiento de los miembros de las mencionadas Juntas. (1) Estas, debían componerse de cinco miembros: el gobernador ó intendente en ejercicio y cuatro colegas elegidos por el pueblo (art. 1º). Las juntas su-

---

1. — MONTES DE OCA CONF. CITE





balternas debían componerse de tres miembros: el comandante de armas y dos socios que el pueblo eligiría (art. 6°).

En las juntas provinciales residía toda la autoridad del gobierno de la provincia, siendo de su conocimiento los asuntos que por las leyes y ordenanzas pertenecían al Presidente ó Gobernador intendente ; *pero con entera subordinación á la Junta Superior* (art. 2°). A las juntas subalternas se les atribuía el conocimiento de los asuntos en que hasta entónces entendían los subdelegados de la Real Hacienda (art. 7°). Las juntas subalternas dependían de las de provincia (art. 8°).

Encargaba especialmente á las juntas que velaran por la tranquilidad, seguridad y unión de los pueblos y que mantuvieran y fomentaran el entusiasmo por la causa común (art. 12); que disciplinaran é instruyeran las milicias (art. 13); que calcularan los recursos de cada ciudad para cuando fueran requeridos (art. 14), y que entendieran en los alistamientos y reclutas (art. 15).

Les prohibía intervenir en los negocios judiciales ó de competencia de los cabildos, y expresamente declaraba la incompatibilidad entre el puesto de miembro de la junta y el de alcalde ordinario (art. 17) y la inhabilidad absoluta de los eclesiásticos seculares ó regulares, lo que no obstaba á que el autor del Reglamento, deán de una catedral, fuera miembro de la Junta Superior de la Capital (Del Valle).

La elección de los miembros debía hacerse por



intermedio de los alcaldes de barrio, quienes debían citar á los vecinos de sus respectivos cuarteles para que concurrieran á prestar libremente su voto por un elector.

Los electores designados en cada cuartel debían reunirse, el mismo día, en la sala capitular, para proceder al nombramiento de los vocales de la Junta (art. 22). En caso de empate la Junta Central era la llamada á decidir (art. 23).

---

IV.—A poco andar, la nueva Junta Central no pudo mantener el poder que erróneamente había querido ejercitar. Sus mismos desaciertos, la asonada del 5 y 6 de Abril de 1811 y la derrota del ejército patriota en los campos de Huaquí á inmediaciones del *Desaguadero* (20 de Junio de 1811), coincidiendo con los movimientos de la escuadrilla española y la amenaza de las tropas portuguesas sobre la provincia Oriental, habían desprestigiado de tal manera á esa corporación omnímoda é irresponsable que, reconociendo ella misma su incapacidad y la imposibilidad de mantener el poder en su manos, adelantándose á los acontecimientos, dictó el decreto de 23 de Setiembre, por el que se constituyó el *Primer Triunvirato*, compuesto de los señores D. Feliciano Chiclana, D. Manuel Sarratea y D. Juan José Passo; conservándose la Junta una especie de poder tutelar bajo el nombre de *Junta Conservadora*.

---

V.—Para organizar esta última regularmente, fué



comisionado el deán Funes, quién, instado por el Triunvirato que reclamaba reglas de gobierno que fijaran sus atribuciones y su responsabilidad, proyectó el conocido «Reglamento de la Junta Conservadora», promulgado el 22 de Octubre de 1811: primer sistema concreto de organización constitucional, ensayado después de la revolución de Mayo.

En este reglamento, aparece por primera vez la división de poderes que había divulgado Montesquieu: legislativo, judicial y ejecutivo. La Junta Conservadora se reservó las funciones del primero, atribuyéndose la facultad de organizar el Ejecutivo y fiscalizar su conducta. Esta Junta, según el artículo primero, debía formarse de los diputados de las *Provincias Unidas*, existentes en la capital, pudiendo incorporarse á ella los que llegaran sucesivamente. Los diputados cesarían desde la apertura del Congreso General que se anunciaba.

Pero, «por ese Reglamento, dice el doctor López, el Triunvirato quedaba no sólo coartado, sinó completamente sojuzgado á la voluntad y jurisdicción de la Junta. Se le encomendaba aparentemente la ejecución de las leyes y de las medidas que sancionase la Junta: la policía, el nombramiento de empleados subalternos y los asuntos de guerra; subordinado en todo ésto, á la aprobación previa de la Junta. Pero á la Junta correspondía *nombrar* los miembros del Triunvirato, cada tres meses, uno: *acusarlos y enjuiciarlos*, destituirlos y castigarlos. Entre tanto — los vocales de la Junta eran inviolables. No podían ser



acusados ni juzgados sinó en su propio seno. En las ceremonias religiosas y funciones solemnes, les correspondía ocupar el sitio de los Virreyes; de manera que, no sólo era un Poder Electoral Soberano, sino una corporación dictatorial como la Convención francesa ó como un Consejo Veneciano.»

—

VI.—En presencia de este reglamento, el Triunvirato, decidido desde el primer momento á rechazar las ofensivas resoluciones en él insertas, declaró atentatorias las pretensiones de la Junta Conservadora y aprovechándose de la fuerza pública puesta en sus manos y el descrédito en que había caído aquella corporación, disolviola imperativamente á inspiración de Rivadavia en 7 de Noviembre de 1811.

Disuelta la Junta, el Triunvirato abrogándose facultades constituyentes, procedió por sí, á dictar en 22 de Noviembre de 1811, el «Estatuto Provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Rio de la Plata á nombre del Señor Fernando VII.»

En este Estatuto están bosquejados á grandes rasgos los principios fundamentales del sistema representativo. Precedido de un preámbulo en el que se describe con calor la situación del país y se explican los motivos del golpe de Estado, en nueve artículos estatuye: 1° que los vocales del gobierno tendrán que removerse alternativamente cada seis meses, por terceras partes, atribuyéndose la elección á una Asamblea General compuesta del Ayuntamiento de Buenos Aires, de los representantes que nombren los



pueblos y de *un número considerable de ciudadanos*, elegidos por el vencidario de la Capital; 2° que el Gobierno no podrá resolver los graves asuntos del Estado sin acuerdo expreso de la Asamblea General; 3° que el Gobierno está obligado á tomar las medidas conducentes para acelerar la apertura del Congreso; 4° que siendo la libertad de la imprenta y la seguridad individual, el fundamento de la felicidad pública, forman parte del Estatuto los decretos en que se establecen; 5° que los asuntos de justicia corresponderán exclusivamente á los magistrados; 6° que al Gobierno corresponde velar sobre el cumplimiento de las leyes y adoptar cuantas medidas crea necesarias para la defensa y salvación de la patria, segun lo exijan el imperio de la necesidad y las circunstancias del momento; 7° en caso de renuncia, ausencia ó muerte de los secretarios, el Gobierno nombrará los que deben sustituirlos, presentando el nombramiento en la primera asamblea siguiente; 8° que el nuevo gobierno se titulará «Gobierno Superior Provisional de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, á nombre del señor D. Fernando VII»; 9° que la menor infracción del Estatuto, será un atentado contra la libertad civil y dispone que éste, sea jurado solemnemente.

Como se vé pues, este Estatuto no era menos arbitrario é irregular que el reglamento de 22 de Octubre dictado por la Junta Conservadora, pues uno y otro carecían de la sanción soberana del pueblo, otorgada por una representación legítima. Si el reglamento



puede considerarse como la constitución de una oligarquía, el Estatuto no es sino el decreto de un poder ejecutivo en el cual ya empezaban á manifestarse tendencias unipersonales: de una verdadera dictadura, análoga á la de la Junta de Mayo, eficaz para la defensa de la patria, pero inadecuada para los fines liberales que la revolución tenía como programa. Solo las supremas necesidades de la patria en las circunstancias en que apareció, explican un Poder Ejecutivo tan omnímodo como el consagrado en el artículo sexto del Estatuto, y sin otro límite, que el que fijara el propio criterio de las personas que lo constituían.

—

Hemos dicho que los decretos sobre seguridad individual y libertad de imprenta quedaban incorporados al Estatuto, por disposición expresa del artículo cuarto.

El primero, dice el doctor López (V. F.), era una exposición fastuosa de los principios del *habeas corpus*, pero sin lo esencial de la materia, que es el orden judicial independiente y los procedimientos prácticos de esa valiosa excepción. El segundo tenía más limitaciones que libertades, y á tal punto era ridículo como obra liberal, que hasta los obispos y prelados ejercían atribuciones de censura en materias filosóficas y de derecho público. La nómina de los actos que debían considerarse como abusos de la libertad de imprenta, era enorme; y el único medio que se acordó para evitar la arbitrariedad de los poderes,



fué crear una junta, con el nombre de *Proteclora de la libertad de imprenta*, compuesta de nueve individuos encargados de calificar y graduar el delito; lo que vale decir que la arbitrariedad pasaba á manos de esa Junta, cuya independencia y competencia tenía que ser muy problemática en todo los casos.

El decreto que nos ocupa abolió los tribunales de imprenta y la censura prévia de las obras políticas, declarando que los libelos infamatorios, calumniosos, etc., serían castigados por los tribunales comunes; mantuvo, sin embargo, la censura de los escritos sobre materia religiosa, de acuerdo con lo establecido por el Concilio de Trento. Era deber de los impresores poner su nombre y el lugar y año de la impresión en todo impreso, castigándose la falsedad ó la omisión de estos requisitos, segun la gravedad del delito, y publicándose su nombre en la *Gazeta*.

En cuanto al decreto sobre seguridad individual, incorporado al Estatuto por ley de 23 de Noviembre 1811, al fijar los mismos principios que sirvieron posteriormente á la Constitución que nos rige, declaraba:

Artículo 1° «Ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que preceda forma de proceso legal»

Art. 2° «Ningún ciudadano puede ser arrestado sin prueba al menos semi-plena ó indicios vehementes de crimen, que se harán constar en proceso afirmativo dentro de los tres dias perentorios. En el mismo término se hará saber al reo la causa de su detención



y se remitirá con sus antecedentes al juez respectivo ».

Art. 3° « Para decretar el arresto de un ciudadano, pesquisa de sus papeles ó embargo de bienes, se individualizará en el decreto ú orden que se expida, el nombre ó señales que distingan su persona y objetos sobre que deben ejecutarse las diligencias, tomando inventario que firmará el reo y dejándole copia autorizada para su resguardo ».

Art. 4° « La casa de un ciudadano es un sagrado cuya violación es un crimen ; solo en el caso de resistirse el reo refugiado á la convocación del juez, podrá allanarse ; su allanamiento se hará con la moderación debida y personalmente por el juez de la causa. Si algun motivo urgente impide su asistencia, dará al delegado una orden por escrito y con la especificación que contiene el artículo precedente, dando copia de ella al aprehendido y al dueño de la casa, si la pide »

Art. 5° « Ningún reo estará incomunicado después de su confesión y nunca podrá ésta, dilatarse más allá del término de diez dias ».

Art. 6° « Siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que á pretexto de precaución solo sirve para mortificarlos, será castigada rigurosamente ».

Art. 7° « Todo hombre tiene libertad para permanecer en el territorio del Estado ó abandonar cuando guste su residencia ».

Art. 8° « Los ciudadanos habitantes del distrito de





la jurisdicción del gobierno y los que en adelante se establezcan, están inmediatamente bajo su protección en todos sus derechos ».

Art. 9° « Solo en el remoto y extraordinario caso de comprometerse la tranquilidad pública ó la seguridad de la patria, podrá este Gobierno suspender este decreto mientras dure la necesidad, dando cuenta inmediatamente á la Asamblea General con justificación de los motivos y quedando responsable en todos tiempos de esta medida ».

Buenos Aires, 23 Noviembre de 1811. — *Feliciano Antonio Chiclana, Manuel de Sarratea, Juan Jose Passo,—Bernardino Rivadavia, Secretario.*

—

VII. — La organización gubernamental establecida era por demás defectuosa y, por consiguiente, no podía ser duradera. El pueblo protestaba y ya se habían intentado sublevar mas de una vez los cuerpos de Patricios. En efecto, al día siguiente de jurado el Estatuto, la Junta tuvo conocimiento de que se tramaba una conspiración en la ciudad y que eran promotores de ella los diputados de la junta disuelta por el Triunvirato. Sublevado el cuerpo de patricios, que era el punto de apoyo de aquellos, y sometido despues de un sangriento combate, el Triunvirato procediendo con la mayor energía, ordenó que en el término de 24 horas los diputados de la disuelta junta se retiráran á sus respectivas provincias.

Como se vé, el Triunvirato procedía dictatorialmente, desterrando de la ciudad á los representantes



de los pueblos del interior; cuyo error no resiste al análisis de la crítica sana y razonable.

Por entónces sucedió que, el triunviro doctor Passo había terminado su período y era preciso elegirle sucesor. — Recordemos que el Estatuto Provisional declaraba que se organizaría una Asamblea General, convocada por el Gobierno para los fines que en él se señalan — Con tal fin, la ciudad designó entre el 1° y 3 de Abril, en comicio público, ocho electores que, reunidos con el Ayuntamiento, procedieron á la elección de los treinta y tres ciudadanos que debían integrar la Asamblea; — como se recordará, era ésta quien debía elegir á los triunviros con arreglo al Estatuto Provisional de 1811. — Mas, como las provincias aún no habían nombrado sus diputados, el Cabildo y los ocho electores, no queriendo retardar la elección del nuevo triunviro, les constituyeron apoderados, con lo que se dió por constituida la Asamblea.

Formada así la Asamblea, el día 4 de Abril de 1812, inició sus sesiones bajo la presidencia del Ayuntamiento y con asistencia de los 33 ciudadanos y de los 11 apoderados nombrados *para* las provincias. Dos días mas tarde al empezar sus funciones declaró que le correspondía la autoridad suprema sobre toda otra constituida en las Provincias Unidas del Rio de la Plata; nombrando, acto continuo, vocal del Triunvirato al coronel D. José Martín Pueyrredon, y como éste se encontraba ausente, designó para que lo reemplazara provisoriamente al Dr. Miguel Díaz Velez, contra lo dispuesto en el artículo primero del Esta-



tuto Provisional, en donde se estipulaba claramente que los miembros del Triunvirato, en caso de ausencia, debían ser suplidos por los Secretarios. Esto dio lugar á que, considerando el Triunvirato atentatorio, nula é ilegal la conducta de la Asamblea, la disolviera, ordenando que sus miembros se retirasen en el acto, sin otro carácter que el de simples ciudadanos, bajo penas severas.

Con ésto, volvió el Triunvirato á tener en sus manos el poder dictatorial consagrado en el Estatuto.

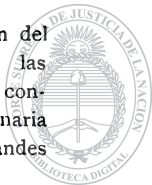
—

VIII. — Pero, esta situación no duró mucho tiempo. Las intrigas de la « Logia Lautaro » organizada por San Martín y Alvear « para trabajar con sistema y plan en la independencia de América y en su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia », por una parte, y la aptitud de las mismas provincias por otra, así como otras muchas causas desfavorables al Triunvirato, hicieron que el descontento general estallára en forma de revolución. — En efecto, el 8 de Octubre de 1812 amanecieron en la plaza Victoria, el regimiento de granaderos á caballo, teniendo á su frente al teniente coronel D. José de San Martín y á su segundo, D. Carlos de Alvear, el regimiento número 2 al mando de su coronel D. Francisco Ortiz de Ocampo y el regimiento de artillería, á las órdenes de su comandante D. Manuel Guillermo de Pinto ; todo ésto, á la cabeza de un numeroso pueblo que se dirigió en masa hacia el Cabildo y le presentó una petición cuyos términos revelaban la acerada pluma de Mon-

teagudo, y en que se demandaba la renovación del Poder Ejecutivo que debía ser « compuesto de las personas mas dignas del sufragio público, y la convocación de una Asamblea general extraordinaria que debía decidir de un modo digno los grandes negocios de la comunidad ».

El Cabildo así conminado, no pudo menos de acceder y nombró un nuevo Triunvirato compuesto de los señores Juan José Passo, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Alvarez Jonte, declarando además vigente y en todo su vigor, el Estatuto Provisional de 1811. La revolución, pues, había triunfado.

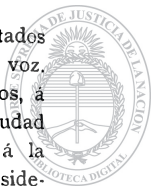
IX. — Uno de los primeros actos del nuevo Gobierno fué pues, expedir un decreto el 16 de Octubre, en el cual se hacía saber al pueblo su resolución de convocar la Asamblea General (ordenada ya por el plebiscito del día 8); «compuesta de los representantes de todos los pueblos que forman las Provincias Unidas del Rio de la Plata». No existiendo constitución y tratándose de sancionarla, correspondía al Gobierno establecer las reglas y garantías con que los pueblos debían elegir sus diputados. Para ello, el 24 del mismo mes, apareció un decreto en el cual al mismo tiempo que se convocaba la Asamblea General para el mes de Enero del año 13, en la parte dispositiva prescribía « que se citára á los vecinos *libres y patriotas* de cada cuartel para que concurrieran á designar un elector á pluralidad de votos; correspondiendo ocho á cada ciudad. Estos ocho electores, reunidos con el



Ayuntamiento, designaban el diputado ó diputados para la Asamblea, en sesión pública y en alta voz. Correspondía á la Ciudad Capital cuatro diputados, á las capitales de provincias dos y uno á cada ciudad de su dependencia, con excepción de Tucumán á la cual se le concedía dos, como un homenaje de consideración por el triunfo de 24 de Setiembre. Se les prohibía á los diputados recibir ó invocar prescripciones que limitaban su mandato, ni instrucciones determinadas, porque todos y cada uno, eran Diputados Nacionales». Como se vé, este reglamento, está basado en los principios mas puros y conspicuos de la materia.

Consecuentes con ésto, todas las provincias practicaron satisfactoriamente sus elecciones, designando los hombres más distinguidos del país, menos la Banda Oriental, donde Artigas, como es sabido, perturbó los actos electorales, rompió con Rondeau, pactó la más infame traición con los jefes realistas de la plaza, y comenzó aquella guerra bárbara y desastrosa contra el orden social y contra los principios cultos de Gobierno, que duró seis largos años con el nombre de *Montoncras del Litoral*.

Conforme á los deseos del Triunvirato, en 31 de Enero 1813 se instaló solemnemente la *Asamblea General Constituyente*. Su primer acto fué declarar que en ella residía la soberanía de la Nación, y garantizar á sus miembros la más amplia libertad de palabra. En seguida ordenó á los miembros del Poder Ejecutivo que concurrieran á prestar ante ella juramento de





fidelidad. Tres días después sancionó por unanimidad de votos, la célebre ley sobre libertad de vientres, para impedir el aumento y una conservación muy prolongada de la esclavitud, á iniciativa de Don Carlos de Alvear; agregando poco después, á esta reforma, la declaración reproducida en nuestra constitución vigente, de que todo esclavo recobraba la libertad por el solo hecho de pisar el territorio argentino.

Reglamentó además la educación de los libertos; abolió las mitas y los tributos, otorgando á los indígenas emancipados el derecho de sufragio, en igualdad con los blancos y los negros libres; declaró abolidos los títulos de nobleza, los mayorazgos y vinculaciones; estableció la libre exportación de granos y de harinas; suprimió el Tribunal de la Inquisición mandando quemar los instrumentos de tortura en la plaza pública; rindió homenaje á la memoria de Moreno y mandó levantar un monumento al sargento Cabral, que había salvado la vida á Don José de San Martín en la batalla de San Lorenzo; creó el escudo nacional y adoptó como himno patrio, la marcha triunfal de Don Vicente López; — en una palabra, á la Asamblea de 1813 se debe la reforma institucional que la nueva situación del país reclamaba, así como las primeras tentativas en pró de la independencia nacional.

—

X. — Pero, las maniobras políticas de los partidos, obligaron bien pronto á la Asamblea á suspender sus trabajos. Reunida á principios de Octubre,

dictó varias leyes importantes, como, « autorizar al Poder Ejecutivo para que obrará por sí, con absoluta independencia durante la suspensión de las sesiones; debiendo dar cuenta á la Asamblea en su primera reunión, de aquellas providencias que la necesidad de proveer á la salud de la patria le hubiese obligado á tomar y que por su naturaleza necesitaban la sanción soberana»; cerrando inmediatamente otra vez sus sesiones, hasta que convocada nuevamente en Enero de 1814 creó, á solicitud de los triunviros que se declaraban impotentes para continuar rigiendo el Estado, — el ejecutivo unipersonal, bajo el título de *Director Supremo de las Provincias Unidas*, con un Consejo de Estado compuesto de nueve vocales.

A las victorias de San Lorenzo, Salta y Tucumán y á los sucesos prósperos con que había comenzado el año 13 se siguieron los desastres de Vilcapujio y Ayohuma y las graves discensiones internas promovidas por el montaraz Artigas. Ante tal situación, el Triunvirato comprende que para dar el impulso necesario á las empresas que se habían de acometer «y el tono que los negocios exigían, la concentración del poder en una mano, era indispensable». Vista por la Asamblea esta franca aptitud, sanciona el 22 de Enero de 1814 la siguiente ley : « La Asamblea General Constituyente ordena que la suprema potestad ejecutiva se concentre en una sola persona, bajo las calidades que establecerá la ley »; y procediendo inmediatamente á proveer el cargo, designó por unanimidad de votos al señor Gervasio Antonio de Posadas.





Durante el gobierno de este señor, desalojóse á los españoles de Montevideo, su último baluarte, y se llevaron á cabo varias reformas importantes, que son del dominio de la historia ; pero como el señor Posadas comprendiera que no era el hombre apropiado para la situación, presentó su renuncia el 9 de Enero de 1815; sucediéndole en el mando su sobrino el general Alvear.

Apenas posesionado éste del gobierno, estalló la guerra del litoral, la sublevación de Alvarez Thomas al frente de su división en Fontezuela, todo lo que dió por resultado que el Cabildo se reuniera el 15 de Abril de 1815 y asumiera el mando político, entregando el militar, al general Balcarce; y que al mismo tiempo que el Director Alvear, cayera oscuramente la memorable Asamblea de 1813.

—

XI. — En el período corrido desde 1813 hasta 1815, las Provincias Unidas del Rio de la Plata, experimentaron modificaciones administrativas y políticas, dice el doctor del Valle, que debemos recordar antes de pasar adelante.

Sabemos que por la Ordenanza de Intendentes de 1782 se dividió el territorio del Virreynato en ocho Intendencias, de las cuales era la primera, Buenos Aires, que comprendía en su jurisdicción el territorio de ese nombre, las tres provincias del litoral : Santa Fé, Entre Rios, Corrientes y la Banda Oriental de Uruguay. La Asamblea elevó á la categoría de provincia el territorio de la Banda Oriental con fecha 7





de Marzo de 1814, y el 10 de Setiembre del mismo año, hizo otro tanto con el de Entre Rios y Corrientes, no quedando, por consecuencia, ligado á Buenos Aires, sinó el de Santa Fé.

En Noviembre del mismo año, desligó de la gobernación de Córdoba la antigua provincia de Cuyo, compuesta de los territorios de Mendoza, San Juan y San Luis, y el 8 de Octubre, declaró que Santiago del Estero y Catamarca formarían provincia con Tucumán y Jujuy; Orán, Tarija y Santa Maria con Salta.

—

XII.—Uno de los primeros actos del Cabildo al asumir el mando político del país, después de los acontecimientos del 15 de Abril, fué crear (bando del día 18) una nueva *Junta de Observación*, cuya elección sometió al pueblo y cuya misión principal era la de convocar inmediatamente un Congreso Nacional en Tucumán para desarmar las prevenciones del localismo contra Buenos Aires, y de redactar un nuevo *Estatuto Provisional*, en el que quedaren deslindadas y establecidas en todos sus detalles orgánicos, la naturaleza y atribuciones de los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; es decir, una Constitución completa del Estado Nacional.

La Junta de Observación cumplió fielmente los objetos que habían movido al Cabildo á decretar su instalación. En efecto, el 5 de Mayo de 1815 fué promulgado el « Estatuto Provisional para la dirección y administración del Estado »; concepción absurda de buenas ideas mal fecundadas, según las palabras



del general Mitre, en que á la par de los grandes principios que enaltecen la dignidad humana y aseguran el orden y la libertad á las sociedades, se proclaman doctrinas tan impracticables como peligrosas.

Prescindiendo del preámbulo, cuya retórica, como dice el doctor del Valle, no corresponde á las exigencias del buen gusto de nuestros tiempos, las peculiaridades que este Estatuto establece, son las siguientes: — al tratar en su sección primera, de las relaciones reciprocas del hombre y de la sociedad, de la religión del Estado y de la ciudadanía, establece que todo hombre, cualquiera que sea su nacionalidad, gozará de seis derechos: la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad; siendo sus deberes para con el Estado: «sumisión completa á la ley, haciendo el bien que ella prescribe y huyendo el mal que prohíbe; obediencia, honor y respeto á los magistrados públicos, como ministros de la ley y primeros ciudadanos; sobrellevar gustoso cuantos sacrificios demande la patria en sus necesidades y peligros, etc., etc. En cuanto á los derechos políticos, es ciudadano todo hombre libre que haya nacido y resida en el territorio del Estado, teniendo voto activo y pasivo en virtud *de ser miembro de la soberanía* del pueblo. Los extranjeros residentes en el país tendrán voto activo después de cuatro años y pasivo después de diez. La religión que establecía era la católica apostólica romana; toda infracción á ese precepto era mirada como una violación de las leyes fundamentales del país.



En su sección segunda establece que el Poder Legislativo reside originariamente en el pueblo y que la elección del que debía desempeñar el Poder Ejecutivo, debía recaer *precisamente* en persona mayor de 35 años, de « reconocido patriotismo, integridad, concepto público, buenas costumbres y aptitud para el cargo ». Prescribió también que el Director del Estado no podía disponer de fondo alguno, sinó asociado al Decano del Tribunal Mayor de cuentas, al Ministro mas antiguo de la Caja Principal, al Alcalde de primer voto, al Prior del Consulado, al Fiscal de la Cámara y al Procurador General de la Ciudad. En cuanto al Poder Judicial, estableció que él residía en el Tribunal de recursos extraordinarios, en las Cámaras de apelaciones y en los juzgados inferiores.

Era pues, como se vé, este Estatuto, una verdadera aglomeración de principios puramente doctrinarios, reglas morales, preceptos de gobierno y detalles administrativos. Por lo demás, este Estatuto puede considerarse como la verdadera fuente de nuestra actual Constitución, pues muchos de sus artículos son casi idénticos; por más qué, su vigencia fué tan efímera, que muy pocas provincias lo reconocieron en su carácter de tal.

Indicaremos el sistema electoral establecido por el— Estatuto de 1815 en su sección quinta para la elección de los diputados de las provincias que debían formar el Congreso General, pues es de interés conocerlo, porque como más adelante veremos, el Reglamento de 1817 y la Constitución de 1819 en un principio —mientras el Congreso no arreglase el método que se

debía adoptar en lo futuro—mantuvieron este mismo sistema electoral.

La elección de diputados se practicaba por un sistema de segundo grado: en las Asambleas primarias votaban los ciudadanos por un elector en proporción de cada 5.000 almas, y los electores así designados, reunidos en asamblea, en la cabeza de cada provincia, nombraban un diputado por cada 15,000 almas, el sufragio en las asambleas primarias duraba dos días. El jefe de la provincia debía instalar el colegio electoral, retirándose en seguida para que éste desempeñara sus funciones.





## CAPÍTULO III

*Batallas*



SUMARIO:—I. Congreso de Tucumán.—La Independencia.—Debate sobre la forma de gobierno.—II. Reglamento Provisorio de 1817.—III. Constitución de 1819.—IV. Disolución nacional.—V. Tratados interprovinciales anteriores á la Presidencia.—VI. Congreso de 1824.—Ley de Capital.—VII. Constitución de 1826.—Su rechazo.—VIII. Tratados interprovinciales posteriores á la Presidencia.—IX. La Tiranía.

I.—El Congreso convocado por la Junta de Observación, reunióse en la ciudad de Tucumán el 24 de Marzo de 1816, con las dos terceras partes de sus miembros.

Complicadísima era la situación porque atravesaba entónces la República. El litoral estaba desgarrado por la anarquía; por un lado Artigas, nombre que recuerda hechos inícuos de salvajismo y de barbarie, trataba en su ambición desmedida imponerse á Buenos Aires, y por el otro, esos caudillejos provinciales surgidos «como la espuma que fermentaba de la inmundicia artiguista», que alzados en armas contra Buenos Aires, pretendían formar de sus provincias estados autonómicos, independientes, sujetos á un poder despótico y opresivo; el General Rondeau era destrozado vergonzosamente en Sipe-Sipe y en Buenos Aires aparecía la idea de desligarse del gobierno general.



En estas circunstancias és, que se reúne el célebre Congreso de Tucumán, á quién cupo la gloria de declarar nuestra independencia, rompiendo para siempre los lazos que nos sujetaban el yugo colonial.

Eran miembros de este Congreso San Martín y Belgrano, los dos hombres que de mayor prestigio gozaban en esos momentos aciagos y, como dice el General Mitre, las dos robustas columnas en que se apoyó el Congreso de Tucumán, los verdaderos fundadores de la independencia argentina.

La Revolución de Mayo estaba en peligro la salvación del país y las necesidades de la guerra, imponían la adopción de medidas rápidas y enérgicas.

Una de las primeras cuestiones de que se ocupó el Congreso, siguiendo las ideas é inspiraciones de San Martín, fué el nombramiento de Director Supremo; nombramiento que recayó por unanimidad de votos, en el virtuoso y honorable patriota, Coronel don Juan Martín de Pueyrredon.

*The right man for the right place*, como ha dicho el doctor del Valle.

Esta designación empero, no apaciguó la efervescencia de los ánimos en la Capital.

Como lo hemos ya manifestado, hacía camino, en la ciudad de Buenos Aires, la idea de la inconveniencia que habia en que ella fuera asiento de las autoridades nacionales.

Un partido poderoso, con apoyo en el Director Provisorio General Balcarce, sostenía que Buenos Aires debía regirse por sus propias instituciones y pe-



día al mismo tiempo, se le reconociera el derecho de constituir un gobierno también propio, exclusivo é independiente; respetando no obstante, la autoridad central, cualquiera que fuera la Provincia en que residiera.

Resolvióse consultar en esta emergencia de tanta gravedad, la voluntad del pueblo; pero surgió una nueva dificultad: ¿se consultaría la opinión en Cabildo abierto ó por medio de representantes? El General Balcarce sostenía lo primero, el Cabildo y la Junta de Observación lo segundo.

En la imposibilidad de armonizar ambas ideas, citóse al pueblo á una reunión popular, por el bando del día 18 de Julio de 1816; reunión que tendría lugar en la Iglesia de San Ignacio y en la cual el pueblo habría de determinar, si debía oírsele en Cabildo abierto ó por medio de representantes. La reunión fué muy tumultuosa; llamóse al Director, al Cabildo y á la Junta y después de tentarse en vano un acuerdo en los pareceres, resolvióse al fin nombrar una comisión encargada de recibir los sufragios de los ciudadanos que votaran, porque se oiga al pueblo en Cabildo abierto, ó por medio de representantes.

El triunfo fué para el Cabildo y la Junta; una gran mayoría optó por la representación.

Balcarce no dió cumplimiento á esta disposición siendo destituido por la Junta, en estas circunstancias llegó Pueyrredon y asumió el mando sin ningún obstáculo.

—El Congreso de Tucumán, dice el General Mitre,





que representaba genuinamente una democracia y fundaba una república por el hecho de reunirse en nombre de la soberanía nacional, no tenía la plena conciencia de su misión, y trepidaba al dictar la única ley para que había sido convocada, por ser la única que los pueblos obedecían, que era la de la independencia.

Pero, en virtud de los consejos y repetidas instancias de San Martín y de Belgrano, que consideraban la declaración de la independencia nacional, como una medida de trascendencia suma en esas circunstancias, desechando toda vacilación, toda preocupación inútil, en los tristes momentos en que parecía obscurecerse para siempre el Sol de Mayo, el Congreso de Tucumán cumpliendo su gran misión, proclama á la faz del mundo el día 9 de Julio de 1816, la Independencia de las Provincias Unidas del Rio de la Plata «como coronamiento de la revolución americana y punto de partida de la guerra ofensiva á todo trance»; independencia que de hecho existía no sólo desde la revolución de Mayo, siendo ella ya su consecuencia lógica y forzosa, sinó desde la primera victoria en 1806, contra la invasión ridícula é irrisoria de los ingleses; adquiriendo entónces *los criollos*, la conciencia plena de su poder y fuerza, como claramente lo indica la omisión y el desprecio hecho de la autoridad real, sustituyéndose al virrey español, por otro de elección popular. (1)

(1) He aquí el acta memorable de nuestra Independencia:

«En la benemérita y muy digna Ciudad de San Miguel de Tucumán á nueve días del mes de Julio de mil ochocientos diez y seis, terminada la



—Declarada la Independencia, ocupóse el Congreso de la gran cuestión concerniente á la forma de gobierno que más convenía á las Provincias Unidas.

sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande, augusto y sagrado objeto de la independencia de los pueblos que lo forman. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España; los Representantes sin embargo consagraron á tan árduo asunto toda la profundidad de sus talentos, la rectitud de sus intenciones é intereses que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad: á su término fueron preguntados:—¿Si querian que las Provincias de la Union fuesen una Nación libre é independiente de los reyes de España y su metrópoli? Aclamaron primero llenos del santo ardor de la Justicia, y uno á uno reiteraron consecutivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del Pais, fijando en su virtud la determinación siguiente:

«Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud-América reunidos en Congreso General, invocando el Eterno que preside el universo, en el nombre y por la autoridad de los Pueblos que representamos, protestando al Cielo, á las naciones y hombres todos del globo la justicia que regula nuestros votos: declaramos solemnemente á la faz de la tierra, que es voluntad unánime é indiscutible de estas Provincias, romper los violentos vínculos que las ligaban á los reyes de España, recuperar los derechos que fueron despojadas, é investirse del alto carácter de una Nación libre é independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con ámplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, é impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo el seguro y garantías de sus vidas, haberes y fama.

Comuníquese á quienes corresponda para su publicación, y en obsequio del respeto que se debe á las naciones detállense en un manifiesto los gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.—Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra mano, sellada con el sello del Congreso, y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.—*Francisco Narciso de Laprida*, Diputado por San Juan. *Presidente*—*Mariano Boedo*, *Vice-Presidente*—Diputado por Salta.—*Doctor Antonio Saenz*, Diputado por Buenos Aires.—*Doctor José Darregueyra*, Diputado por Buenos Aires.—*Fray Cayetano José Rodríguez*, Diputado por Buenos Aires.—*Doctor Pedro Medrano*, Diputado por Buenos Aires.—*Doctor Manuel Antonio Acevedo*, Diputado por Catamarca.—*Doctor José Ignacio de Gorriti*, Diputado por Salta.—*Doctor José Andrés Pacheco de Melo*, Diputado por Chichas.—*Doctor Teodoro Sánchez de Bustamante*, Diputado por la ciudad de Jujuy y su territorio.—*Eduardo Pérez Bulnes*, Diputado por Córdoba.—*Tomás Godoy Cruz*, Diputado por Mendoza.—*Doctor Pedro Miguel Araoz*, Diputado por la Capital de Tucumán.—*Doctor Esteban Agustín Gazcon*, Diputado por la Provincia de Buenos Aires.—*Pedro Francisco de Uriarte*, Diputado por Santiago del Estero.—*Pedro Lérú Gayo*, Diputado por Santiago del Estero.—*Pedro Ignacio Rívera*, Diputado por Mizquies.—*Doctor Mariano Sanchez de Loria*, Diputado por Charcas.—*Doctor José Severo Malabia*, Diputado por Charcas.—*Doctor Pedro Ignacio de Castro Barros*, Diputado por la Rioja.—*Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y Carrera*, Diputado por Córdoba.—*Doctor José Colombres*, Diputado por Catamarca.—*Doctor José Ignacio Thames*, Diputado por Tucumán.—*Fray Justo Santa María de Oro*, Diputado por San Juan.—*José Antonio Cabrera*, Diputado por Córdoba.—*Doctor Juan Agustín Maiza*, Diputado por Mendoza.—*Tomás Manuel de Anchorena*, Diputado por Buenos Aires.—*José Mariano Serrano*, Diputado por Charcas, *Secretario*—*Juan José Passo*, Diputado por Buenos Aires, *Secretario*.



Al paso que las ideas republicanas, que con tanta rapidez se esparcieron por el mundo, propagadas por la revolución francesa y el ejemplo de los Estados Unidos, caen en el mayor desprestigio, renacen las antiguas ideas monárquicas como una esperanza, como una garantía de orden en un estado de cosas totalmente desquiciado y como reivindicación de los derechos que la sangre y la herencia consagraban, desconocidos y ultrajados por el poder de un hombre, que en su ambición desenfrenada no bastaba á saciar sus apetitos de conquista la Europa entera.

Warteloo, terrible y desastrosa caída del Gran Capitán, anuncia una nueva era de paz y de tranquilidad bajo la restauración de las dinastías, á los pueblos aniquilados por quince años de lucha.

El congreso de Viena, dice el doctor del Valle, suggestionado por Talleyrand proclamó el principio de la legitimidad como fuente de todo derecho y en los primeros tiempos no se habló de otra cosa que de restituir los reinos á sus antiguos soberanos, sin perjuicio de que una vez declarada la doctrina, los más fuertes se apoderaran de lo que les convenía, *quo minor lco*.

Es sobre esta base de la legitimidad, que Belgrano, que había asistido en Europa á ese vuelco completo en las ideas, fundó su quimérico plan de la restauración de la dinastía de los Incas, con el fin de constituir un imperio americano y cuya capital estuviera ubicada en el Cuzco.

Durante la guerra de la independencia, los ameri-



canos del sud se consideraban miembros de una misma familia, nacidos del mismo tronco, desde Nueva Granada hasta el Rio de le Plata, y en su odio á los peninsulares reivindicaban, como titulo de honor, sus conexiones con la raza autóctona. De ahí Belgrano derivó su proyecto dinástico, sin maliciar que tras de su quimérica monarquía asomaba la cabeza de un indio viejo que provocaba el ridículo. (Del Valle confs. cits.).

Lo que verdaderamente sorprende es que este plan fuera aceptado hasta por el General San Martín y por más de un miembro del Congreso como en seguida lo veremos.

El debate sobre la forma de gobierno fué iniciado por el diputado Acevedo tres días después de declarada la Independencia (12 de Julio) manifestándose partidario de la monarquía incásica.

La mayor parte de los congresales convenían, en que el medio más eficaz y seguro de hacer prevalecer la independencia, de fundar un orden de cosas estable y duradero y de contrarestar el aspecto terrible, amenazador que dia á dia iba tomando el anarquismo, era el establecimiento de una monarquía.

Otros por el contrario, con palabras enérgicas y elocuentes, trataron de contener esa corriente de ideas falsas y absurdas y de evitar que de un modo tan precipitado é irreflexivo, se conculcasen los sentimientos esencialmente republicanos y democráticos del pueblo.

Fray Justo Santa Maria de Oro sostuvo, que no podía



imponerse á los pueblos la monarquía sin consultarlos previamente y que dado el caso de no cumplirse esta formalidad renunciaría su empleo.

En las sesiones del 19, 20 y 31 de Julio y en las del 5 y 6 de Agosto, continuó el debate.

El diputado Serrano declaró que, habiendo analizado las ventajas é inconvenientes del gobierno federal que en un principio había deseado, «después de una seria reflexión sobre las circunstancias del país, la necesidad del orden y la unión, la rápida ejecución de las providencias y otras consideraciones, creía conveniente la monarquía temperada.»

Los diputados Acevedo y Pacheco apoyaron la indicación ampliándola en el sentido de que se estableciera la dinastía de los Incas.

El 20 de Julio el Presidente dió cuenta al Congreso de que Fray Justo Maria de Oro no asistiría á las sesiones, mientras se discutiera la forma de gobierno, á menos que la Asamblea se lo ordenara y el Presidente se lo comunicara por escrito: así se decidió.

El Dr. Castro Barros en la sesión del 31, se declaró partidario del monarquismo constitucional y «sostuvo las ventajas del hereditario sobre el electivo y las razones políticas que había para llamar á los Incas al trono de sus mayores despojados de él, por la usurpación de los reyes de España...»

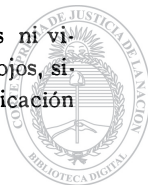
El debate del 5 de Agosto fué iniciado por Laprida presidente del Congreso, dando su voto en favor de la monarquía incásica. Eran monarquistas á más de los ya nombrados, el doctor Sáenz, Soria, Godoy Cruz, Rivera etc.



El discurso del diputado Anchorena fué el último pronunciado en el Congreso (6 de Agosto) sobre la gran cuestión relativa á la forma de gobierno; expresó en él los inconvenientes del gobierno monárquico sosteniendo y demostrando al mismo tiempo, inspirado en las doctrinas de Montesquieu, lo inadaptable que era el suelo de las provincias unidas, para la ubicación de una monarquía; pero la monarquía incásica fué apoyada en seguida por el General Belgrano y por el General Güemes en las proclamas que dirigieron á las milicias bajo su mando; siendo por otra parte, acremente combatida por la prensa y la opinión pública de Buenos Aires, hasta dar en tierra con este ridículo y fantástico proyecto.

La razón pública, dice el eminente historiador Mitre, en medio de su relativo atraso, estaba más arriba de estos errores, desfallecimientos y contemporizaciones, porque la idea innata de la república democrática estaba en las cosas mismas, en el organismo de todos y cada uno. Era una ley escrita en la conciencia popular, que tenía sus manifestaciones espontáneas, ya brutales, ya cívicas, ya intelectuales, ya puramente intuitivas, así en los individuos como en la colectividad social, que revestía formas propias originales. Así no obstante lo generalizadas que estaban en aquella época las ideas monárquicas entre los hombres más eminentes de la revolución, jamás el espíritu republicano había sido más intenso, jamás las nociones del pueblo sobre la organización de una democracia habían sido más correctas. Después de seis años de vida libre, en

que se había educado una generación sin reyes ni virreyes, la monarquía no podía presentarse á sus ojos, sino como un retroceso en la revolución y una abdicación de la majestad de pueblo soberano.



II.—El día 25 de Setiembre de 1816 el Congreso de Tucumán trasladóse á Buenos Aires, «para tratar de poner en seguridad su existencia, como la única capaz de salvar al presente las provincias, en medio de los peligros que las amenazan», peligros expuestos en el manifiesto sancionado el 2 de Octubre y cuyos párrafos más significativos dicen:

«Ya está sancionada la traslación provisional del Superior Congreso á la ciudad de Buenos Aires. No ignoramos la aspiración general de las Provincias en esta parte. Los Diputados repetidamente la han significado, apuntando que tal vez la traslación del Congreso á Buenos Aires, exitaría un sentimiento desagradable en los ánimos, ó muy delicados ó demasiado celosos de la inviolabilidad de sus derechos. Pero la necesidad insta, los recursos se agotan, y la preferente salvación del país, levantando un eco descompasado, reclama el remedio á costa de los mas grandes sacrificios.»

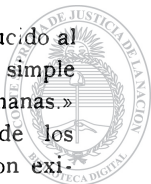
«La expedición portuguesa se aproxima á Maldonado. La Banda Oriental procede por sí, é insistiendo en su separación, se priva de las ventajas que podría proporcionarle la unidad con los demás pueblos. Santa Fé se obstenia en sus pretensiones, y sus convulsiones intestinas le hacen sentir la falta de una

autoridad central. El Paraguay se aísla, y reducido al círculo de su territorio, se presenta como un simple espectador de la suerte de las provincias hermanas.»

«Por otra parte, Buenos Aires, es el pueblo de los recursos. Nuestra actual constitución apura con exigencia por una viva y pronta actividad en proporcionarlos. La infernal conspiración del tirano entretiene uno de nuestros ejércitos en Mendoza. Es de necesidad auxiliarle. El valeroso que tenemos á la vista en el mejor orden y subordinación, clama por vestuario, dinero y demás artículos que necesita para sostenerse, equiparse y ponerse en estado de proseguir *hasta las mismas puertas del infierno* á esa confederación fanática de viles esclavos. El agresor del Perú se halla á las puertas de Jujuy.»

Ya instalado el Congreso en la ciudad de Buenos Aires, reanudó sus sesiones el 19 de Abril de 1817 y sancionó el 3 de Diciembre el estatuto conocido con el nombre de «Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado» cuya base fué el Estatuto Provisional de 1815 con reformas sustanciales en los departamentos legislativo y ejecutivo.

En la sección del poder legislativo declaró que éste residía originariamente en la Nación y que su ejercicio permanente lo fijaría la Constitución del Estado; gobernándose éste, mientras se preparaba la constitución definitiva, por el reglamento y por las leyes que para reformarlo, interpretarlo ó adicionarlo, dictara el Congreso; permaneciendo también en vigencia los códigos, cédulas y disposiciones generales del gobier-





no colonial siempre que no estuviesen en oposición directa ó indirecta con la libertad é independencia de las provincias ó con las leyes sancionadas después de la revolución de 1810.

En la sección del poder ejecutivo estableció que éste sería ejercido por un Director del Estado nombrado por el Congreso, determinando al mismo tiempo las condiciones requeridas para el desempeño de este cargo: residencia en el país de cinco años por lo menos, inmediatos á la elección, ciudadanía natural y treinta y cinco años de edad; y eliminando las trabas que el Estatuto de 1815 había establecido para el ejercicio de la autoridad.

Se atribuyó al Supremo Director el nombramiento de los gobernadores de provincia, tenientes gobernadores y sub-delegados de partido de acuerdo con las nóminas ó listas que le enviarían anualmente los Cabildos; era también el Supremo Director, comandante en jefe de todas las fuerzas del Estado: armada, ejércitos de línea, milicias cívicas y nacionales; proveía á todos los empleos y cargos militares y estaba encargado de la superintendencia general, en los ramos de hacienda y de la provisión de los beneficios eclesiásticos; los fondos del estado estaban bajo su custodia pudiendo disponer de ellos siempre que la defensa del país lo exigía. En cuanto á los secretarios de Estado, el Reglamento les dió el carácter de verdaderos ministros, sometiénolos al juicio político ante una comisión nombrada por el Congreso. Los límites fijados á la autoridad del Director están enumerados





en el capítulo segundo de la sección tercera; no podía intervenir á objeto de restablecer el orden perturbado en alguna de las provincias unidas *motu proprio*, sinó con acuerdo del Congreso, salvo en los casos urgentes; no podía ejercer jurisdicción civil ó criminal, compulsar, avocarse, ó suspender las causas pendientes, ó sentenciadas en los tribunales de justicia; ni tampoco imponer pechos, contribuciones, ni empréstitos sin prévia autorización del Congreso; ni conceder á persona alguna del Estado privilegios exclusivos, excepto á los inventores de artes, etc.; en el caso de arresto de algún ciudadano, estaban obligados á someterlo á los jueces dentro del tercer día, á no ser que la causa del arresto fuera de tal naturaleza que comprometiera la seguridad del país ó el orden público, en cuyo evento podía prolongar el arresto de acuerdo con su asesor y el fiscal de la cámara.

Determinó también el Reglamento la manera y forma con que se habían de elegir y constituir los Cabildos; en cuanto á la provisión de empleos dispuso que los que debían tener la calidad de letrados, excepto los asesores de cabildo y de intendencia, fueran nombrados por el Director del Estado á propuesta en terna de las cámaras de apelaciones de cada distrito; que las propuestas militares se hicieran estrictamente por el orden y escala que previene la ordenanza, y los demás de la administración pública á propuesta de los gefes respectivos por escala de antigüedad en igualdad de aptitud y buenos servicios.

Para la elección de Diputados mantenía el régimen



del Estatuto de 1815, lo mismo que para la organización del ejército y de las milicias. (Del Valle. Confs. cits.)

Es singular, dice el historiador López (V. F.) que esta ley orgánica, que fué hecha y promulgada con un carácter provisorio el 3 de Diciembre de 1817, sea aquella cuyas declaraciones de principios en materia de soberanía propia, de gerarquía externa y de rango nacional, haya conservado mayor autoridad y más larga vigencia (en esas partes al ménos) hasta la de 1853 reformada en 1862. Bajo este respecto, y por muchas de sus cláusulas fundamentales, es una obra de mérito y digna de ser conocida.

—

III.—Como en los anteriores congresos, fué para el Congreso del año 16 su idea primordial, su preocupación constante, el dictar la constitución definitiva que, hundiendo para siempre la anarquía, causa de tantos males y desgracias, diera á este pueblo naciente un gobierno sano, sólidamente constituido sobre las bases inconvencibles de la justicia y del derecho, entrando así, en una vida de paz y de progreso, propia para cumplir los grandes destinos que como nación libre é independiente, el porvenir le reservaba.

El Congreso termina sus trabajos de legislación. La constitución definitiva es sancionada el 22 de Abril de 1819. Esta constitución es la más completa de todas las dictadas hasta entónces, notándose en ella, dice López (F. V.), su fuerte y sensato espíritu conservador y liberal á un mismo tiempo. Ese mé-



rito fué el que señaló el señor Rivadavia escribiendo de Europa—«que había merecido los unánimes elogios de los sabios.»

Estaba precedida de un extenso manifiesto, que el historiador citado, considera como un precioso texto de enseñanza, y cuyos axiomas y sabias reminiscencias clásicas merecen gravarse en la mente y en la conciencia moral de la juventud.

No es nuestra constitución, decía el manifiesto, ni la democracia fogosa de Atenas; ni el régimen monacal de Esparta, ni la aristocracia patricia ó la efervescencia plebeya de Roma, ni el despotismo de la Turquía, ni la federación complicada de otros estados; pero és, sí, un estatuto que se acerca á la perfección, un estado medio entre la convulsión democrática, la injusticia aristocrática y el abuso del poder ilimitado.

La constitución unitaria de 1819 sin llegar nunca á la perfección que el ampuloso preámbulo le atribuía, desvióse del camino trazado por las constituciones anteriores, introduciendo en el orden político importantes innovaciones.

Ante todo diremos, que declaraba religión del Estado, la religión católica apostólica romana, que el gobierno le debía la más eficaz y poderosa protección y los habitantes del territorio todo respeto.

Es la primera ley fundamental que establece el sistema bi-camarista en la República, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de los Estados Unidos y de Inglaterra; y que marca claramente la división de los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.



El poder legislativo lo formaban dos cámaras, una de representantes y otra de senadores. Los diputados debían elegirse en proporción de uno, por cada veinticinco mil habitantes ó fracción que no bajase de diez y seis mil, duraban cuatro años en el poder, renovándose la Cámara por mitad cada dos años (Art. 6°). Correspondía á la Cámara de Diputados la iniciativa en materia de contribuciones, tasas é impuestos, teniendo el Senado la facultad de admitirlas, rehusarlas ú objetarlas (Art. 7°), y el derecho exclusivo de acursar de oficio ó á instancia de cualquier ciudadano, á los miembros de los tres grandes poderes, á los ministros de Estado, enviados á las Cortes extranjeras, arzobispos ú obispos, generales de los ejércitos, gobernadores y jueces superiores de provincia, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, infracción de la Constitución ú otras que merecieran la pena de muerte ó de infamia. (Art. 8°).

La constitución no fijaba ningun sistema de elección, debiendo ella verificarse, mientras el Congreso no la determinara, de acuerdo con lo que disponía el Reglamento Provisorio de 1817. (Véase Apéndice *f*).

Las calidades para ser electo diputado están especificadas en el Art. 5°; una de ellas era que debían ser del *fuero común*, en contraposición á los miembros del Senado que investían dignidades eclesiásticas, civiles y militares.

Con motivo de este artículo, el redactor del Congreso correspondiente á las sesiones del 29 y 31 de



Agosto, hizo la exposición del plan constitucional, en el cual se intentaba apropiarse al sistema gubernativo del país las principales ventajas de los gobiernos monárquicos, aristocráticos y democráticos evitando sus abusos, con el doble propósito de salvar las agitaciones de la simple democracia y la arbitrariedad y despotismo de los otros sistemas.

El gobierno monárquico, decía el redactor, es ventajoso por la unidad de los planes, por la celeridad de la ejecución y por el secreto, indispensable para la eficacia de las resoluciones que se adoptan en momentos difíciles; el gobierno aristocrático, porque los negocios públicos son dirigidos por hombres eminentes, preparados y educados para el gobierno, y el democrático, por la elevación y seguridad que inspira a los ciudadanos su participación en las leyes que han de obedecer, en las elecciones y demás transacciones públicas en que el pueblo está interesado.

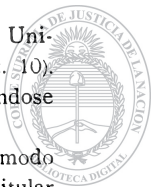
El Poder Ejecutivo unipersonal correspondía a la unidad monárquica; el senado, compuesto de las altas jerarquías de la clase militar, eclesiástica y civil, representaba bien el elemento aristocrático, y para que la Cámara de Diputados fuera expresión de la tendencia democrática, el artículo que nos ocupa exigía, que los representantes fueran miembros de la clase común, sin goce de fuero de ninguna naturaleza. (Del Valle. *Confs. cit.*)

—La Cámara de Senadores debía formarse con un senador por cada provincia, tres senadores militares, cuya graduación no bajase de coronel mayor, un

obispo y tres eclesiásticos, un senador por cada Universidad y el Director del Estado cesante (Art. 10). El cargo de senador duraba doce años, renovándose la Cámara por terceras partes cada cuatro años.

Los senadores por las provincias elegíanse del modo siguiente: cada municipalidad nombraba un capitular y un propietario para electores; reunidos los electores elegían tres sujetos de la clase civil, de los cuales uno al ménos, debía no ser de la provincia y la terna se remitía al Senado; se declaraban electos los que hubiesen obtenido mayor número de sufragios, computados por Provincia. Si no había pluralidad por ninguno de ellos, el Senado elegía entre los propuestos.

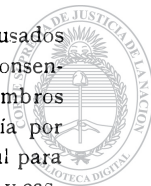
Los senadores militares eran nombrados por el Director del Estado. Para la representación eclesiástica se designaba, por la primera vez, al obispo de la diócesis donde residiera el cuerpo legislativo, y en lo sucesivo, al que eligieran los otros obispos del territorio, decidiendo el Senado entre los propuestos, si ninguno tenía pluralidad de sufragios. Los otros tres senadores eclesiásticos se nombraban así: los cabildos eclesiásticos reunidos con el prelado diocesano, curas rectores de la Catedral y rectores de los colegios eclesiásticos, debían elegir tres individuos del mismo estado, de los cuales uno, al ménos, debía ser de otra diócesis, considerándose electos á los que obtuvieran mayor número de votos computados por Iglesias. Si todos tenían igual cantidad de votos, al Senado tocábale efectuar la elección entre los propuestos.



El Senado juzgaba en juicio público á los acusados por la Cámara de Diputados; requiriéndose el consentimiento de las dos terceras parte de sus miembros para sentenciar al acusado. La sentencia tenía por objeto separarlo del empleo ó declararlo inhábil para obtener otro, quedando sujeto á acusación, juicio y castigo conforme á la ley.

En cuanto á las atribuciones de las Cámaras, eran en lo esencial, análogas á las de nuestro actual Congreso; dictaban las leyes, decretaban la paz y la guerra, fijaban la fuerza de mar y de tierra, establecían derechos é imponían contribuciones por tiempo que no excediera de dos años, reglaban las monedas, pesas y medidas, creaban y suprimían empleos, reglaban el comercio interior y exterior, la forma de los juicios, examinaban y juzgaban las cuentas de la administración, acordaban privilegios por tiempo determinado, etc.

Las leyes podían iniciarse en cualquiera de las Cámaras; con excepción de aquellas relativas ó contribuciones ó impuestos; todo proyecto de ley debía leerse en tres sesiones distintas, con un intervalo de tres días entre cada una de ellas; aprobado el proyecto en una de las Cámaras, pasaba á la otra para su revisión y si en ésta era también aprobado, pasaba entónces el Poder Ejecutivo, quién tenía quince días para observarlo, pudiendo las Cámaras insistir por dos tercios de votos en cada una; si un proyecto de ley era desechado por una de las Cámaras, no podía repetirse en las sesiones del año.







Las Cámaras tenían, por otra parte, facultades propias tendentes á adoptar todas las medidas necesarias para su régimen interno: nombraban su presidente vice-presidente y oficiales, señalándoles el tiempo que habrían de durar en sus puestos respectivos; eran jueces de la validez de los títulos de sus miembros y prescribían el orden de los debates. Sólo en el caso de que las dos terceras partes de sus miembros estuviesen presentes en el lugar de las sesiones, las Cámaras podían deliberar; pudiendo no obstante, un número menor, compelar á los inasistentes en los términos y bajo los apremios que cada una estableciere.

Cada Cámara tenía el derecho de obligar á los ministros del Poder Ejecutivo á comparecer á su sala, á fin de que suministraran los informes que juzgase necesarios.

Los senadores ó diputados no podían ser molestados por las opiniones que emitieren, ni tampoco aceptar empleo alguno del P. E. sin consentimiento expreso de la Cámara.

—El Poder Ejecutivo era desempeñado por un Supremo Director, que debía tener: ciudadanía natural, seis años de residencia inmediata y treinta y cinco de edad. Era elegido por las dos Cámaras reunidas en asamblea; rompiendo este procedimiento vicioso, el equilibrio que debe existir entre los distintos poderes, y cuyos efectos, la práctica y la experiencia de diversas naciones, han demostrado que son perniciosos y contra producentes. La elección tenía lugar de la siguiente manera: si después de tres votaciones ninguno obte-



nia la mayoría requerida, la votación se reducía á los tres que hubiesen obtenido mayor número de sufragios; y no llegándose por este medio á la mayoría, se excluía al que tuviese menor número de votos de los tres, quedando reducida la votación á los otros dos, que se votaban sucesivamente y si después de tres votaciones ninguno de los dos obtenía la mayoría de votos requerida, se designaba por la suerte entre ellos.

El Director del Estado era el jefe supremo de los ejércitos de mar y de tierra y el encargado de hacer ejecutar las leyes; abría el Congreso y lo convocaba extraordinariamente; podía iniciar proyectos de ley y concluir tratados con las naciones extranjeras, siempre que tuviera el consentimiento de los dos tercios del Senado y cuando por el tratado se desmembrara alguna parte del territorio, se requería también, dos tercios de la Cámara de Representantes; nombraba por sí sólo, los generales de los ejércitos, los embajadores, enviados, cónsules y los empleados que no fueran exceptuados por la constitución ó las leyes, y á propuesta en terna del Senado, los arzobispos y obispos, (Art. 86); tenía el derecho de gracia, y todos los objetos y ramos de hacienda estaban bajo su dependencia.

—En cuanto al Poder Judicial, se limita á organizar una alta Corte de Justicia compuesta de siete jueces y dos fiscales, nombrados por el Director del Estado con acuerdo del Senado. Entendía este tribunal en todas las causas concernientes á enviados y cónsules



de las naciones extranjeras y en aquellas que se suscitasen entre las provincias. Conocía también en último recurso de los asuntos provenientes de tratados y de los crímenes cometidos contra el derecho público de las naciones.

Los miembros de la Corte de Justicia eran inamovibles mientras durase su buena conducta; tenían asignado un sueldo que no podía ser disminuido, entanto estuviesen desempeñando sus funciones.

Establecía la Constitución entre otras disposiciones, que la Nación tenía el derecho de reformarla cuando fuere necesario é indicaba el procedimiento que habría de seguirse en tal caso: se requerían los dos tercios de votos de cada Cámara para que la necesidad de la reforma fuese declarada; el Poder Ejecutivo podía vetarla, y el Congreso insistir por tres cuartas partes de cada una de las Cámaras; el mismo Congreso era el que debía efectuar la reforma, con idénticos procedimientos; estableció también, que la soberanía residía originariamente en la Nación y que era la ley suprema del país. Las declaraciones de derechos y garantías individuales que establecía, eran con mayor amplitud, las insertas en los estatutos anteriores.

—La Constitución de 1819, jurada el 25 de Mayo del mismo año, fué de duración efímera; rechazada por las provincias, cayó junto con el Congreso que la sancionara, después de la batalla de Cepeda. Considerada en conjunto, dice el Dr. López (L. V.) no pasa de ser una tentativa teórica para organizar pueblos que estaban desorganizados por la anarquía. Si se



examina ligeramente el estado del país en aquella fecha, se notará que los pueblos habían perdido completamente el vínculo de unión, y que la constitución que pretendía encontrarlo, por medio de una forma unitaria, que debía ejercitarse desde la vieja capital del virreynato, y que si no había sido sancionada por sus hombres, lo había sido en su recinto,—tenía que escollar en las provincias, armadas contra la capital y en defensa de sus autonomías ó de sus caudillos prepotentes.

—

IV.—Después de sancionada y promulgada la Constitución de 1819 el señor Pueyrredon presentó su renuncia de Director Supremo de las Provincias Unidas, siendo electo en su reemplazo el General Rondeau interinamente, hasta la reunión de las Cámaras.

Debía procederse á la organización del nuevo Congreso de acuerdo con las bases establecidas en la Constitución; Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Salta y Cuyo enviaron las ternas de senadores y sus diputados; con excepción de las Provincias del Alto Perú que estaban en poder de los españoles y de las del litoral, dominadas por sus caudillos.

Cuando los primeros contrastes, dice el historiador Mitre, y el desarrollo espontáneo de la anarquía, los políticos que dirigían la revolución argentina, empezaron á perder la esperanza de constituir sólidamente la república, pensaron en la monarquía sostenida por las grandes potencias europeas, como medio de darle punto de apoyo y estabilidad y propiciarla ante el



mundo, persiguiendo siempre la idea de la independencia y de la libertad constitucional.

De ahí que, por una aberración, que se explica por el desequilibrio de las fuerzas políticas, el Congreso de 1816 que declaró nuestra independencia y por el hecho fundó una república, sostuviera como un paliativo seguro é indispensable á los males que aquejaban á los pueblos, una monarquía ridícula y fantástica, cual era la de un descendiente de los Incas, con su trono en el Cuzco, rigiendo los destinos de un imperio americano. La opinión pública, como sabemos, impuso á este quimérico proyecto, el estigma de su reprobación y de su desprecio.

No se detuvo ahí esta corriente de ideas descabelladas y absurdas.

«Desde 1816 á 1819 la política de los monarquistas argentinos se agita en el vacío buscando en la diplomacia universal combinaciones que amalgamasen los intereses de los dos mundos por la uniformidad de principios antagónicos que se excluían. Partiendo de esta base errada, el mismo Congreso que declaró en 1816 la independencia argentina, sancionó en secreto en 1819 la forma monárquica, inmediatamente después de jurar y promulgar la constitución republicana dictada por él, y buscó en Europa otro rey imaginario con el apoyo de la Francia.»

En efecto, el doctor Gómez, enviado extraordinario cerca de los gobiernos europeos, fué el encargado de realizar esta misión.

Celebró en París una conferencia con el ministro



de negocios extranjeros de Francia; conferencia de que dió cuenta á su gobierno, y en la que concertó, dice Mitre, un informal convenio *ad referendum* con el gobierno francés, para la coronación de un príncipe de la casa de Borbón,—el duque de Luca,—como soberano del Rio de la Plata, bajo la protección de la Francia, con la condición de allanar sus dificultades con la España, de obtener de ella la terminación de la guerra, el reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas y la suspensión de la formidable expedición destinada á subyugar las provincias y de interesar al Portugal en el plan, por medio del enlace de una princesa del Brasil con el presunto candidato al trono argentino, á fin de facilitar la evacuación de la Banda Oriental ocupada por los portugueses.

El doctor Gómez al dar cuenta á su gobierno de estas proposiciones, adelantaba algunas observaciones sobre ellas, recordando que ya había informado al Gobierno, que una de las bases de la política de la Santa Alianza era disminuir los gobiernos republicanos, en cuya virtud habían desaparecido los de Holanda, Venecia y Génova, y que, en su concepto, á ese propósito respondía la proposición que trasmitía á su gobierno. (Del Valle).

Este proyecto dinástico discutióse en el Congreso, en la sesión del 3 de Noviembre. Objetado por algunos diputados por considerarlo incompatible con la forma de gobierno esencialmente republicana sancionada por la Constitución, fué sin embargo apoyado



por la mayoría consultando el bien y los grandes intereses de la patria.

Nombróse una comisión para que proyectara las condiciones, de acuerdo con las cuales había de proseguirse la negociación iniciada.

La comisión expidióse en la sesión del 12 de Noviembre, aconsejando las nueve bases siguientes, sancionadas por el Congreso:

1° Que el gobierno francés se encargase de obtener el asentimiento de las cinco grandes potencias europeas, especialmente el de Inglaterra y el de España;

2° Que después de obtenido ese consentimiento, se encargara de arreglar la unión del Príncipe de Luca con una princesa del Brasil, bajo la condición de que su Majestad Fidelísima renunciara á toda pretensión sobre el territorio que había pertenecido á la España y á las indemnizaciones que pudiera pretender con motivo de la guerra de la Banda Oriental.

3° Que la Francia prestara al Príncipe de Luca, el auxilio necesario para establecerse, debiendo la nueva monarquía comprender, cuando menos, el territorio del antiguo Virreynato del Rio de la Plata, incluso la Banda Oriental;

4° Que las Provincias Unidas conservaran la Constitución que acababan de jurar, modificada solamente en los artículos indispensables para adaptarla al gobierno monárquico hereditario;

5° Que el proyecto se llevaría á efecto, aún cuando la España se opusiera, una vez obtenido el consentimiento de las grandes potencias europeas;



6° Que á ese fin la Francia aceleraría la partida del Duque de Luca con las fuerzas necesarias para semejante empresa y para que pudiera rechazar las expediciones españolas, facilitando tropas, armas, municiones de guerra y tres millones de pesos fuertes, que le serían devueltos despues de terminada la guerra y de restablecida la tranquilidad del país;

7° Que se debía considerar esta empresa bajo el punto de vista de que la Inglaterra se opondría á ella y se esforzaría por frustrarla;

8° Que el tratado que con este motivo se celebrara, debía ser ratificado por el Senado, según las formas constitucionales, para su definitiva validez;

9° Que á ese fin el enviado argentino exigiría el tiempo necesario para que pudiera terminarse satisfactoriamente, manejándose con la circunspección, reserva y precaución consiguientes á una posición delicada, tanto para asegurar el buen éxito del proyecto, cuanto para prevenir las circunstancias funestas que sobrevendrían á las interpretaciones malignas que podrían darle los enemigos del gobierno si se llegaba á descubrir antes de tiempo. (Del Valle).

No obstante haber sancionado el Congreso este proyecto en secreto, como una conjuración—proyecto que no tuvo ulteriores consecuencias—trascendió fuera de él, aumentando el desprestigio en que ya caía el gobierno directorial, hasta recibir, como enseguida lo veremos, el golpe fatal, «en manos del Director Rondeau, último representante enfermizo del





vigoroso centralismo gubernamental que había dado su impulso á la revolución ».

—La anarquía política que reinaba en las Provincias Unidas al finalizar el año 19, llega á su período álgido al comenzar el año 20; año del terrible cataclismo social y político.

Los caudillos del litoral reconcentrábanse en Santa Fé para caer unidos sobre la Capital. El Director Rondeau llama en su auxilio al ejército de Tucumán y á las tropas que el General San Martín retenía en Mendoza y San Juan; pero San Martín desobedece, para realizar su soñada expedición al Perú y el ejército de Tucumán se subleva en Arequito, en la noche del 10 de Enero de 1820, bajo la dirección de los coroneles Bustos y Paz.

Los caudillos López y Ramírez sin temor ya de estos dos ejércitos, marchan sobre Rondeau y lo derrotan por completo en la Cañada de Cepeda, el 1º de Febrero.

La noticia del desastre llegó á Buenos Aires el día 3. El General Rondeau, dice el historiador López (V. F.) había desaparecido como tragado por la tierra. Se levanta entonces y lo reemplaza con valiente energía el Alcalde de primer voto don Juan Pedro Aguirre. Llama á las armas á los *Tercios cívicos*, convoca al Congreso, pone en movimiento las policías, declara la ciudad en *asamblea*, pone en vigencia la ley marcial, manda tomar cuenta y razón de los víveres con que puede contar el municipio, le dá cuenta al Congreso de la situación pidiéndole la creación de auto-

ridades que la regularicen, nombra al general Soler jefe de las fuerzas, le manda formar un campo de reunión en *Morón* y lanza una proclama guerrera en que pone de vuelta y media á los montoneros llamándolos grupos de *salvajes mandados por caudillos ignorantes, perversos y sedientos de la sangre de los porteños.*

El Congreso se reúne y nombra Supremo Director interino al Alcalde de primer voto, señor Aguirre. Este, es secundado valerosamente en sus esfuerzos, por el pueblo, y en dos ó tres días reúne 4.000 hombres, que, si fueron ineficaces para mantener la autoridad del Congreso, y contener el bando!aje anárquico, mostraron por lo menos el ánimo audaz de la resistencia.

Pero, pocos días más tarde, oprimido por el caudillaje se disuelve el Congreso; el General Rondeau renuncia y el Cabildo asume el mando.

Así terminó el glorioso Congreso que había declarado la independencia nacional: desapareció con él la autoridad que representaba la tradición del gobierno general, pero no desapareció la nación. Por tenebrosa que haya sido esta época de nuestra historia, vive todavía en ella el sentimiento y la esperanza de la vida nacional para lo futuro. (Del Valle, confs. cit.).

En posesión del gobierno el Cabildo, convoca al pueblo á la elección de electores para designar un gobernador provincial propietario.

Elígense doce diputados con el carácter de Legislatura Provincial, que, desde entónces y con el nombre de *Junta de Representantes*, desempeña el poder le-



gislativo de la provincia. Esta Junta es la que designa gobernador de la Provincia á Don Manuel de Sarratea. (1).



—  
V.—El 23 de Febrero de 1820 se firma entre los gobernadores de Buenos Aires y Santa Fé, el tratado del Pilar; el cual establecía:

1º Que el voto de la Nación, y en particular el de las provincias contratantes, se había pronunciado respecto del sistema de gobierno que debía regirlo, en favor de la federación, que de hecho admitían; pero que debiendo declararse por diputados libremente electos de los pueblos, se sometían á sus deliberaciones, á cuyo fin, cada provincia debía designar un representante para que se reunieran en el Convento de San Lorenzo en la Provincia de Santa Fé, á los sesenta días de ratificado el tratado. Agregaba el mismo artículo, que como las partes contratantes estaban persuadidas de que todas las provincias de la Nación aspiraban á la organización de un gobierno central, se comprometían á invitarlas y suplicarlas, para que concurrieran con sus respectivos diputados para acordar cuanto pudiera convenir al bien general.

2º Que cesarían las hostilidades desde esa fecha, entre las tres provincias, por haber sido terminadas las dificultades que se oponían á su buena armonía, con

---

(1) La Junta de Representantes estaba compuesta por los Señores Juan José Passo, Juan Pedro Aguirre, Victorio García de Zúñiga, Manuel Obligado, Manuel Sarratea, Vicente López, José de Anchorena, Tomás Manuel de Anchorena, Vicente Anastasio de Echavaria, Antonio José de Escalada, Agustín Lezica, Manuel Luis Oliden.



la supresión de los hombres que habían usurpado el mando de la nación ó burlado las instrucciones de los pueblos que representaban en el Congreso.

3° Que los gobiernos de Santa Fé y Entre Ríos, recordaban á la heroica provincia de Buenos Aires, cuna de la libertad de la Nación, el estado difícil y peligroso á que se veían reducidos sus pueblos por la invasión que ya comenzaba en la Banda Oriental;

4° Que en los ríos Uruguay y Paraná navegarían únicamente los barcos de las provincias amigas cuyas costas son bañadas por dichos ríos, y que el comercio continuaría en los mismos términos hasta que el Congreso resolviera las reformas convenientes;

5° Que podrían volver libremente á sus respectivas provincias, los ciudadanos que con motivo de la guerra, se hubieran expatriado;

6° Que el deslinde del territorio entre las provincias quedaba librado á las resoluciones del Congreso futuro;

7° Que los miembros de la administración depuesta, serían sometidos á juicio ante el tribunal que al efecto se nombrase;

8° Que sería libre el comercio de armas y municiones de guerra entre las provincias federadas;

9° Que los prisioneros de guerra serían puestos en libertad;

10° Que aunque las partes contratantes estaban convencidas de que los artículos arriba expresados eran conformes con los deseos del capitán general de la Banda Oriental, Don José Artigas, según lo había ex-

puesto el gobernador de Entre Ríos afirmando que tenía instrucciones privadas para este caso, se le remitiría copia de esta acta para que siendo de su agrado, entablase las relaciones que pudieran convenir a los intereses de la provincia de su mando;

11° Que el ejército federal se retiraría dentro de las cuarenta y ocho horas de ratificado el tratado, hasta pasar el Arroyo del Medio;

12° Que el tratado se ratificaría dentro de las cuarenta y ocho horas, como en efecto se verificó.

—Después de sucederse en el gobierno de Buenos Aires Sarratea, Balcarce, Soler, Alvear y Dorrego, sube definitivamente al poder, (28 de Setiembre de 1820) el General Don Martín Rodríguez. Este, una vez seriamente reprimida la asonada del 1° de Octubre dirigida por el indómito Coronel Pagola, entró en negociaciones con López en virtud de la intervención amistosa ofrecida por Bustos gobernador de Córdoba; porque «los males habían llegado ya al extremo de ser insoportables; y que por consiguiente, era necesario que la situación se definiese para evitar que se consumase la ruina general de las Provincias.»

Bustos envió dos diputados al litoral para entablar negociaciones y restablecer la buena inteligencia entre las Provincias de Buenos Aires y Santa Fé; *no solo para que queden libres y espeditas las vías respectivas de comunicación, sino para poder reorganizar la nación.»*

López exigió del gobierno de Buenos Aires una asignación de 12,000 pesos al año y 30,000 cabezas de



ganado para indemnizar á los hacendados de su Provincia de los perjuicios que la guerra civil les había ocasionado. El gobierno de Buenos Aires por su parte, exigió la entrega de Carrera y el desarme y disolución de su banda, que López resistió hasta el último momento por razones de lealtad.

En la entrevista que tuvo lugar entre el gobernador de Buenos Aires y el de Santa Fé con asistencia de Rosas, se obligó éste á entregar al segundo una vez celebrada la paz, 26,000 cabezas de ganado.

El 24 de Noviembre se celebró un tratado en el cual se estipuló: 1° Que habría paz, armonía y buena correspondencia entre Buenos Aires y Santa Fé, salvando ambas provincias sus reclamaciones y derechos para que fueran resueltos en el próximo Congreso Nacional;—2° Se obligó uno y otro gobierno á promover la reunión del Congreso en el término de dos meses, remitiéndose sus diputados á la ciudad de Córdoba, sin perjuicio de que, una vez constituido el Congreso, éste decida cual debe ser su residencia permanente. Se estipuló el libre comercio de armas (art. 3°), la libertad de los prisioneros de guerra recíprocos (art. 4°), y los dos gobiernos se obligaron á «remover cada uno en su territorio, todos los obstáculos que pudieran hacer infructuosa la paz celebrada, cumpliendo exactamente las medidas de precaución con que deben estrechar los vínculos de su reconciliación y eterna amistad.» Esta cláusula se refiere á la entrega de Carrera, compromiso que aceptó López en el último momento, reservándose dar aviso al caudi-



llo chileno para que se pusiera en salvo antes de que pudiera ser capturado. (Del Valle).

El Congreso reunióse en Córdoba en el mes de Marzo de 1821, con asistencia de los diputados de Buenos Aires, Santa Fé, Mendoza, Entre Rios, San Luis y Jujuy, é invitó á las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca á nombrar sus diputados al Congreso para reorganizar definitivamente el país, incitándolas al mismo tiempo a poner término á la guerra civil en que se encontraban empuñadas.

Celebraron tratados de paz bajo los auspicios del gobierno de Córdoba, algunas de las provincias contendientes. Tucumán con Santiago del Estero y Catamarca con Tucumán; tratados en que se establecía, entre otras cosas, la cesación de la guerra, la unión estrecha entre las provincias contratantes, mancomunidad de esfuerzos y mútua protección contra el enemigo invasor y contra las convulsiones internas, la adopción de todas las medidas tendentes á la más pronta reunión de un Congreso Nacional, prestar obediencia á las resoluciones de éste y remover los obstáculos que impidieran la realización de tan sagrado como interesante objeto.

Pero todo fué inútil; á pesar de sus esfuerzos, Bustos no consiguió su objeto. Los diputados se retiraron, el Congreso se disolvió, volviendo las provincias á su primitiva situación.

—En el año 1822 desaparecidos del escenario político Artigas y Ramírez, los dos caudillos que ma-



por papel desempeñaron en las convulsiones del año 20, restableciéronse las buenas relaciones entre Buenos Aires, Santa Fé, Entre Rios y Corrientes.

En vista de las resoluciones del *Congreso Cisplatino* forjado entre el General Lecor y el caudillejo artiguista Fructuoso Rivera, que incorporaba la Banda Oriental al imperio del Brasil, el gobierno de Buenos Aires, dice López (V. F.) trató de ponerse en estado de que no lo sorprendiesen los sucesos que podían preverse en la Banda Oriental por la odiosidad con que las masas y los jefes de los elementos populares miraban á la dominación brasilera; y ya para prepararse á todo evento, ya para aprovechar la conjuntura de iniciar la reconstrucción de los vínculos nacionales, promovió un tratado (25 de Enero de 1822) con Santa Fé, Entre Rios y Corrientes, llamado *cua-drilátero* por el número de los contratantes. (1).

Por este tratado se estipuló una paz firme, verdadera amistad y unión permanente entre las cuatro provincias, cuya libertad, independencia, representación y derechos se reconocían recíprocamente, reservando al Congreso de todas las provincias, que debía reunirse en oportunidad más favorable y cuyas resoluciones serían obedecidas como emanadas de la soberanía nacional, las cuestiones de límites que existían entre las de Entre Rios y Santa Fé, (art. 1°). Si

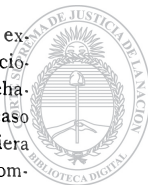
---

1. El tratado cuadrilátero fué firmado por el General Cruz en representación del gobierno de Buenos Aires, por el Dr. Juan Francisco Seguí en representación del gobierno de Santa Fé, por Don Casiano Calderón como comisionado de Entre Rios y por el Doctor Juan Nepomuceno de Goitia como representante de Corrientes.





los españoles, portugueses ó cualquier otro poder extranjero amenazaba la integridad del territorio nacional, todos pondrían en ejercicio su poder para rechazarlo, (art. 2°); esta obligación era extensiva al caso en que el territorio amenazado fuera el de cualquiera de las provincias contratantes, (art. 3°.) Análogo compromiso subsistía para el caso en que cualquiera de las provincias confederadas fuera amenazada por otra de las provincias argentinas, (art. 4°.) Si la provincia invadida ó amenazada hubiera dado motivo para ello, á juicio de las otras tres, éstas debían interponer su mediación para con la agresora, á fin de evitar la guerra, y si esto sucediese con su mediación, aquélla debía darle la satisfacción necesaria, ó correr la suerte que ella misma hubiera provocado, más, si sucediese lo contrario, las tres provincias concurrirían en defensa de la agredida, (art. 5°.) Se convenía, además, que ninguna de las provincias contratantes podía declarar la guerra ú hostilidades á otra del territorio de la nación, sin acuerdo ó consentimiento de las otras, las que tenían el derecho de examinar las causas que la motivaban, (art. 6°); se consagró también el libre comercio de armas, (art. 7°); la libre navegación para las cuatro provincias, (art. 8°.) Buenos Aires renunciaba á todo reclamo por indemnizaciones que tuvieron origen en las invasiones de Ramírez (art. 9°); la provincia de Entre Ríos se comprometía á devolver á Corrientes las propiedades de ésta ó de particulares, sacadas por Ramírez (art. 10°); y á poner en libertad los prisioneros correntinos que figuraban en el ejér-





cito (art. 11°.) Se obligaron recíprocamente á entregarse los desertores (art. 12°); y finalmente, no considerando posible, dado el estado de indigencia en que se hallaban envueltas las provincias de Santa Fé, Entre Rios y Corrientes, su concurrencia al diminuto congreso reunido en Córdoba; y menos conveniente á las circunstancias presentes nacionales, después de separarse de Buenos Aires, única en regular autoridad representativa, para sostener los enormes gastos, empresas comerciales y su naciente autoridad, se obligaban á no entrar en congreso, por ahora, sin previamente arreglarse entre sí, debiendo en consecuencia, la de Santa Fé retirar sus diputados de Córdoba (art. 13°); si como consecuencia de la política que se adoptaba, alguna de las provincias contratantes creía después haber llegado la oportunidad de que se instalara el Congreso Nacional, debían hacerse, entre sí, las invitaciones correspondientes, (art. 14°). El territorio de Misiones quedaba libre para formar su gobierno y reclamar la protección de todas las provincias contratantes, (art. 15°); llegado ese caso el gobierno de Entre Rios, debía devolverle todas sus propiedades, como á la de Corrientes, art. (16°).

Este tratado debía ser ratificado por los gobiernos de Santa Fé y Entre Rios en el término de dos dias, y por los de Buenos Aires y Corrientes en el término de veinte; así se efectuó.

En el documento se consagró, pues, la federación de las cuatro provincias, y se reconoció el vínculo nacional que había unido en el pasado y debía unir



en lo futuro á todos los pueblos argentinos» (1).

VI.—La Junta de Representantes organizada en Buenos Aires en plena anarquía durante el año 20 tomó la iniciativa bajo la influencia de Rivadavia para reorganizar el gobierno general en 1824, sancionando la ley de 27 de Febrero, por la cual autorizó al Poder Ejecutivo « para invitar á los pueblos de la unión á fin de reunir, lo más pronto posible, la representación nacional », y para tomar todas las medidas que condujeran á la realización de acto tan importante.

La base de la representación de las provincias en el Congreso Nacional, debía ser la misma que estableció el Reglamento Provisorio de 1817, es decir, un diputado por cada quince mil habitantes, nombrado por elección directa del pueblo.

La invitación del Gobierno de Buenos Aires fué bien acogida por las provincias; éstas enviaron sus diputados y el Congreso se instaló solemnemente el 16 de Diciembre de 1824, proclamándose soberano y « protestando de nuevo emplear todas sus fuerzas y todos sus recursos para afianzar la independencia nacional y cuanto pueda contribuir á la felicidad general ».

El 22 de Diciembre el diputado por Corrientes Don Francisco Acosta, presentó un proyecto de *Ley fundamental* que fué sancionado el 23 de Enero de 1825 y que debía ser el punto de partida de todas las me-

---

(1) Del Valle,—Conferencias sobre Derecho Constitucional.

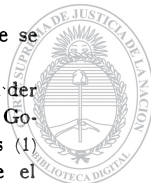
didas del Congreso y aún de la Constitución que se sancionase.

Establecióse en ese célebre proyecto que el Poder Ejecutivo sería provisoriamente encomendado al Gobierno de Buenos Aires con facultades limitadas (1) mientras no se eligiera un Poder Nacional; que el Congreso General, ratificando una vez más la unión nacional, era y se declaraba *Constituyente*; que las provincias interinamente y hasta la sanción definitiva de la Constitución que ha de reorganizar el Estado, se regían interiormente por sus propias instituciones; que el Congreso se reservaría la facultad privativa de expedir, progresivamente, las disposiciones que se hicieran indispensables para la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional; que la Constitución que el Congreso sancionare sería ofrecida á la consideración de las provincias antes de su promulgación.

Cumpliendo con esta última disposición el Congreso sancionó el 21 de Junio de 1825, un decreto por el cual se ordenaba consultar á las provincias, antes de proceder á redactar la Constitución, sobre

---

1.º Estas facultades eran las siguientes: 1.º desempeñar todo lo concerniente á negocios extranjeros; nombramiento y remoción de ministros y autorización de los nombrados; 2.º celebrar tratados, los que no podrán ratificarse sin tener previamente especial autorización del Congreso; 3.º ejecutar y comunicar á los demás gobiernos todas las resoluciones que el Congreso expida en orden á los objetos mencionados en el artículo 4.º objetos expresados en el proyecto y concernientes á la independencia, integridad, seguridad, defensa y prosperidad nacional; 4.º llevar á la consideración del Congreso las medidas que considere conveniente para la mejor expedición de los negocios del Estado.



la forma de gobierno más conveniente para el país; con el fin de afianzar el orden, la libertad y la prosperidad nacional, salvando no obstante el derecho del Congreso para adoptar el sistema que mejor consultase los intereses de la patria. La opinión de las provincias debía manifestarse por medio de sus juntas ó asambleas representativas, eligiéndolas especialmente con ese objeto, donde no las hubiese.

El 21 de Noviembre de 1825, el Congreso, por iniciativa del Poder Ejecutivo, modifica la base de la representación nacional, estableciendo que en lo sucesivo se nombre un diputado por cada siete mil quinientos habitantes ó fracción igual á la mitad de esa cifra; debiendo efectuarse la elección de acuerdo con las leyes y prácticas establecidas en cada provincia y asignándose á cada diputado una compensación de 2,500 pesos anuales.

—Los sucesos que en esos tiempos se produjeron en la Banda Oriental, tuvieron una influencia decisiva en los destinos del Gobierno que el Congreso de 1824 había creado.

La Banda Oriental estaba ocupada por un ejército portugués y era considerada por éstos, como una provincia del Imperio del Brasil, en virtud de lo dispuesto por el *Congreso Cisplatino*.

El 11 de Abril de 1825 sale de Buenos Aires el General Don Juan Antonio Lavalleja á la cabeza de la célebre expedición de los treinta y tres. Desembarca en Arenal Grande; sorprende á Fructuoso Rivera; derrota en el Rincón de las Gallinas á una fuerte divi-



sión enemiga y en seguida obtiene un triunfo completo en Sarandí.

Inmediatamente después de esta victoria, los patriotas orientales reúnen un congreso provincial en el pueblo de *La Florida*, el 25 de Agosto de 1825. Se constituyen en Provincia, nombran gobernador legal á Lavalleja y declaran nulos y fraudulentos, impuestos por fuerza y coacción, los actos anteriores de anexión al Brasil.

La decidida protección de Buenos Aires en estos sucesos á los orientales, fué motivo de reclamaciones por parte del Emperador del Brasil, presentadas al Gobierno de Buenos Aires por intermedio del vicealmirante de la escuadra imperial, Sr. Ferreyra de Lobo; desatendidas éstas por el ministro García, la guerra vino.

Apenas reunido, se había formado en el Congreso una considerable mayoría resuelta á poner fin á las contemplaciones que el gobierno de Las Heras quería mantener con los caudillos del interior; y elegir desde luego un Presidente de la República; subordinar al gobierno nacional las provincias y obligar á los caudillos á que respetasen y cumpliesen las reglas y principios del régimen electoral representativo. Lo raro es que la declaración de la guerra contra el Brasil, se tomase como motivo para justificar este cambio y derogar las Leyes Fundamentales del Régimen Interprovincial, alegándose que ahora más que nunca era necesario que la República tuviese un centro de acción y una sola cabeza dirigente. En vano



fué observar que no habiendo constitución no podía haber Presidente y que siendo constituyente el Congreso no podía «elegir presidente de una República inconstituida» (1).

Pasando sobre todos estos obstáculos y argumentos, el Congreso sancionó el 6 de Febrero de 1826, por 30 votos contra 5, la ley de presidencia; y creó al mismo tiempo cinco ministerios nacionales, á saber: de gobierno, negocios extranjeros, de guerra, de marina y de hacienda, autorizando al Presidente para reunir dos ó más departamentos en un solo ministerio, según lo requirieran las circunstancias.

Al día siguiente fué electo Presidente de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, el Sr. Don Bernardino Rivadavia; inmediatamente constituyó éste su ministerio, encargando de la cartera de gobierno al Señor Don Julián Segundo de Agüero, de la de relaciones exteriores al Señor Don José García, de la de guerra y marina al General Don Carlos de Alvear y de la de hacienda al Señor Don Salvador Maria del Carril, reemplazando al Doctor García que renunció, con el General Don Francisco de la Cruz.

— En la sesión del 18 de Febrero presentó el Presidente al Congreso un proyecto de ley sobre capitalización, por el que la Capital quedaría bajo el gobierno directo del Presidente.

Este proyecto constaba de seis artículos; por el 1º se declaraba la ciudad de Buenos Aires, capital del





Estado, señalándole en el 2º, como distrito, el territorio comprendido entre los puertos de Las Conchas y el de la Ensenada, el Río de la Plata y el de Las Conchas, hasta el puente de Márquez, tirando desde éste una línea hasta el Río Santiago. Se nacionalizaban por el artículo 3º, todos los establecimientos de la Capital, y por el 4º se colocaba en idéntica condición las obligaciones contraídas por la Provincia de Buenos Aires.

El artículo 5º prometía que en el resto del territorio se organizaría una provincia, disponiendo el 6º que, entre tanto, dicho territorio quedaría bajo la inmediata dirección de las autoridades nacionales.

La discusión de este proyecto comenzó el día 22 de Febrero y después de brillantes y acalorados debates lo sancionó el Congreso el 14 de Marzo, por 26 votos contra 14.

Tres días después fué comunicada esta ley al General Las Heras, Gobernador de la Provincia; y como éste la sometiera á la consideración de la Legislatura, el Poder Ejecutivo Nacional expidió un decreto declarando cesante al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. El General Las Heras acusó recibo de la orden; acatóla con dignidad y renunció su puesto; la Junta de Representantes hizo otro tanto, disolviéndose en seguida; quedando por el momento abolido el régimen provincial hasta después de caída la presidencia.

Quizá no se creyó, dice López (V. F.), que las consecuencias de estas medidas se produjeran tan rápi-





damente, ni con tal furor de las pasiones como las que se hicieron sentir al momento. Pero el hecho fué que muchas provincias declararan violento, abusivo é ilegal el proceder del Congreso: que desconocieran al Presidente: que otros lo acompañaran, y que todos, unos para atacar, otros para defenderse, se pusieran en armas; que rompiera una guerra civil general, feroz y sangrienta: que ninguno pudiese continuar mandando tropas al ejército nacional; y que fuese preciso gastar y derrochar en una guerra civil los recursos que debieran haberse empleado en salvar la honra y la integridad en la guerra nacional en que ya estábamos comprometidos sin poder retirarnos.

La ley de capital había herido las susceptibilidades de los localistas. La organización del ministerio, la nacionalización de las aduanas de la República y la demarcación del territorio asignado á la provincia de Buenos Aires, habían encendido las pasiones de los que combatían la forma unitaria. El partido que sostenía los principios federales con Dorrego y con Moreno, fué vencido, y la Constitución de 1826 hechó las bases de una organización que sometía todo el país á las autoridades establecidas en la Capital Nacional. (1)

—

VII. — Hemos dicho ya, que el Congreso de 1824 sancionó un decreto el 21 de Junio de 1825, por el cual se ordenaba consultar á las provincias sobre la

---

(1) Enrique García Mérou, —Curso de Instrucción Cívica.

forma de gobierno más conveniente para el país, antes de procederse á redactar la constitución definitiva.

Las opiniones de las provincias fueron muy diversas: Córdoba, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero optaron por el gobierno representativo republicano federal; Tucumán, Salta y la Rioja, por el sistema unitario ó concentrado; Catamarca, San Luis y Corrientes se libraron á la forma de gobierno que el Congreso sancionara; Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé, la Banda Oriental y Misiones no manifestaron opinión.

Ante esta divergencia y diversidad de intereses, resolvió el Congreso que la comisión de negocios constitucionales (1) aconsejara la forma de gobierno que debía adoptarse.

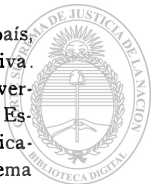
En la sesión del 14 de Julio la comisión presentó el siguiente proyecto de decreto: «La comisión de negocios constitucionales redactará el proyecto de Constitución sobre la base de un gobierno representativo consolidado en unidad de régimen.»

Este proyecto fué motivo de largos debates en que se sostuvieron con calor, las conveniencias y ventajas del unitarismo por unos y del federalismo por otros. (Véase Apéndice g).

Triunfaron los unitarios, sancionándose el proyecto de la comisión por 42 votos contra 11, en la sesión del 19 de Julio.

---

1. Esta comisión estaba compuesta por los Señores Dr. Don Valentin Gómez, Don Manuel Antonio de Castro, Don Francisco Remigio Castellanos, Don Santiago Vázquez y Don Eduardo Pérez.





El 1° de Setiembre se expide definitivamente la comisión, presentando la constitución conocida con el nombre de *Constitución unitaria* de 1826.

Esta Constitución no es más que una simple reproducción de la del año 19, con algunas reformas de detalle. Los miembros de la misma comisión encargada de redactarla, lo manifestaron en su informe al decir, que no habían pretendido hacer una obra original y que habían tomado como base la Constitución de 1819, limitándose á introducir en ella, algunas reformas que debían perfeccionarla.

La discusión de este proyecto de constitución empezó el 11 de Setiembre, siendo aprobado en general después de una ligera discusión, y sancionado definitivamente el 24 de Diciembre de 1826.

La nación, por intermedio de su congreso, confirmaba la declaración de su independencia, y condenaba el principio monárquico, estableciendo que jamás sería ella el patrimonio de una familia ó de una persona.

En su sección primera titulada «de la Nación y su culto», la Constitución, como todas las anteriores, consagraba el principio de una religión de Estado; pero sus autores, aunque pertenecientes á la comunidad católica, participaban y ejercían las ideas regalistas que habían preponderado en el país, antes y después de la revolución de Mayo.

En la sección segunda que se ocupaba de la ciudadanía, se declaraba que eran ciudadanos de la Nación Argentina los hombres libres nacidos en su te-

ritorio y los hijos de éstos, donde quiera que nacieran; los extranjeros que hubieren combatido ó combatieren en el ejército de mar y tierra de la República; los extranjeros establecidos en el país antes de la declaración de la independencia que se inscribiesen en el Registro y los demás que, establecidos después de aquella fecha, obtuvieran carta de ciudadanía.

La ciudadanía se perdía por la aceptación de empleos, distinciones ó títulos de otra nación, sin autorización del Congreso, y por pena infamante; y se suspendía por no haber cumplido veinte años de edad, siendo soltero, por no saber leer ni escribir, requisito que solo era exigible quince años después de la fecha de la aceptación de la Constitución, por la naturalización en otro país, por el estado de deudor fallido, por ser deudor del tesoro público, y por ser criado á sueldo, simple soldado de línea, vago ó procesado en causa criminal de que pudiera resultar pena corporal ó infamante.

En el artículo 7° de la sección tercera dedicada á la forma de gobierno se establecía que: «la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana, consolidada en unidad de régimen» delegándose el ejercicio de la soberanía en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.

La discusión sobre este punto fué iniciada por el diputado Cavia, defensor del sistema federal, en la sesión del 29 de Setiembre. Después de brillantes y acalorados debates, en que intervinieron el diputado Dorego, el *leader* de los federales, por un lado y el Dr.



Valentín Gómez y el diputado Gorriti por el otro, el sistema unitario, por 41 votos contra 11, quedó definitivamente sancionado en la sesión del 4 de Octubre.

La sección cuarta estaba dedicada al Poder Legislativo. Se adoptaba el sistema bi-camarista: una cámara de Representantes y otra de Senadores.

La primera se componía de diputados elegidos por nombramiento directo de los pueblos, á simple pluralidad de sufragios, en la proporción de uno por cada 15,000 habitantes ó una fracción que no bajase de 8000; y la segunda de dos senadores por la capital y otros dos por cada una de las provincias, de los cuales, uno al menos, no debía ser natural ni vecino del distrito de su elección, siendo elegidos por colegios electorales en cada provincia y en la Capital, compuestos de once individuos, resultando electos los que obtuviesen mayoría absoluta de votos en los colegios respectivos; y si no se formaba en ellos, mayoría absoluta, correspondía al Senado la elección entre los tres que hubieran obtenido mayor número de sufragios.

Las calidades para ser elegido diputado eran: veinticinco años de edad, cuatro mil pesos de capital ó en su defecto profesión, arte ú oficio útil, sin dependencia del Poder Ejecutivo por servicios á sueldo, y siete de ciudadanía antes del nombramiento. Duraban cuatro años en sus funciones.

Para ser electo senador se requería: treinta años de edad, nueve de ciudadanía, diez mil pesos de capital ó una renta equivalente ó profesión científica.



capaz de producirla. Su duración era de nueve años.

La Cámara de Diputados tenía como facultades privativas, la iniciativa de toda contribución y el derecho de acusar ante el Senado á los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por delitos de traición, concusión, malversación de los fondos públicos y violación de la constitución, particularmente respecto de los derechos primarios de los ciudadanos, y otros crímenes que merecieran pena infamante ó de muerte.

El Senado juzgaba en juicio político á los acusados por la Cámara de Representantes, requiriéndose para la sentencia contra el acusado dos tercios de votos; ésta no producía otro efecto que el de separarlo del empleo y entregarlo á la justicia ordinaria. Los cargos de diputado y senador eran rentados.

Cada Cámara podía llamar á los ministros del Poder Ejecutivo con el fin de que suministraran los informes que estimara convenientes. Las leyes podían iniciarse en cualquiera de ellas, por proyectos presentados por sus miembros ó por el Poder Ejecutivo, con excepción de lo indicado respecto de las contribuciones ó impuestos. El Poder Ejecutivo podía vetar las leyes que el Congreso sancionara, y éste insistir con dos tercios de votos, en cada cámara.

Como se vé todas estas disposiciones estaban ya prescriptas en la Constitución del año 19.

El Poder Ejecutivo era unipersonal; estaba á cargo de un Presidente, cuyas calidades debían ser las requeridas para senador; duraba cinco años en sus





funciones, no pudiendo ser reelecto en el período siguiente, supliéndole en los casos que preveía la Constitución, el presidente del Senado.

El Presidente era designado por medio de una elección de segundo grado, en la forma siguiente: en la Capital y en cada provincia se nombraba una junta de quince electores en la misma forma que para la elección de los senadores, y el escrutinio lo hacía el congreso proclamando electo al ciudadano que reuniera las dos terceras partes de todos los votos; si no alcanzaba á esa cifra ninguno de los candidatos, correspondía al congreso designarlo entre los tres que mayor número de sufragios hubieran obtenido.

Cinco ministros formaban el consejo de gobierno, á saber: de gobierno, negocios extranjeros, guerra, marina y hacienda, responsables con el Presidente de los actos que suscribieran.

La sección sexta se ocupaba del Poder Judicial. Este estaba confiado á una alta Corte de Justicia, Tribunales Superiores y demás Juzgados establecidos por la ley. La alta Corte se componía de nueve jueces y dos fiscales nombrados por el Presidente con acuerdo del Senado, é inamovibles, salvo por juicio político.

Respecto de los gobiernos provinciales disponía la nueva Constitución en su sección séptima, que éstos serían desempeñados, por un gobernador en cada Provincia y por un Consejo de Administración que no podía ser menor de siete miembros, ni mayor de quince.



Estos gobernadores eran nombrados por el Presidente de la República á propuesta en terna del Consejo Provincial; quedaban bajo la inmediata dependencia del P. E.; duraban tres años en el mando, no pudiendo ser reelectos en el período siguiente en la misma provincia. Los miembros de los Consejos Provinciales debían ser elegidos popularmente por elección directa; estos cargos eran gratuitos.

Las facultades de los Consejos Provinciales se referían, á la educación primaria, á la policía interior, á las obras públicas y establecimientos costeados y sostenidos por sus propias rentas. Los Consejos iniciaban el presupuesto de sus gastos que debía ser aprobado por la legislatura nacional, y cubierto con las rentas particulares de cada provincia, cuyo establecimiento estaba sujeto á la misma formalidad, y debían consistir precisamente en impuestos directos, porque toda contribución indirecta quedaba reservada al tesoro nacional. Si las rentas locales no alcanzaban á cubrir el presupuesto de gastos, el tesoro nacional debía hacer adelantos con cargo de reintegro; si había sobrantes debía invertirse en la misma provincia en objetos que determinase el Consejo Provincial, prévia la aprobación del Congreso.

En todas las Provincias debían establecerse Tribunales Superiores de Justicia. (Del Valle).

— Mientras se discutía la Constitución de 1826, una espantosa guerra civil desgarraba á las provincias. Encendióse esta guerra porque los caudillos, ante la violación de la Ley fundamental de 23



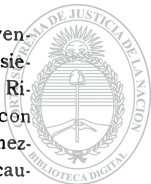
de Enero de 1825 hecha por el Congreso constituyente al crear un Poder Ejecutivo Nacional, no quisieron aceptar ni obedecer la presidencia del señor Rivadavia. El interés común de la patria, en guerra con el Brasil, se pospone á las pasiones rastreras y mezquinas de esos hombres, que, bajo el nombre de caudillos, sublevan las masas, trabándose en una lucha bárbara y sangrienta.

El General Alvear entre tanto obtenía una espléndida victoria en Ituzaingó; pero desgraciadamente su triunfo fué inútil; no obtuvo ventaja alguna. Los elementos bélicos reunidos en Córdoba, Salta, Mendoza y Tucumán que habrían servido para adelantar la campaña y activar las operaciones fueron empleados en la guerra civil.

Sancionada ya la Constitución, los caudillos la rechazan y niegan á Rivadavia los contingentes necesarios para llevar á su término la guerra con el Brasil.

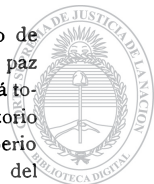
Ante esta situación, la única esperanza de Rivadavia era hacer la paz de cualquier modo y desbaratar con las tropas del Brasil los caudillos del interior. Fué encargado de llevar á cabo las negociaciones el ministro Don Manuel José García.

Pensaba éste que lo primero era salvar el país sin sacrificarlo en holocausto á intereses ajenos; y consideraba de urgente necesidad librar al gobierno del bloqueo que lo privaba de todas sus rentas y traer el ejército, remontarlo en Buenos Aires é imponer respeto á los caudillos y reducirlos á la paz sobre las bases del orden establecido en 1824 durante el



gobierno del General Las Heras. El 24 de Mayo de 1827, firmó García la convención preliminar de paz en que renunciaba, á nombre de la República, á todos los derechos que ésta podía pretender al territorio Oriental; comprometiéndose por su parte el Imperio á regir con sumo esmero la Provincia Cisplatina, del mismo modo ó mejor aún que las otras provincias del imperio, dándole un régimen apropiado á sus costumbres y necesidades, que consagrarse la propia tranquilidad y la de los vecinos. Obligó además á las Provincias Unidas á reducir su ejército al pié de paz, y colocar la isla de Martín García en el *statu quo ante bellum*.

El pueblo de la República al tener conocimiento de este tratado levantó una grito furiosa contra el ministro García; grito producida en parte por el sentimiento irreflexivo del amor propio nacional; pero más que todo—porque el formidable partido que se había formado contra el señor Rivadavia, quería ver caer su gobierno, y nó que se le salvase por la paz que debía darle ejército y renta. El negociador era mirado como un traidor á la honra de la patria; sin tenerle en cuenta la situación política del gobierno que lo había mandado, ni el error de haber iniciado una negociación en semejantes circunstancias — que no era suyo. El señor Rivadavia aprovechó la ocasión para hacer una reprobación aparatosa del convenio; y fundó en ella su renuncia diciendo, que desde que había fracasado la negociación de la paz, no tenía ya medios con que tranquilizar el país, ni con que ha-





cer una paz honrosa con el Brasil. El congreso estaba igualmente convencido de lo mismo. (1)

La renuncia fué presentada en la sesión del día 30 de Junio, siendo aceptada por el Congreso en esa misma sesión.

En reemplazo del señor Rivadavia fué electo el Dr. Don Vicente López en calidad de presidente provisorio el día 5 de Julio y en virtud de la ley de Julio 3 sancionada por el Congreso, sobre la base de tres proyectos sustancialmente idénticos presentados por los diputados Dorrego, Gómez y Arenales, para que se procediera á la elección de un presidente provisorio. (Véase Apéndice *h.*)

Derogado el régimen presidencial unitario las cosas volvieron á su estado anterior; el Presidente interino debía restablecer y rehabilitar la autonomía provincial de Buenos Aires, sus cámaras y sus funciones electorales, para volver al régimen que había tenido bajo el gobierno del general Las Heras.

Organizada la legislatura provincial el 3 de Agosto, designó el día 12 Gobernador del Estado al coronel Dorrego; siendo puesto en posesión de su cargo al día siguiente por decreto del Presidente provisorio.

El 17 de Agosto la Junta de Representantes de Buenos Aires ordenó que se retirasen sus diputados del Congreso Constituyente, y éste quedó de hecho disuelto, concluyendo con su autoridad la del Gobierno Nacional de 1825.

---

(1) VICENTE F. LÓPEZ, --Historia de la Revolución Argentina.

El Gobernador Dorrego trató de constituir de acuerdo con los caudillos provinciales una convención nacional en Santa Fé para que preparase la convocación de un nuevo Congreso y la formación de una *Constitución Federal*.



VIII.—Con este objeto, Buenos Aires inicia una nueva política de reconciliación y de paz entrando en comunicaciones directas é inmediatas con las demás provincias; lo que marcaba, dice el Dr. del Valle, el comienzo de una nueva era en la política argentina que va á caracterizarse por el aislamiento provincial y por los tratados parciales que se multiplican sin éxito; pero que demuestran la vivacidad del sentimiento nacional, aún en esos días de desorganización.

En efecto, el 21 de Setiembre de 1827 celebra con Córdoba un convenio para «asegurar la libertad y los derechos de los pueblos y establecer sólidamente la paz interior de la República»; reconociéndose la igualdad de derechos entre una y otra provincia á la vez que se establecía el compromiso de sostener mutuamente sus actuales instituciones, declarando solemnemente que eran puntos cardinales del tratado «formar nación y cooperar á la guerra contra el emperador del Brasil».

Estipulábase también que ambas provincias nombrarían sus diputados para la convención que debía reunirse en la provincia de Santa Fé, cuyas instrucciones debían recaer sobre los objetos siguientes:



nombramiento de un Poder Ejecutivo Nacional provisorio encargado de la paz, de la guerra y de las relaciones exteriores, al cual se autorizaría para hacer los gastos que estos asuntos demandasen con los fondos que pudiera levantar sobre el crédito común; fijar las bases al Congreso Constituyente que debía reunirse enseguida, deslindándole sus atribuciones y deberes para que constituyera un gobierno nacional de acuerdo con la forma federal.

Por delegación expresa de la provincia de Córdoba las atribuciones de paz, guerra y relaciones exteriores estarían á cargo del gobierno de Buenos Aires, interin la convención se reuniera; obligándose por otra parte á enviar para las necesidades de la guerra un contingente de 600 hombres, siendo de cuenta del gobierno de Buenos Aires proveer de fondos para la movilización y equipo.

Convenios análogos celebró Buenos Aires con las provincias de Santa Fé, Entre Rios y Corrientes.

En virtud de la representación exterior de que el gobierno de Buenos Aires estaba investido por delegación expresa de algunas provincias, celebró el 17 de Agosto de 1828 por intermedio de los ministros plenipotenciarios Don Juan Ramón Balcarce y Don Tomás Guido, un tratado de paz con el Imperio del Brasil, en el cual se consagró la independencia de la Banda Oriental; debiendo ésta constituir en adelante un estado libre y soberano, obligándose las dos partes contratantes á defender la independencia é integridad de la nueva nación.

Terminada la guerra, el ejército recibió orden de volver á Buenos Aires. Desgraciadamente algunos de los gefes principales y los hombres que dirigían el partido unitario habían ya concertado una conjuración creyendo llegado el momento de cambiar el orden de cosas existente en Buenos Aires y de caer sobre los caudillos provinciales.

El 1° de Diciembre de 1828, el General Lavalle á la cabeza del ejército del Brasil, se amotina en la plaza de la Victoria, destituye al coronel Dorrego y se proclama gobernador. Inmediatamente ordena el cese de los diputados designados para la convención nacional de Santa Fé; ésta se disuelve y quedan sin efecto las anteriores estipulaciones.

—Después de todos estos sucesos vuelve Buenos Aires en el año 1829, á celebrar tratados con las provincias de Santa Fé y Córdoba, en los cuales se declaraba en pleno vigor las estipulaciones fundamentales del tratado cuadrilátero de 1822 y se obligaban á invitar á las demás provincias de la República á la reunión de un Congreso Nacional para organizarla y constituirla, luego que, terminada la guerra civil se hubiera restablecido el orden en todos los pueblos; quedando el gobierno de Buenos Aires, autorizado para dirigir las relaciones exteriores del país.

En Febrero del año 1830, Santa Fé y Corrientes celebraron un pacto por el cual debían buscar la adhesión de Buenos Aires y Entre Rios, á efecto de formar una liga ofensiva y defensiva entre las cuatro



provincias litorales, al cual podrían adherirse las otras provincias, siempre que se aceptara como base de la futura organización del país el sistema federal. Buenos Aires se adhirió á este convenio en el mes de Marzo del mismo año.

El 4 de Enero de 1831, las provincias de Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos acordaron el célebre tratado de alianza ofensiva y defensiva conocido con el nombre de *pacto federal* y que veinte años más tarde debía servir como punto de partida para la organización nacional.

En su artículo 1° ratificaban las partes contratantes, todos los tratados anteriores en la parte que estipulaban amistad, paz y unión estrecha y permanente; declarando en los artículos 2° y 3° que era su objeto constituir una alianza ofensiva y defensiva contra la amenaza de cualquier gobierno extraño.

Por el artículo 6°, se comprometían á proceder de acuerdo para iniciar ó aceptar tratados con la otra provincia del litoral ó con las demás provincias argentinas, en la inteligencia de que ninguna se resistiría á hacerlo si dichos tratados no la perjudicaran en sus intereses ó en los que le eran comunes en toda la república; y por el 7° á no dar salida á ningún criminal que huyera de alguna de ellas por cualquier delito, y á entregarlo al gobierno respectivo que lo reclamase.

Establecióse en el artículo 8° que los habitantes de las tres provincias debían gozar de completa seguridad y libertad para entrar y transitar con sus buques



en los puertos y ríos de cada una, y para ejercer en ellas su industria bajo el amparo de la justicia que protegería á los mismos naturales de la provincia.

Los efectos que se importaran ó exportaran de un territorio ó puerto de una provincia á otra, por agua ó tierra, no pagarían más derechos que los que grabasen á los naturales de las provincias de donde ó á donde se exportasen ó importasen.

El artículo 10 prescribía que ninguna de las tres provincias podía conceder á sus naturales derechos, gracias, privilegios ó exenciones de que no disfrutaran los naturales de las otras dos; exceptuándose por el artículo 11, únicamente las funciones de la primera magistratura ú otras de análoga naturaleza, reservadas para los naturales, por las instituciones locales.

El artículo 13 disponía que, en el caso de que una de las tres provincias contratantes fuera atacada por otro poder ó gobierno, las otras dos le debían su concurso en la esfera de su poder y en la esfera de sus medios.

Todas las demás provincias argentinas podrían, con el acuerdo y consentimiento de las tres, adherirse á la convención.

Se constituía en la capital de Santa Fé una *comisión representativa de las provincias litorales de la República Argentina* compuesta de un diputado por cada provincia, que podían ser removidos al arbitrio de sus respectivos gobiernos y cuyas atribuciones serían: 1º celebrar tratados de paz conforme á las instrucciones de sus gobiernos respectivos y sujetos





á su ratificación; 2° declarar la guerra contra cualquier otro poder; 3° levantar ejércitos y nombrar sus jefes superiores en caso de guerra; 4° determinar el contingente de cada una de las tres provincias; 5° *invitar á todas las demás provincias de la República cuando estuviesen en plena libertad y tranquilidad, á reunirse en federación con las tres litorales, y á que, por medio de un Congreso general federalista, se arreglase la administración general del país, su comercio interior y exterior, su navegación, el cobro y distribución de las rentas generales, y el pago de la deuda de la República, consolidando, del mejor modo posible, la seguridad y engrandecimiento de la República, su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad é independencia de cada una de las provincias.*

Este tratado fué sucesivamente aceptado por todas las provincias. .

La comisión representativa de los gobiernos aliados se había reunido en Santa Fé y había invitado ya á los demás pueblos para la reunión de un Congreso federal, según lo establecido en el inciso 5° del artículo 16 del tratado de 1831, cuando un incidente, motivado por comunicaciones privadas de los diputados Dr. Marín de Córdoba y Leiva de Corrientes, dirigidas al interior con el fin de que los gobiernos locales enviasen sus diputados con instrucciones precisas de oponerse á la política de Buenos Aires, caídas en manos del General Quiroga, dió lugar al retiro de los diputados de Buenos Aires y á la disolución de la comisión representativa. (1).

---

(1) DEL VALLE. — Conferencias sobre Derecho Constitucional.





IX.—La dictadura sangrienta de Rosas, dice el doctor del Valle, encierra una profunda enseñanza histórica; pero no ofrece materia para los estudios constitucionales, porque el despotismo no es una institución sino la supresión de todos los principios y reglas del gobierno social.

El 6 de Diciembre de 1829 sube Rosas por primera vez al poder; se le acuerdan facultades extraordinarias, un poder discrecional, abandonándose así á su criterio personal, á sus intereses políticos, y á las maquinaciones de su ambición, la vida, la fortuna, la seguridad personal, las opiniones y el derecho de residir en el país, «para que *arreglase* la administración interior, *previniese* las conspiraciones de los anarquistas y *afianzase* el orden y la tranquilidad pública». Llegado á su fin el trienio de Rosas, la Legislatura lo reelige por unanimidad, pero sin *facultades extraordinarias* el 5 de Diciembre de 1832. Rosas no acepta, y ante las nuevas exigencias presenta por dos veces su renuncia, que, usando de una hipocresía audaz y humillante, acumula en ella cuantas mentiras desleales y notorias puede usar un hombre público para burlarse de los demás. (1).

Se suceden en el gobierno Balcarce, Viamont y Maza, hasta que el 13 de Abril de 1835 sube nuevamente al poder el sombrío y sanguinario tirano, que hizo gemir á nuestro país diez y siete años de terror y humillación.

Nadie hablaba de constitución ni de congreso durante todo este tiempo, pues eso solo bastaba para acarrear la execración y el ódio del tirano.

La tiranía con todos sus horrores, persecuciones y crímenes, tuvo su fin en la batalla de Caseros el 3 de Febrero de 1852.

---



## CAPÍTULO IV

---



siguiente: — I. Acuerdo de 1852 sobre la representación exterior. — II. Acuerdo de San Nicolás. — III. La Confederación y el Estado de Buenos Aires. — IV. Proyecto Constitucional de Alberdi. — V. Constitución de 1853. — VI. Pacto de 11 de Noviembre de 1859. — VII. Convención Provincial de 1860. — VIII. Convenio de unión de 6 de Junio. — IX. Convención Nacional de 1860. — X. Reorganización Nacional. — XI. Convención de 1865. — XII. Convención de 1898.

I. — Caída la tiranía el 3 de Febrero de 1852, á consecuencia de la victoria de Caseros obtenida por el General Urquiza, renació nuevamente el deseo de reconstituir la nacionalidad argentina, tomando por modelo el organismo federal de los Estados Unidos. Y éste, no solo era un deseo particular del General Urquiza, si no de todos en general y sin distinción de partidos.

Pero, al tomar el punto de partida para realizar este propósito, se hizo sentir una marcada disidencia entre los hombres políticos que venían de la emigración. Los unos, dice el distinguido historiador doctor López (V. F.), creían que lo más acertado era tomar por base la situación de hecho en que se hallaban las



provincias, y convocar el Congreso Constituyente cuanto antes, para tener en él una base legal con que entrar en el camino y en el juego de las instituciones fundamentales, dejando á ellas la solución de los problemas, de las ambiciones y de las dificultades que se ofrecieran. Los otros creían que antes era necesario cambiar el estado interno de cada provincia, inutilizando en todas ellas los hombres que habían obedecido ó servido la política tiránica de Rosas, *sometidos ahora á la influencia de Urquiza*. El General Urquiza opinaba, naturalmente, como los primeros: no sólo por el común origen que lo ligaba á los demás gobernadores de provincia, sinó porque ninguno de ellos había hecho armas contra su levantamiento, ni dado el menor apoyo al tirano. Creía, pues, que era impropio de su lealtad aceptar ó servir una política de subversiones y de cambios personales, completamente inútil por otra parte, cuando nadie podía poner obstáculos al fin principal, que era la reconstrucción inmediata del organismo constitucional, y de las libertades á cuyo influjo podía fiarse todo lo demás.

De acuerdo, pues, con estas ideas, después de haber confiado Urquiza el gobierno provisorio de Buenos Aires al presidente del tribunal de justicia doctor don Vicente López, el 6 de Abril del mismo año, se reunieron en Palermo, residencia del General Urquiza, los gobernadores de Buenos Aires y Corrientes, y el doctor don Manuel Leiva, representante del gobierno de Santa Fé, para deliberar sobre la situación y organización de la República, y *proveer á la necesi-*



*sidad más urgente de organizar la autoridad que, de acuerdo con los pactos y leyes fundamentales de la confederación, la debían representar en sus relaciones externas, y declararon:*

1°. Que el derecho público argentino, desde que se instaló el Congreso General en la provincia de Tucumán y se declaró la independencia nacional de todo otro poder extraño, hasta la celebración del tratado de 4 de Enero de 1831 sobre el punto á la autoridad competente para la dirección de ese importante asunto, había variado, según las diversas faces que había tenido la revolución argentina.

2°. Que esta parte del Derecho Constitucional de la República, parecía asumir un carácter más definitivo desde que el Congreso General Constituyente promulgó la ley Fundamental de 23 de Enero de 1825, porque se le encomendó provisoriamente hasta la elección del Poder Ejecutivo Nacional permanente, al gobierno de Buenos Aires, entre otras facultades, la del desempeño de todo lo concerniente á negocios extranjeros, nombramiento de ministros y la de celebrar tratados, quedando su ratificación sujeta á la autorización del Congreso.

3°. Que al disolver el Congreso Nacional y con él la presidencia de la República, reemplazándola con una autoridad provisoria hasta la reunión de una convención nacional, la ley de 7 de Julio de 1827 declaró que las funciones de esa autoridad se limitarían á lo concerniente á la paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional, y que posteriormente por



la ley provincial de Buenos Aires de 27 de Agosto de 1827 se dispuso que hasta la resolución de las provincias, quedaba el gobierno de Buenos Aires encargado de todo lo concerniente á guerra nacional y á relaciones exteriores.

4°. Que aunque desde esa fecha las provincias confederadas estipularon diversos tratados, no se fijó en ellos de una manera uniforme la autoridad que debía seguir cultivando esas relaciones. En el pacto de 4 de Enero de 1831, comunmente llamado la liga del litoral, al cual se adhirieron todas las provincias de la República, se confirió á la comisión representativa que debía reunirse y que se reunió en Santa Fé, las atribuciones que se detallaban en el artículo 16 de ese mismo pacto y que antes habían pertenecido al Congreso General, entre las cuales figuraba la dirección de los negocios externos; que esa comisión dejó al gobierno de Buenos Aires la dirección de esos negocios con la limitación de que debía someterlos á su aprobación mientras permaneciese reunida.

5°. Que posteriormente á su disolución y en la época de la primera administración del dictador don Juan Manuel Rosas, fué encargado nuevamente el gobierno de Buenos Aires de la dirección de los negocios exteriores de la República, con cuya facultad había seguido sin interrupción hasta que había sido modificada para delegarla en la persona del dictador.

6°. Que la desaparición de la escena política de don Juan Manuel Rosas, abolió de hecho esa facultad



que se había arrogado su persona, y restituyó á los pueblos sus respectivas partes de soberanía nacional, pudiendo en tal virtud, delegarla en el gobierno confederado que estuviese en mejor aptitud de representar y defender sus derechos respecto del extranjero.

7°. Que el ejercicio de este derecho fué desde luego puesto en práctica por los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, autorizando plenamente en Mayo de 1851 al Excelentísimo Gobernador y Capitán General de la provincia de Entre Ríos, para que los representase en todo lo que pudiese tener relación con los intereses de la confederación argentina; autorización que fué puesta en ejercicio en dos convenios celebrados en Mayo y Noviembre del mismo año en el Brasil y República Oriental.

8°. Que Santa Fé, de acuerdo con las demás signatarias del tratado de 4 de Enero de 1831, había dado autorización al gobierno de Entre Ríos, para que continuase en la dirección de esos negocios, hasta un acuerdo posterior, en vista de los respectivos pronunciamientos de las demás provincias, á consecuencia del gran suceso ocurrido por la victoria del ejército en los campos de Morón, lo que dicho gobierno ha verificado hasta el presente, con aprobación de todas.

9°. Que habiéndose pronunciado la voluntad de las provincias confederadas, adhiriéndose á la política pacífica y de orden, inaugurada por el general Urquiza, confiándole la dirección de los asuntos exteriores de la República, hasta la reunión del Congreso General





- Constituyente, resolvían: — QUE PARA DEJAR RESTABLECIDO ESTE IMPORTANTE PODER NACIONAL Y ALEJAR TODO MOTIVO DE DUDAS, DANDO GARANTÍAS POSITIVAS Á LOS PODERES EXTRANJEROS QUE SE HALLABAN Ó PODÍAN HALLARSE EN RELACIONES CON LA REPÚBLICA, DE QUE SUS COMPROMISOS REVESTIRÍAN UN CARÁCTER OBLIGATORIO PARA LA MISMA CONFEDERACIÓN, QUEDABA AUTORIZADO EL EXPRESADO GOBERNADOR Y CAPITÁN GENERAL DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, GENERAL EN JEFE DEL EJÉRCITO LIBERTADOR, BRIGADIER D. JUSTO JOSÉ DE URQUIZA, PARA DIRIGIR LAS RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA, HASTA TANTO QUE, REUNIDO EL CONGRESO NACIONAL, SE ESTABLECIERA Á QUIEN COMPETÍA EL EJERCICIO DE ESTE CARGO.

Acordaron en seguida que cada uno de los gobiernos signatarios del tratado de 4 de Enero de 1831, procediesen inmediatamente al nombramiento del plenipotenciario que debía concurrir á formar la comisión representativa de los gobiernos, para que, reunida esta en la Capital de la Provincia de Santa Fé, entrase, desde luego, en el ejercicio de las atribuciones que le correspondía, según el artículo 16 del mismo tratado.

Finalmente, que esta resolución, firmada por los gobernadores indicados y plenipotenciario de Santa Fé, fuera circulada á los gobiernos confederados, para su conocimiento y aprobación, y hasta que ésta no se obtuviera, los poderes signatarios y los gobiernos de Salta y Córdoba asumirían toda la responsabilidad y



trascendencia de este acto, obligándose á cumplir por sí, los compromisos que celebraren con las naciones y gobiernos extranjeros. (Del Valle — *Derecho Constitucional*.)

—

II. — El día 8 de Abril, don Luis José de la Peña, que desempeñaba las funciones de ministro secretario de las relaciones exteriores, se dirigió á los gobernadores de provincia, manifestándoles que el general Urquiza quería decididamente llegar á la organización de la República, tan anhelada por todos los argentinos, y que había concebido para ese fin la idea de una reunión solemne de los gobernadores de las provincias confederadas, con el objeto de formar «el preliminar de la constitución nacional,» á cuyo fin los invitaba á la reunión general que debía tener lugar en San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, el 20 de Mayo del mismo año.

Reconstituida, entre tanto, la Junta de Representantes de Buenos Aires por elección popular, celebró su primera sesión el 24 de Abril, y el 13 de Mayo, nombró gobernador propietario, al provisorio doctor López; quien asistió al acuerdo de San Nicolás con el decidido propósito de concurrir á la reorganización del país.

Además del doctor López, concurrieron á la reunión todos los demás gobernadores de provincia, excepto los de Córdoba, Salta, Jujuy y Catamarca, que delegaron su representación en el general Urquiza. (1).

---

(1) Las provincias de Córdoba, Salta y Jujuy se adhirieron al acuerdo el 1º de Julio de 1839.



El acuerdo constaba de 19 artículos cuyas disposiciones principales eran:—1° Facultar al encargado de las relaciones exteriores para poner en ejecución en todo el país, el tratado de 4 de Enero de 1831 por ser una ley fundamental de la República;—2° Reglar por medio de un Congreso General federalista, la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, cobro y distribución de las rentas generales y el pago de la deuda de la República;—3° Que los artículos de producción ó fabricación extranjera que pasasen de una provincia á otra serían libres de los derechos de tránsito;—4° Que el Congreso General Constituyente se instalaría en el mes de Agosto siguiente, á cuyo efecto cada provincia elegiría los diputados que habían de representarlas;—5° Que el Congreso Constituyente se formaría con dos diputados por cada provincia, estableciéndose así la representación de éstas por igual, —6° Quedaba prescripto el mandato imperativo: el Congreso sancionaría la Constitución Nacional á mayoría de sufragio, y los diputados sin condición ni restricción alguna debían sancionar con un voto lo que creyesen más justo y conveniente, sujetándose á todo lo que la mayoría resolviera;—7° Que era necesario que los diputados estuvieran penetrados de sentimientos puramente nacionales, para que las preocupaciones de localismo no embarazasen la grande obra que se emprendía, debiéndose para tal objeto, elegir á aquellos ciudadanos que más descollaran por su probidad y acendrado patriotismo;—8° Que los diputados



una vez incorporados al Congreso, no podrían ser juzgados por sus opiniones, ni acusado por motivo ni autoridad alguna hasta que no estuviese sancionada la Constitución; es decir, se garantiza la inviolabilidad de los diputados; pero pudiendo cada provincia retirar los suyos cuando lo creyera oportuno con cargo de sustituirlos inmediatamente;—9° Que el encargado de las relaciones exteriores debía proveer á los gastos de dieta de los diputados;—10° Que el mismo funcionario proveería á la libertad de las discusiones del Congreso, tomando para el efecto, todas las medidas oportunas, para asegurar el respecto á la corporación y á sus miembros;—11° Que la convocatoria del Congreso se daría para la Ciudad de Santa Fé;—12° Que una vez dictada la Constitución el mismo cuerpo constituyente nombraría el primer presidente constitucional de la República, y cerraría sus sesiones;—13° Que mientras se dictara la Constitución Nacional, los gobernadores cuidarían de mantener la paz y la tranquilidad en sus respectivas provincias;—14° Pero que si esta paz fuera perturbada por hostilidades abiertas de una provincia á otra, ó por sublevaciones armadas dentro de una provincia, el encargado de las relaciones exteriores emplearía los medios que su patriotismo le aconsejare para restablecer la paz y sostener las autoridades legítimamente constituidas;—15° Que las fuerzas militares que en ese momento tenía en pié cada provincia debían considerarse en adelante, como parte del ejército nacional y por lo tanto, bajo el mando efectivo del director provisorio de la confede-



ración y encargado de relaciones exteriores General Urquiza;—16° Que este mismo, reglamentaría la navegación de los ríos interiores, la administración general de correos y atendería á la mejora de los caminos públicos;—17° Que el director provisorio del Estado quedaba facultado para tener cerca de su persona un consejo de ciudadanos prudentes y sabios con el cual pudiera consultar en los casos graves;—18° Que el encargado de las relaciones exteriores tendría el título de «Director Provisorio de la Confederación Argentina»;—19° Que para cubrir los gastos que demandase la administración de los negocios nacionales, las provincias concurrirían proporcionalmente con el producto de sus aduanas exteriores, hasta que, instaladas las autoridades constitucionales, éstas sancionaren los impuestos de carácter nacional.

—

III. — Inmediatamente de firmado el acuerdo y dado á la publicidad por medio de la prensa en 31 de Mayo de 1852, la opinión pública comenzó á agitarse en Buenos Aires, movida por los que estaban resueltos á todo trance á no aceptar la persona ni el influjo del General Urquiza; ya porque, como dice el doctor López (V. F.) había sido general de los ejércitos de Rosas; ya porque estaba tildado de actos de severidad en la represión de los desórdenes locales, ó en la persecución de las fuerzas orientales que servían á Rivera; ya porque se desconfiaba de su lealtad á los principios que proclamaba, y se sospechaba que su único fin fuera apoderarse de la Dictadura Personal que Rosas deja-



ba desocupada. Concurría también á esto, el sentimiento general de la provincia que miraba como una humillación de su legítima gerarquía ser gobernada desde la altura nacional por un enterriano. No obstante, dice el doctor del Valle, los hechos posteriores demostraron que el temor era infundado y que el General Urquiza era digno, en ese momento, de la confianza pública, porque había acogido, de buena fé, la grande idea de reorganizar al país constitucionalmente.

La Honorable Cámara de Representantes de Buenos Aires fué el teatro de la resistencia. El día 8 de Junio la Sala sancionó por 21 votos contra 2, una minuta en la que ordenaba al P. E. que hiciera saber á los ministros y á todos los empleados civiles y militares que no debían cumplir ni ejecutar, bajo la más absoluta responsabilidad, ningún decreto ú órdenes originadas de facultades ó poderes que se refieren al acuerdo de San Nicolás «hasta que éste sea aprobado por el cuerpo legislativo.»

Es así como se iniciaba la resistencia. Después de los grandes debates de Junio en que descollaron el Dr. Velez Sarsfield y el coronel Mitre, como opositores del acuerdo, y el Dr. D. Vicente Fidel López, ministro de instrucción pública, en su defensa, los sucesos se precipitaron.

El doctor Velez, rebatiendo uno por uno los diez y nueve artículos del mencionado acuerdo y con especialidad los artículos 9 y 10 que encomendaban al Director atender los gastos del Congreso y asegurar la libertad de las discusiones; el 15, que ponía á sus órde-



nes la fuerza armada de toda la República, y el 18 y 19 que declaraban al general Urquiza Director Provisorio y que destinaban á los fines nacionales del provisorio las rentas de las aduanas;—declaraba que el acuerdo no podia aprobarse como un acto diplomático, porque le faltaban todas sus formas, porque los negociadores no habían tenido poderes y por la esencia de las resoluciones que contenía. El gobernador de Buenos Aires se había abrogado facultades que jamás tuvo ningún gobernador para resolver, por su sola autoridad, que la provincia se había de reunir con otras en Congreso con el número de diputados, en el lugar y en la oportunidad que él y otros gobernadores habían determinado; tampoco había tenido facultad para crear en el interior de la Provincia un poder que se levantaba fuera de su órbita en región más elevada, al que debía entregar su dinero y sus armas, subordinando así y casi anulando los poderes provinciales. Los gobernadores reunidos, se habían constituido, contra todo derecho, en cuerpo constituyente, cuando habían creado un poder superior á ellos mismos con carácter nacional; en cuerpo legislativo, cuando habían dispuesto de la renta y de las tropas de las provincias, y en cuerpo electoral, cuando habían designado el Director Provisorio. Se había dicho que se creaba este poder con fuerza real para que mantuviera la unidad nacional durante el período constituyente, y evocó el pasado para recordar lo que el país debía á los gobiernos fuertes.

Por su parte el doctor Vicente Fidel López, hijo



del gobernador y su ministro de Instrucción Pública, ministro de Relaciones Exteriores del Director Provisorio y autor del acuerdo de San Nicolás, abordando el delicado asunto por donde ménos lo sospechaban sus adversarios, como dice el doctor del Valle, llegaba á estas conclusiones: que la ley suprema del país era la nacionalidad, fundada en la unidad del territorio, de la raza, de la historia, en la bandera, en las glorias y en las desgracias comunes; y que todo gobierno de provincia al instalarse, llevaba consigo la obligación virtual de reconstituirla: existiendo la ley, cumplirla era acto esencialmente ejecutivo y de gobierno; que el acuerdo de San Nicolás no era un tratado, sino «un reglamento ejecutivo por el que se allanaba y consumaba el cumplimiento del pacto fundamental que nos rige desde que fuimos nación, pacto que ha sido siempre, que es hoy y que ha de ser nuestra ley nacional»; y que lo único que correspondía á la Honorable Sala era averiguar si los gobernadores habían tocado las atribuciones provinciales al establecer las bases del gobierno nacional, y, si así fuera, eliminar del acuerdo las cláusulas que tuvieran ese vicio. Demostró que todas las facultades acordadas al General Urquiza eran esencialmente nacionales y que la creación de un director provisorio de la Confederación, era el medio más adecuado para iniciar los trabajos de la unidad nacional... y así continúa y aborda todas las cuestiones suscitadas, habla á todos los intereses, remueve la historia para sacar sus enseñanzas, hasta que por fin se levantó la sesión, sin que aún hubiera terminado. (Del Valle, op. cit.)





Al día siguiente, el gobernador presentaba su renuncia, y el general Urquiza daba el conocido golpe de estado del 22 de Junio, disolviendo la legislatura y asumiendo el gobierno de la provincia. Pocos días después, delegado en el general Galán el gobierno provisorio de la provincia, marchaba para Santa Fé con la esperanza de conjurar la tormenta apurando la instalación del Congreso y la sanción de una Constitución liberal que consagrara todos los derechos y asegurara la libertad de todas las aspiraciones legítimas que los partidos pudieran reclamar.

Pero, acababa de salir, cuando estalló en Buenos Aires el levantamiento en armas del 11 de Setiembre encabezado por los que habían dirigido la oposición al acuerdo y apoyado por las fuerzas militares que habían quedado en Buenos Aires.

No fué necesario disparar un sólo tiro, dice el Dr. del Valle. El pronunciamiento se hizo en la plaza Victoria y allí quedó triunfante.

Con ésto, la provincia de Buenos Aires quedó de hecho separada de la Confederación, organizando un gobierno propio y completamente hostil á los trabajos que se hacían en Santa Fé para constituir la nación.

—

IV.—Antes que el Congreso General Constituyente se reuniera en Santa Fé para dictar la Constitución Federal que nos rige y cuya instalación apuraba el General Urquiza, ya en 1852, el distinguido publicista D. Juan Bautista Alberdi, había publicado en



Chile sus «*Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina*»; libro que ha jugado un gran rol en la Constitución general sancionada en 1853 por la Confederación Argentina, como puede comprobarse leyendo el texto del proyecto de constitución del mismo autor que insertamos en el apéndice *i*.

«La victoria de *Monte Caseros*, dice el doctor Alberdi en el capítulo primero de su obra, por sí sola no coloca á la República Argentina en posesión de cuanto necesita. Ella viene á ponerla en el camino de su organización y progreso, bajo cuyo aspecto considerada, esa victoria es un evento tan grande como la revolución de Mayo, que destruyó el gobierno colonial español.

«Sin que se pueda decir que hemos vuelto al punto de partida (pues los Estados no andan sin provecho el camino de los padecimientos), nos hallamos como en 1810 en la necesidad de crear un gobierno general argentino, y una constitución que sirva de regla de conducta á ese gobierno.—Toda la gravedad de la situación reside en esta exigencia. Un cambio obrado en el personal del gobierno presenta ménos inconvenientes cuando existe una constitución que pueda regir la conducta del gobierno creado por la revolución. Pero hoy la República Argentina carece de gobierno, de constitución y de leyes que hagan sus veces. Este es el punto de diferencia de las revoluciones recientes de Montevideo y Buenos Aires: existiendo allí una constitución, todo el mal ha desa-



parecido desde que se ha nombrado el nuevo gobierno.

«La República Argentina, simple asociación tácita é implícita por hoy, tiene que empezar por crear un gobierno nacional y una constitución general que le sirva de regla.

«Pero ¿cuáles serán las tendencias, propósitos, ó miras, en vista de las cuales deba concebirse la verdadera constitución? ¿Cuáles las bases y puntos de partida del nuevo orden constitucional y del nuevo gobierno, próximo á instalarse?—Hé aquí la materia de este libro, fruto del pensamiento de muchos años en el que me propongo ayudar á los diputados y á la prensa constituyente á fijar las bases de criterio para marchar en la cuestión constitucional.»

Como se vé pues, los convencionales del 53 antes de dictar nuestra Constitución actual se hallaron con la publicación del libro del doctor Alberdi, con un sinnúmero de disposiciones y de doctrinas constitucionales y de sabios consejos que no fueron dejados en olvido por los que estaban encargados de dar al país la ley fundamental que debía servir de regla de conducta para el presente y para lo venidero.

El proyecto de constitución del doctor Alberdi, concebido según las bases generales desenvueltas en su obra ya citada, no es más—como el mismo lo dice—que un bosquejo de constitución para dar una idea práctica del modo de convertir en institución y en ley, las doctrinas sostenidas en su libro. «No se puede exigir racionalmente política que no emane de la



constitución escrita. Si aspiramos, pues, á ver en práctica un sistema de administración basado en las ideas de progreso y mejora que prevalecen en la época, demos colocación á estas ideas en las leyes fundamentales del país, hagamos de ellas las bases obligatorias del gobierno, de la legislación y de la política. Un ensayo práctico de la manera de llevar á ejecución esta forma de los textos constitucionales, es el proyecto de constitución con que termino mi trabajo».

En éste por otra parte, nada hay preciso ni determinado en cuanto á la cantidad: pero está todo en cuanto á la sustancia, y todo es aplicable con las modificaciones del caso. «El molde es lo que propongo, no el tamaño ni las dimensiones del sistema», dice el doctor Alberdi en la advertencia que sirve de prefacio y de análisis á su proyecto de constitución.

«El texto que presento, no se parece á las constituciones que tenemos; pero es la expresión literal de ideas que todos profesan en el día. Es nuevo respecto de los textos conocidos, pero no lo es como expresión de ideas consagradas por todos nuestros publicistas de diez años á esta parte.»

A parte de ésto, el proyecto del doctor Alberdi, es claro y sencillo, como que «la claridad de una ley es su primer requisito para ser conocida y realizada; pues no se practica bien lo que se comprende mal». Las doctrinas de su libro, ya mencionado, sirven de cimiento y explicación de las disposiciones del proyecto; ésto, cuando no se vale de notas especiales,



al márgen, para explicar los motivos que no lo están sobradamente en su tratado.

Consta el proyecto de constitución del doctor Alberdi de un preámbulo y de 107 artículos. Se divide en dos partes. La primera trata de los principios, derechos y garantías que forman las bases y objeto del pacto de asociación política; y está dividida en cuatro capítulos: el primero comprende las disposiciones generales, el segundo el derecho público argentino, el tercero el derecho público diferido á los extranjeros, el cuarto las garantías públicas de orden y de progreso.

La segunda parte trata de las autoridades encargadas de hacer cumplir y desarrollar aquellos principios; y está dividida en dos secciones: la primera que se refiere á las autoridades mencionadas, está á su vez dividida en tres capítulos expositivos de las tres ramas esenciales del gobierno: el capítulo primero se refiere al poder legislativo, el segundo al poder ejecutivo y el tercero al poder judicial. La sección segunda que se refiere á las autoridades provinciales, se ocupa de los gobiernos de provincia é interiores.

En el curso de las *«Lecciones de Derecho Constitucional»* del doctor Montes de Oca se hallan no pocas referencias que constantan como, muchas de las disposiciones de nuestra actual Constitución están en un todo con los principios que informan la economía general del proyecto del doctor Alberdi y que comprueban, que la labor de tan eminente publicista



no ha dejado de producir los efectos que su autor se proponía.

—

V.—El Congreso Constitucional Constituyente, preparado por el acuerdo de San Nicolás, concluyó al fin por reunirse en Santa Fé á mediados de Noviembre de 1852.—En él estuvieron representadas todas las provincias, con excepción de Buenos Aires. El 1° de Mayo de 1853 terminaba la Contitucional Federal que nos rige.

Además de la Constitución, sancionó varias leyes orgánicas de importancia tales como la que declaraba á la ciudad de Buenos Aires capital de la Gonfederación, y el Estatuto de Hacienda y Crédito. Practicó el escrutinio de la elección presidencial; recibió el juramento del presidente electo, general Urquiza, en Marzo de 1854, y se disolvió dirigiendo un manifiesto á los pueblos argentinos en que les recomendaba la unión y la fiel observancia de la Constitución.

Antes de disolverse, como Buenos Aires no aceptase nada de lo dispuesto por el Congreso, éste tuvo que declarar, por ley de 18 de Diciembre de 1853, Capital provisoria de la Confederación á la ciudad capital de la Provincia donde fijase su residencia el Gobierno Federal. Consecuente con ésto, el decreto de 29 de Marzo de 1854 designó la ciudad del Paraná para Capital provisoria.

Entre tanto, la Provincia de Buenos Aires promulgaba, por su parte, en 1854, su primera constitución

local que la rigió hasta 1873, y elegía gobernador á D. Pastor Obligado.

---

VI.—Este estado de cosas no duró mucho tiempo. En efecto, por ley de 21 de Noviembre de 1854 el primer Congreso legislativo federal, deseoso de ver constituida la unidad nacional, autorizó al poder ejecutivo para poner término á la separación, haciendo para ello y según lo aconsejaban las circunstancias, la paz ó la guerra con la provincia de Buenos Aires.

Pero, las divergencias que mantenían este estado de cosas quedaron sin solucionarse por algunos años produciéndose diversos conflictos y convenios que en nada alteraban la gravedad de la situación;—hasta que vueltas á iniciarse en las provincias nuevas manifestaciones en favor de la reincorporación de Buenos Aires, «por la razón ó por la fuerza», y dictada la ley de 20 de Mayo de 1859, en que se autorizaba al Presidente de la Confederación para resolver en una ú otra forma la cuestión de la integridad nacional, el problema tuvo su solución en los campos de Cepeda, el 22 de Octubre de 1859 y en el que quedó disperso el ejército provincial. Sin pérdida de tiempo el ejército de la Confederación avanza sobre la Capital; llega hasta San José de Flores, se inician nuevas negociaciones de paz y se celebra por fin la convención conocida en la historia por el «pacto de 11 de Noviembre de 1859.»

En él se declaró que Buenos Aires era parte integrante de la Confederación Argentina y que verifica-





ría su incorporación por la aceptación y jura solemne de la Constitución Nacional después de someterla al exámen de una convención local (1). Las reformas que ésta propusiera serían sometidas á una convención *ad hoc*, á la cual concurriría Buenos Aires con un número de diputados proporcional á su población, comprometiéndose á respetar lo que resolviera dicha convención, siempre que se salvara la integridad del territorio de la provincia, que no podría ser dividido sin consentimiento de su legislatura. Por otra parte, Buenos Aires suspendería, inmediatamente, sus relaciones diplomáticas con el extranjero, y continuaría con la propiedad y administración de todos sus establecimientos, á excepción de la aduana, que pasaría á la Nación.

—

VII.—Ratificado el pacto de 11 de Noviembre, Buenos Aires convocó la célebre convención de 1860, que introdujo en la constitución de 1853 las siguientes reformas:

a). Suprimió el artículo que declaraba capital de la República la ciudad de Buenos Aires, sustituyéndolo por el artículo 3° de la constitución vigente.

b). Suprimió las cláusulas en que se obligaba, á las provincias á dar gratuitamente la instrucción primaria, y someter sus constituciones á la aprobación del Congreso.

c). Modificó el derecho de intervención, suprimiendo

---

(1) Se le acordó esta facultad en virtud de no haber tomado parte en su redacción, representantes suyos, como ya sabemos.





la facultad concedida al gobierno federal para intervenir, sin requisición de las autoridades provinciales, en los casos de sedición.

d). Estableció que los derechos de exportación concluirían en 1866 como impuesto nacional; agregado suprimido por la convención nacional reunida ese año en la ciudad de Santa Fé; pues hallándose el país en guerra con el Paraguay, no era justo privar al tesoro nacional de tan importante fuente de renta.

e). Agregó á las declaraciones de la constitución de 1853, los artículos 32, 33, 34 y 35 de la constitución vigente.

f). Agregó, como requisito para ser diputado, el de haber nacido en la provincia respectiva ó tener dos años de residencia inmediata en ella.

g). Suprimió el juicio político de los gobernadores de provincia, ante el Congreso.

h). Suprimió la facultad privativa acordada al Senado para iniciar la reforma de la Constitución.

i). Suprimió la facultad que tenía el poder ejecutivo de suspender las garantías constitucionales, en los casos de urgencia, aún estando reunido el Congreso.

j). Modificó lo relativo á la competencia de los tribunales federales.

—

VIII.—El 6 de Junio de 1860 se celebró el convenio de unión entre el gobierno de la Confederación y el del Estado de Buenos Aires, cuyo objeto, declarado en el preámbulo, fué dar cima á la importante obra



de la integridad nacional, á fin de que cuanto antes el Congreso Legislativo Nacional se completase con la incorporación de senadores y diputados de Buenos Aires, para que, de ese modo, uniformadas las leyes, desaparecieran para siempre los obstáculos políticos y las complicaciones que hasta entónces habían existido entre las dos secciones del pueblo argentino, y se estableciera sobre bases sólidas, un vínculo perpétuo de unión, sin desdén, ni excepciones odiosas.

En este convenio se acordó que el gobierno nacional presentaría al Congreso inmediatamente, las reformas de la convención de Buenos Aires para que éste convocara la convención *ad hoc* que las debía tomar en consideración, según los establecido en el artículo 5° del pacto de 11 de Noviembre; que las provincias todas nombrarían sus diputados á la convención en la proporción establecida por el artículo 34 de la constitución; que para que la convención fuera la expresión genuina de los intereses generales del país, se recomendaría, como condición, la de que fueran naturales ó residentes de las provincias que los eligiesen; que una vez consideradas las reformas por la convención, Buenos Aires, juraría la Constitución, y el Poder Ejecutivo prorrogaría las sesiones del Congreso Legislativo, para que pudiera ser integrado por los diputados y senadores de Buenos Aires, ó lo convocaría extraordinariamente, á fin de que la provincia ejercitara lo más pronto posible la plenitud de sus derechos; que el gobierno de Buenos Aires continuaría en el régimen y administración de los efectos com-



prendidos en el presupuesto de 1859, hasta que, incorporados sus diputados al Congreso, dispusiera éste sobre la materia, exceptuando lo relativo á las relaciones exteriores; los productos naturales y manufacturados de Buenos Aires y la Confederación serían libres de derechos de introducción en todo el territorio de la República, obligándose además el gobierno nacional, á dictar los reglamentos que juzgara favorable para la admisión del papel moneda de Buenos Aires. (Del Valle).

—

IX.—La convención nacional *ad hoc* se reunió en Santa Fé en Setiembre de 1860 y nombró una comisión para que informara *in voce* sobre las reformas presentadas por la de Buenos Aires, y en tres sesiones terminó su cometido, aceptándolas con algunas modificaciones insignificantes y de mera forma.

La constitución sancionada entónces es la que actualmente nos rige.

—

X.—Perturbada la paz pública por una nueva revolución en la provincia de San Juan, la intervención del gobierno nacional y la ejecución del doctor Aberrastain, hechos éstos del dominio de la historia—Buenos Aires volvió á colocarse en actitud de resistencia respecto de las autoridades de la Confederación.

Por su parte, el Congreso del Paraná sancionó, el 5 de Julio de 1861, una ley en que declaraba que Buenos Aires había roto los pactos vigentes y asumido una actitud sediciosa, que debía reprimirse por



medio de una intervención encargada de restablecer el orden legal.

Estos sucesos tuvieron su desenlace en la batalla de Pavón, el 17 de Setiembre 1861, en la que el triunfo favoreció las armas de Buenos Aires, disolviéndose la organización gubernamental de la Confederación, para dar paso á una nueva reorganización constitucional de todo el país bajo la dirección del general vencedor, don Bartolomé Mitre, gobernador entónces de Buenos Aires. y en quién todas las provincias delegaron el Poder Ejecutivo Nacional.

Elegido Presidente de la República el general Mitre, su administración abrió la serie de los gobiernos regulares que se han sucedido en la nación, bajo el imperio de la constitución reformada, vigente hasta la fecha.

—

XI.—Empero, á más de las reformas que en el año 60, como ya dijimos, había operado en ella la Provincia de Buenos Aires, sufrió otra, pero de poca importancia política, aunque de trascendencia económica, el 14 de Junio de 1866, por la que, se suprimió la limitación de seis años que el inciso 1° del artículo 67, establecía para el cobro de los derechos de exportación.

—

XII.—No sucedió así con la reforma llevada á cabo en el año que transcurre.

La que operó la convención nacional nombrada al efecto es de suma trascendencia. En ella se establece



Art. 1° Quedan reformados los artículos 37 y 87 de la Constitución Nacional, en la siguiente forma:

Art. 37—La Cámara de Diputados se compondrá de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Capital, que se consideran á este fin como distritos electorales de un sólo estado y á simple pluralidad de sufragios. El número de representantes será de uno por cada treinta y tres mil habitantes ó fracción que no baje de diez y seis mil quinientos. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado.

Art. 87—Ocho Ministros Secretarios tendrán á su cargo el despacho de los negocios de la Nación que refrendarán y legalizarán los actos del Presidente por medio de su firma sin cuyo requisito carecen de eficacia. Una ley especial deslindará los ramos del respectivo despacho de los Ministros. (1)

—Se había propuesto una tercera reforma sobre puertos libres en los territorios del sud, pero no pudiendo uniformar sus ideas, la Convención creyó oportuno no insistir sobre este punto. Así, pues, que la Constitución Nacional que nos rige actualmente es la sancionada por el Congreso de Santa Fé el 1° de Mayo de 1853, con las modificaciones de que hemos dado cuenta.

---

(1) Debemos algunos datos al respecto á nuestro distinguido amigo Dr. Delfo W. Carranza.



## ANTECEDENTES EXTRANJEROS

---

SUMARIO: — I. La Constitución de Inglaterra: *a* tratados, *b* cartas, *c* estatutos, *d* *common law*. — Sistema representativo. — Reseña de los poderes de la Gran Bretaña. — II. Las Colonias Inglesas de Norte-América. — III. Confederación de los Estados Unidos. — IV. Constitución de los Estados Unidos. — Enmiendas. — V. Influencias de las ideas francesas en el régimen constitucional argentino.

I.—De todas las constituciones libres, dice Boutmy, la Constitución inglesa es incontestablemente la primera por su antigüedad, su importancia y su originalidad: como que se remonta á una edad respetabilísima; ha servido más ó ménos de modelo á todas las que existen hoy en día, y contiene la clave, el verdadero sentido de más de una de sus disposiciones. De ahí pués, que un estudio general del derecho constitucional positivo, no puede ser abordado con lucidez sin antes conocer á fondo tan importante fuente.



Su originalidad es manifiesta:—ella no se compone de un solo texto, sino de varios textos; textos de todas las épocas y que jamás han sido codificados, no siendo raro que sobre toda cuestión un poco importante, sea necesario referirse á un número variado de leyes, separadas las unas de las otras por siglos, ó de séries de precedentes que se remontan á épocas muy lejanas en la historia. La composición de la Cámara de los Lores, por ejemplo, resulta de diferentes estatutos de 1707, de 1801, de 1829, de 1847, de 1869, de 1876, de una desición de los jueces del año 1782, y de un sinnúmero de usos.

—

De cuatro fuentes principales se compone el derecho constitucional inglés: los *tratados* y los *quasi-tratados*; los precedentes y los usos conocidos ordinariamente con el nombre de *common law* (derecho consuetudinario); los *pactos* ó *cartas*; y los *estatutos* ó *leyes*. La primera y las dos últimas categorías forman la parte escrita de la constitución; la segunda representa la parte no escrita; distinguiéndose unas de otras, no solo por la forma, sinó por sus caracteres profundos, los objetos que reglan y el espíritu que las ha dictado.

a) Los tratados son dos: el acto de unión con la Escocia de 1707, y el acto de unión con la Irlanda de 1800.

El primero se compone de dos leyes votadas, la una por el parlamento escocés y la otra por el parlamento inglés, y sancionadas separadamente por



Ana, reina de Escocia, y por Ana, reina de Inglaterra (1).—Por esa época, si bien ambos países se hallaban unidos por lazos personales y de dinastía, hallábanse no obstante tan separados por sus gobiernos, legislación, sistema de impuestos, comercio y constitución de sus iglesias que solo faltaba que aquellos se rompieran para que la separación fuera de las más absolutas, como efectivamente iba á suceder, pués por entónces amenazaba concluir. Solo una hábil política pudo evitar el desenlace final. El acto de unión de 1707 solucionaba el problema.

Algo semejante al tratado de 1707, es el acto de unión con la Irlanda de 1800. Este también se compone de dos leyes y que como las dos del anterior tratado, no son más que la ratificación de un mismo instrumento.—La Irlanda tratada durante mucho tiempo como país conquistado, acababa precisamente de obtener del parlamento inglés. á raíz de la guerra de América, una autonomía casi completa.

En 1782 se había decidido que ella no sería sometida sino á sus propias leyes y á sus propias cortes de justicia, y que el parlamento irlandés tendría el libre uso de su iniciativa, hasta entónces subordinada á la aprobación del consejo del Rey. Estas consecuencias hubieran podido ser la fuente de más graves complicaciones para el gobierno de Westminster. Se consideró indispensable entónces durante la corta lo-

---

(1)—Estas leyes no son más que la ratificación de un mismo instrumento elaborado por una comisión compuesta por los representantes de ambos reinos, expresamente autorizados para ello.





cura de Jorge III, el establecimiento de una regencia. Pero, nada impedía expresamente al parlamento irlandés de hacer otra elección distinta de la del parlamento inglés. Habría habido en este caso, dos regentes, uno en Dublín y el otro en Londres; y de dos regentes á dos reyes el paso era rápido.—Con ésto, la unión de las dos coronas, la sola unión que subsistía, amenazaba concluir, esto mayormente cuando la proximidad de la Revolución Francesa aumentaba el peligro.—Pero, he aquí que, en 1794 estalla una formidable rebelión: Pitt, se levanta, en el espacio de pocos meses consigue comprar con dinero ó con honores la mayor parte de los miembros de las cámaras irlandesas, y en 1800, el parlamento de Dublín, renuncia solemnemente á la independencia nacional.

—El objeto y las consecuencias de estos dos actos de unión, están indicados por su mismo título. El primero, el de 1707, ha hecho de la Escocia y de Inglaterra un solo estado bajo el nombre de Gran Bretaña. El segundo, el de 1800, á unido la Irlanda á la Gran Bretaña y constituido el Reino Unido.

La forma práctica bajo la cual esta doble consolidación se presenta es: 1.º la adopción de una misma dinastía para los dos reinos unidos, fijada á perpetuidad en la línea protestante de la casa de Hannover; 2.º la introducción de cierto número de miembros escoceses é irlandeses en las dos cámaras del parlamento inglés.

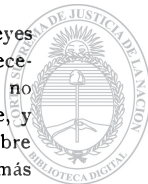
Constituido de esta suerte, el parlamento legisla

válidamente para todo el Reino Unido; pero las leyes particulares de Escocia y de Irlanda que han precedido á la unión, permanecen en vigor mientras no sean abrogadas. Las hay en número considerable, y sus diferencias son frecuentemente tales que, sobre un gran número de casos, el parlamento halla más ventajoso hacer un acto especial para cada reino. He aquí porque á menudo se encuentra al principio ó al fin de un estatuto, la mención: «No se aplique á la Escocia ó á la Irlanda». Para otras partes del territorio, por ejemplo para las islas de Man y las islas Normandas, esta excepción no es necesaria. Estas islas se hallan sometidas á las leyes que expresamente se les dicta.

—

Una de las prescripciones más importantes de estos dos actos de unión, es la concerniente á la Iglesia.

La Iglesia episcopal ha permanecido en Inglaterra, una Iglesia *establecida*, lo que significa, que ella es la que está posesión de las iglesias parroquiales, de los beneficios, de los diezmos, de los cementerios; que su dogma, su constitución, sus libertades, su jurisdicción y sus ritos están reglados y sancionados por la ley; que la Reina presta juramento de mantenerla, y que el gobierno interviene en su administración, especialmente por el nombramiento de los altos dignatarios y de ciertos titulares de beneficios.—Por el contrario, en Escocia, la Iglesia presbiteriana es la que ha sido reconocida como Iglesia oficial por el





acto de 1707; es la que la ley consagra y que ha puesto en posesión de los edificios y de las rentas eclesiásticas.

Hay sin embargo en Escocia, una Iglesia episcopal; pero es una iglesia libre, del mismo modo que lo es en Inglaterra la Iglesia presbiteriana.

La Gran Bretaña pues, tiene dos Iglesias de Estado, y la corona, sostén legal de la gerarquía sacerdotal de este lado del Twed, és, del otro lado, el sostén legal del sistema opuesto.

Por el contrario, la Irlanda no tiene Iglesia oficial. La Iglesia episcopal protestante de Irlanda que no constituyó más que una con la Iglesia de Inglaterra, no ha mucho, en 1869 ha sido *disestablished*, es decir, separada del Estado y desposeída de sus bienes, bajo ciertas reservas que salvaguardan el interés de los actuales tutelares. Ella ha llegado á ser pues de este modo una Iglesia libre.

—

Se puede considerar como un tercer tratado, el acto de 1858 sobre el gobierno de las Indias. Había ahí, en efecto, no una soberanía en la verdadera acepción de la palabra, pero sí una quasi-soberanía que se ha extinguido y de la cual la nación ha recogido la herencia.

Por este acto, la Compañía de Indias, en favor de la cual la corona había enagenado una parte de sus derechos de regalía, y la que por la extensión de sus recursos, su poder militar y financiero, la autoridad casi sin control que ella ejercía sobre sus con-



quistas, constituía una especie de Estado distinto dentro del Estado—hizo el abandono de su autonomía. Mediante un compromiso que ha atribuido á los directores de la Compañía el nombramiento de siete miembros sobre quince en el consejo supremo, la corona ha vuelto á tomar posesión de este inmenso territorio y que gobierna desde entónces por el ministerio de un secretario de Estado, especial.

—

Con respecto á sus otras colonias, Inglaterra ha seguido una política inversa.

A las más poderosas y á las más civilizadas, el Canadá, el Cabo de Buena Esperanza y las provincias australianas, les ha acordado una constitución representativa y parlamentaria, con un ministerio responsable, y además el derecho de modificar ellas mismas esta constitución, bajo la aprobación de la corona; constituyendo así, una pléyade de Estados casi independientes y adheridos al Reino Unido solo por tres puntos:—el nombramiento por la corona de su gobernador, depositario nominal del poder ejecutivo; la representación diplomática de la que se encarga por ellos la Inglaterra; y una corte superior de apelaciones que ella conserva para su uso. El parlamento de Westminster guarda en poder, el derecho de legislar soberanamente para todas las partes del imperio británico; pero en el hecho, él no se mezcla en el gobierno interno y en la legislación particular de las grandes colonias.

Por otra parte, el secretario de Estado colonial,



parece haber renunciado en apariencia, al ejercicio de su derecho de *veto*. Pero, ningún signo revela más claramente la plenitud de la autonomía de la cual ellas gozan prácticamente, que el mantenimiento perseverante de las tarifas proteccionistas para la Australia y el Canadá, en contra de los intereses de la madre patria. La Inglaterra poco á poco retira de sus territorios de ultramar, las tropas que les prestara para su defensa, abandonándolas á sí mismas.

De ahí que las colonias pueden pues considerarse hoy, ó por lo ménos en un porvenir no lejano, no ya como provincias, pero sí como Estados poco ménos que soberanos, y adheridos á la madre patria solo por la comunidad de raza, de lengua y de tradiciones.

—

b) Los tratados y los quasi-tratados, no son más que un anexo y hasta cierto punto una parte exterior de la Constitución inglesa. Son los *pactos* ó *cartas*, los *estatutos* y el *common law*, los que forman por decir así, el cuerpo del derecho constitucional inglés.

Los primeros contienen principalmente limitaciones y restricciones del poder real y son tres: la Carta Magna de 1215, el bill de Derechos de 1688 y el acto de Establecimiento de 1701. Estos pactos son, como los *estatutos*, la obra común de las tres ramas del parlamento, es decir, del Rey y de las dos cámaras; pero, se distinguen de estos últimos en que el Rey no interviene en ellos como parte *integrante* de un mismo poder legislativo con los lores y los comunes, sinó como una verdadera parte *contratante*, frente de



la cual, la nación aparece como una personalidad distinta é independiente. Así que, la unión concertada bajo la forma regular y ordinaria de los tres factores constitucionales, desaparece aquí. Parécese ésto más bien á un acercamiento entre dos poderes, que, empezando por vigilarse y desconfiar el uno del otro y lanzados de vez en cuando á la lucha, concluyen por tranzar, estipulando mútuas garantías.

—El primer pacto de esta naturaleza es la *Carta Magna*.—Los abusos y violencias cometidas por el Rey Juan, ocasionaron una resistencia tenaz por parte de los barones. En 1215 se coaligan, levantan tropas y se declaran desligados del juramento de alianza prestado á su soberano. Abandonado por todos, el Rey cede, entra en negociaciones y firma el instrumento conocido con el nombre de *Carta Magna*.

Este acto, no constituye precisamente un tratado, puesto que no intervienen en él dos soberanos legítimos ni dos naciones en presencia; no es tampoco una ley; simplemente, no es más que un compromiso, un pacto, entre dos partes beligerantes; y por el cual al Rey no le queda otro camino que aceptar las condiciones impuestas por los vencedores. En este acto los barones estipulan que si el Rey falta á su palabra, ellos se reservan el derecho de apoderarse de sus castillos y de molestarlo por todos los medios posibles. En cuanto á lo que se refiere á la organización feudal, sus principales artículos tienen por objeto reivindicar la libertad individual y sentar reglas tutelares para la acusación y el enjuiciamiento de los ciudadanos. Establece además



que ninguna ayuda, subsidio ó contribución será levantada sin el parecer ó el consentimiento del común consejo del reino; regla cuidadosamente la convocación de un común consejo y las condiciones necesarias para la validez de sus deliberaciones, y establece una comisión permanente de veinticinco barones para vigilar la administración del reino. Esta comisión se completaba ella misma en el caso que en su seno se produjera una vacante. La Carta Magna, en nuestros días, solo tiene un interés histórico. Sin embargo, su espíritu vive aún:—es él, el que anima todavía á la Inglaterra contemporánea.

—El segundo pacto, es el *bill de Derechos de 1688*. —En esta época Jacobo II no solo fué sospechado de querer restaurar el papismo en Inglaterra, sino que, hasta se había hecho odioso á los ingleses por sus medidas arbitrarias. Una parte de la aristocracia llama á Guillermo, príncipe de Orange; Jacobo huye; y las dos cámaras, convocadas por Guillermo á requisición de una asamblea de notables, haciendo enmudecer sus escrúpulos, pronuncian que el trono está vacante.

El nombramiento del nuevo rey debía recaer en el príncipe de Gales que era el llamado á la sucesión por las leyes del reino; pero éstas fueron hechas á un lado; y la Cámara de los Lores soluciona el problema confiriendo la dignidad real al príncipe de Orange y á su hermana Maria. La Cámara de los Comunes acepta sin dificultad lo dispuesto por la Cámara de los Lores, pero reusa votar dicha fórmula pura y simplemente. Ella redacta un texto en donde anuncia y reivindica



todas las libertades y todos los derechos violados por Jacobo II, y toma la precaución de incorporar este texto, á título de preámbulo y de argumento en la declaración que llama al trono á Guillermo y á Maria; todo lo que fué leído solemnemente ante el príncipe y la princesa en la gran sala de Whitehall.

Esta declaración de derechos, comprende trece artículos, conteniendo casi todos, limitaciones á la prerrogativa real. Se le niega al Rey el derecho de suspender las leyes, dispensar su ejecución, instituir tribunales especiales, infligir castigos excesivos, restringir el derecho de petición ó la libertad de palabra en el parlamento, intervenir en las elecciones parlamentarias y levantar impuestos sin el concurso de ambas cámaras. Es, no obstante todas estas bellas declaraciones, significativo el hecho de que ni la libertad de la prensa, ni la libertad religiosa, se hallan amparadas en este bill de derechos. En cuanto á las garantías estipuladas para la conservación de las libertades conquistadas, no hay más que una:—la de que el parlamento sea reunido frecuentemente—y esto es todo.

—El acto de Establecimiento de 1701, presenta caracteres diferentes. Guillermo III no tenía hijos. La reina Ana acababa de perder su hijo y no esperaba mas posteridad. Todos los herederos protestantes descendientes de Jacobo II habían desaparecido; quedaban solo los descendientes católicos, Jacobo III y la duquesa de Savoya. Pero éstos no podían subir al trono á menos que abjuraran. En este estado de cosas, el parlamento sin tener en cuenta el orden dinástico y





sin dar tiempo á que Jacobo III regenerara su aptitud á la corona por un cambio de religión, transporta definitivamente la dignidad real en una familia extranjera, la de los Brunswick-Hanover, salida de una filiación larga y olvidada del rey Jacobo I.

Este acto de Establecimiento, y al cual á semejanza del *bill* de 1688 se incorporan ocho artículos, que obligan eventualmente á todo el que ocupa el trono, á someterse á todas las condiciones contenidas en el texto, es algo más que una ley; que no obliga al rey Guillermo ni á la reina Ana, sinó á la futura dinastía no consultada para ello y al cual debe ajustar sus futuros actos de gobierno. Es pues más bien, dicho acto, un mandato imperativo. He aquí su semejanza con el *bill* de derechos de 1688.

El acto de Establecimiento comprende ocho artículos. El primero y que es fundamental, estatuye que el rey debe ser en comunión con la Iglesia establecida en Inglaterra; los tres siguientes son circunstanciales: son destinados á prevenir los abusos y los daños que puedan resultar del advenimiento de un rey extranjero. Pero la importancia del acto de Establecimiento, por lo que respecta al derecho constitucional, se halla en las últimas cuatro cláusulas. Dos de ellas son una tentativa para destruir el poder del gabinete, excluyendo á los ministros del parlamento y anegándolos, por decir así, en un gran consejo privado. Esto no era más que la resurrección de un plan, frustrado bajo Carlos II, y que se frustró de nuevo definitivamente. "

Otra cláusula prohíbe detener por el perdón real el



curso de una acusación intentada por la Cámara de los Comunes. El último artículo en fin, proclama el importante principio de la inamovilidad de los jueces.

—

c) La tercera fuente del derecho constitucional inglés, la forman los *estatutos* ó leyes. Estos tienen un campo más vasto que los pactos: ellos complementan las garantías judiciales ligeramente esbozadas por los pactos y abarcan la libertad religiosa y las grandes libertades políticas: prensa, asociación, reunión—no comprendidas por los pactos—y todo lo que se refiere al derecho electoral.

Los estatutos son actos votados por las dos Cámaras regularmente constituida y sancionados libremente por la corona. Todas las cuestiones, tanto las más graves como las más insignificantes, son del dominio de los estatutos ó leyes. Los ingleses no conocen las asambleas constituyentes tan distintas de las asambleas legislativas. Cada parlamento se considera como autorizado para proceder indiferentemente en estas dos capacidades; es decir, el parlamento inglés es poder constituyente y es poder legislativo á la vez. Así la revisión de los estatutos no se halla sometida en Inglaterra, como en otros países y como en el nuestro la revisión de la Constitución, á un procedimiento particular. Basta una ley ordinaria emanada del parlamento para que de la misma manera que han sido dictados, sin dificultad alguna, queden de hecho modificados.

Bien dijo alguien que el parlamento en Inglaterra



lo hace todo, ménos cambiar un hombre en una mujer y vice-versa; lo que no deja de ser un grave peligro para las instituciones políticas del país, pues ¿qué hay de fijo y de durable si una constitución participa de la movilidad de una ley ordinaria, y si nada ata las manos á un parlamento temerario llevado por el prurito de reformarlo y de cambiarlo todo: Y cosa original, los ingleses no desconocen estos peligros, pero como buenos sajones, no se alarman por ello. Para ellos el espíritu público y el prestigio de las costumbres son una garantía más que suficiente para retener la mano del legislador.

—

d) En cuanto al *common law*, derecho establecido por las costumbres, ó derecho no escrito, es de advertir que no debe tomarse á la letra esta expresión de *derecho no escrito*, pues, en realidad, los precedentes y los usos, estan consignados en un gran número de documentos, que son mencionados como establecidos y en vigor, pero que no están reunidos en un cuerpo de ley expresa, imperativa y de fechas ciertas, lo que hubieran constituido la primera fuente. En ausencia de un semejante texto, ellos son fundados únicamente sobre una práctica más ó ménos larga y sobre una tolerancia y aquiescencia más ó ménos antigua de poder y de opinión.

Esta parte del derecho constitucional inglés es notable no solo por el número, pero aún más, por la naturaleza de los objetos que regula. Estos objetos son tan variados y tan importantes que, el derecho cons-



titucional escrito, puede ser más bien considerado como un derecho de excepción, como una legislación complementaria, que como un derecho fundamental.

De suerte que, todas las cuestiones más importantes, el alma por decir así del derecho constitucional: la organización, las atribuciones, las relaciones recíprocas y el juego de los grandes poderes públicos (dignidad real, gabinete, Cámara alta, Cámara de los comunes), son regladas en Inglaterra por el simple uso. Las atribuciones del gabinete por ejemplo, no se hallan en ningún texto escrito; así mismo, nada hay en éstos sobre la convocación anual del parlamento, sobre la división del parlamento en dos Cámaras, sobre el derecho de prioridad de la Cámara de los comunes en materia de impuestos, sobre las múltiples atribuciones de la Cámara alta y de la Cámara baja, sobre la prerrogativa real en materia de organización militar. Todos estos asuntos tan trascendentales son del dominio del *Common law*. (1)

---

La *representación* data de épocas remotas. La historia de su desenvolvimiento atestigua que tuvo su cuna en la Inglaterra. Posteriormente, las naciones más adelantadas en ciencia política han copiado las reglas de la representación, amoldándolas á las circunstancias de cada pueblo y modificándolas de acuerdo con su idiosincracia especial.

---

1 Extracto de un estudio de E. Boutmy sobre el Derecho constitucional



El sistema representativo supone el sistema de la soberanía del pueblo; supone que el poder de gobernar reside en el pueblo, y que están excluidos en consecuencia, la potestad absoluta del monarca, el monopolio gubernamental de la aristocracia.

Pero, aún reconocido el principio de la soberanía popular, el sistema representativo se nos ofrece con ciertas modalidades especiales que es necesario conocer.

La representación es el tipo de los gobiernos libres; dentro de él cabe lo monarquía temperada y la república; para que exista, no es indispensable que el poder ejecutivo sea ejercido por un presidente de duración limitada, y cuyos poderes emanan de la elección. En Inglaterra existe el principio de la soberanía del pueblo; existe el sistema representativo y sin embargo, teóricamente, al ménos, el poder ejecutivo está ejercido, de acuerdo con la ley constitucional por la prerrogativa de la Corona.

Pero, si no es necesario que el Poder Ejecutivo sea monárquico ó hijo de la elección popular, es indispensable, para que la representación sea un hecho, que la ley fundamental del país que adopte ese régimen, señale la separación, correlación y armonía entre los diversos poderes del Estado. Si no se separan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por más que en un principio aparezca cierta sombra del derecho de representación, las instituciones tienen que decaer, y el mandatario que ejerce á la vez las facultades de dictar la ley, de aplicarla y de ejecutarla, llega á ab-



sorber todas las atribuciones que es dable concebir, y se entroniza el despotismo en el país; este resultado se obtendrá siempre que los poderes del Estado sean ejercidos por un solo hombre. Por eso decían Guizot y Alberdi y lo repetía el doctor del Valle, que una de las condiciones primordiales para que exista el sistema representativo es la separación y armonía de los poderes.

Si los poderes no hubieran estado divididos; si los Tudors en Inglaterra, no hubieran tenido el contrapeso y la valla que les imponía el Poder Legislativo, ejercido por el Parlamento, en sus manos férreas se habrían aglomerado todas las potestades de la Nación; sobre las ruinas del edificio de la soberanía feudal se habría levantado la soberanía absoluta del monarca, y la Gran Bretaña no sería considerada como tipo de democracia: la monarquía inglesa hubiera sido igual á todas las otras monarquías de que nos dan ejemplo los países del continente europeo.

No basta la división de los poderes para que el sistema representativo esté caracterizado; se requiere, además, que se permita ámpliamente al pueblo la libre elección de los mandatarios.

El sistema representativo no era completo en el país de su origen, en los tiempos aquellos en que la Corona otorgaba privilegios electorales á burgos irrisorios, en que existían tan solo dos ó tres habitantes. Old Sarum y demás burgos podridos, que recuerdan con vergüenza la historia institucional de Inglaterra, no eran ejemplo del sistema representativo de aquella



nación. No hay un verdadero sistema representativo allí donde la autoridad del Poder Ejecutivo se hace sentir con fuerza eficaz para dominar la conciencia popular é imponer, por medio del fraude, del dolo ó de malos manejos, la elección de candidatos determinados para ocupar una banca en el Congreso.

Otro de los caracteres del sistema representativo es, que los funcionarios que ejercen los diversos poderes del Estado sean responsables de sus actos. En el sistema representativo se toma como base la idea de que el gobernante que es un mandatario dependiente de la voluntad popular, no tiene en sus manos un poder absoluto, y debe á su mandante, cuenta y razón de sus acciones.

Si el funcionario público, después de haber ejercido las funciones á que ha sido llamado por el voto de sus conciudadanos, pudiera retirarse tranquilamente á su hogar, sin importarle cuales sean los efectos producidos por los actos realizados, seguiría las propias inspiraciones de su conciencia, y dejando de lado los intereses de la colectividad social á que pertenece, obedecería únicamente á las tendencias de su espíritu, trataría de acrecentar sus facultades propias, y se entronizaría en el país el despotismo, la tiranía, la arbitrariedad.

Finalmente, para que la responsabilidad de los funcionarios sea real, y éste es el último carácter que los autores señalan al sistema representativo, es indispensable la publicidad de sus actos. Si no hay publicidad, no hay responsabilidad; uno de estos caracteres se explica por el otro.



En la República Argentina, el sistema representativo data de la época de la independencia. No lo podemos buscar bajo el despotismo español. Cualquiera que sea la idea que nos formemos de la institución de los cabildos, no puede creerse ni pensarse, que ellos fueran la cuna del sistema representativo, en el sentido de que sus mandatarios hayan llenado las cuatro condiciones que acabamos de enumerar. En cuanto á la representación si bien ésta existía, no era la representación por elección: era una representación moral, por comunidad de intereses entre los capitulares y los miembros de la colectividad social. La publicidad de sus actos era una quimera: las resoluciones se tomaban á puerta cerrada. Por lo demás, sería aventurado buscar una separación decidida y armónica entre los diversos poderes del Estado.

Es por esto que decimos, que el sistema representativo data en nuestro país desde la época de la independencia;—en las actas capitulares de las sesiones de Mayo se encuentran ya los rastros iniciales del sistema representativo argentino, con todos sus caracteres distintivos. Cosa igual se halla en los subsiguientes ensayos constitucionales que han precedido á nuestra actual constitución. No era necesario, entonces, en 1853—dice el erudito profesor de nuestra Facultad, doctor Montes de Oca (M. A.), en sus lecciones de Derecho Constitucional—cuando se proyectaba la Constitución que nos rige y se discutía en la Convención de Santa Fé, fundar el sistema representativo, puesto que, con sus caracteres diferen-





ciales y típicos, estaba impuesto por nuestra tradición, por nuestra historia y por nuestros antecedentes institucionales. (1)

—

Es de advertir no obstante que el verdadero sistema democrático representativo, no es como se ha dicho al principio, de origen europeo; pues si bien la historia de su desenvolvimiento atestigua hasta cierto punto, que tuvo su cuna en Inglaterra, es en realidad en los Estados Unidos en donde se han acentuado más sus caracteres distintivos; y ésto á tal punto que bien puede considerarse á ellos como los verdaderos fundadores de la democracia representativa; pues, aún cuando los franceses pretenden atribuir esta gloria á los revolucionarios de 1789, ya en aquel año estaba constituida la unión americana consolidada en una República democrática representativa.

Por otra parte, para demostrar cómo los Estados Unidos fueron los verdaderos fundadores del sistema representativo, en el verdadero sentido de la palabra basta observar: que si bien la teoría política europea, admite la división del ejercicio del poder en varios departamentos, como la teoría americana, en cuanto á la responsabilidad, los europeos no la aceptan con relación al monarca, que propiamente no hace otro oficio que el de moderador de los demás que ejercen el poder, aunque todas las cosas se hagan en su nombre. Difiere también la política europea de la americana

---

1. MANUEL A. MONTES DE GUA.—Lecciones de Derecho Constitucional, Tomo I, p. 101 á 110.



en que, según ésta, los cuerpos deliberantes son todos compuestos de representantes del pueblo, y según aquella, hay uno de ellos que su elección no emana ni directa ni indirectamente del pueblo, como sucede con la Cámara de los Lores en Inglaterra.

—

El ejercicio de las funciones del poder en la Gran Bretaña hállase, como en la mayor parte de los Estados contemporáneos, dividido en tres departamentos: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero es de advertir que en cuanto al Poder Legislativo y al Ejecutivo, esta división propiamente no existe; y tan es así, que algunos comentadores de la constitución inglesa han llegado á decir que esa división *no existe en realidad*, por cuanto el Gabinete, que encarna el Poder Ejecutivo de la Gran Bretaña, es una simple comisión parlamentaria, que se mantiene mientras goza de las simpatías del parlamento, y que cae cuando la mayoría de éste le es adversa.

En cuanto al Poder Judicial y al Ejecutivo pasa algo semejante. No faltan comentadores que sostienen que la constitución inglesa no admite la división de las funciones del poder supremo en tres departamentos,—legislativo, ejecutivo y judicial—sinó únicamente en las dos primeras; considerando el otro como una mera emanación del segundo. De manera que si se uniformara el modo de pensar de los primeros con el de estos últimos, resultaría que en Inglaterra no existe más que un solo poder que sería á la vez poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

Por otra parte, estos últimos hasta cierto punto



tienen razón para ello, pues el juez Blackstone en uno de sus comentarios dice bien claramente: «entre nosotros, en Inglaterra, el poder supremo se ha dividido en dos ramas, á saber:—una legislativa que consiste del rey, los lores y los comunes; y otra ejecutiva que consiste del rey solamente»—Como se vé, no habla del poder judicial.

No obstante, esto no es exacto. En primer lugar y por lo que respecta al Poder Ejecutivo y al Legislativo, si bien su división no es tan absoluta como en Estados Unidos, esta división existe. Desde luego, la Corona conserva la facultad de designar todos los ministros que la han de asesorar en sus actos ejecutivos. Es cierto que su libertad no es completa; es cierto que debe hacer la elección dentro de los miembros de la mayoría de la cámara de los comunes; es cierto que esa misma mayoría impone decididamente su voluntad; pero, no lo es ménos que esta imposición no llega hasta vedar en absoluto esa libertad. Además debe advertirse que cuando la votación de los lores ó de los comunes es contraria á los actos del gobierno, no se produce *ipso facto* la dimisión ó el derrumbe ministerial. Debido á facultades que la Corona tiene en este caso, puede disolver el Parlamento, para indagar el estado de la opinión pública, que se manifiesta en los comicios.

En segundo lugar y por lo que respecta al Poder Judicial y al Ejecutivo, tampoco es exacto que la división no existe, pues el mismo Blackstone, en otra parte dice: «Otra capacidad en que se considera al rey



en los negocios domésticos, es, como *la fuente de la justicia* y el conservador general de la paz del reino. Por la fuente de la justicia la ley no quiere dar á entender *autor* ú *original*, sinó solamente *distribuidor*. La justicia no se deriva del rey como un don suyo; sinó que es el mayordomo del público para impartirla á quienes es debida. No es la fuente sinó el depósito de donde el derecho y la equidad son conducidos por mil canales á cada individuo. El poder judicial original, reside en el cuerpo entero de la sociedad, por los principios fundamentales de ella misma; pero como sería imposible que se le hiciese justicia á cada individuo por el pueblo en su capacidad colectiva, por ésto cada nación ha cometido ese poder á ciertos magistrados escogidos, que con más facilidad y expedición pueden oír y determinar las controversias».

Así pués, el mismo autor admite que, aunque la justicia se administra en nombre del rey, los que están encargados de esta función constituyen en la práctica un departamento distinto é independiente para el ejercicio del poder, y que la constitución inglesa ha establecido la división del poder en tres departamentos: legislativo, ejecutivo y judicial.

Pero, al más lijero exámen de la constitución británica, se percibe que estos tres departamentos no están en manera alguna totalmente separados, ni son distintos entre sí. El magistrado ejecutivo forma una parte integrante de la autoridad legislativa; sólo él tiene la prerogativa de hacer tratados con los sobe-



ranos extranjeros, que, una vez hechos, tienen con ciertas limitaciones la fuerza de actos legislativos. Todos los miembros del departamento judicial son nombrados por él; puede removerlos á petición de las dos Cámaras del Parlamento; y cuando le place consultarlos, forman uno de sus consejos constitucionales.

En Inglaterra, á medida que la constitución del parlamento ha ido mejorándose, facilitando con la reforma electoral una más genuina representación del pueblo—dice el Dr. Florentino Gonzalez,—y mayor influencia de éste en la administración de la cosa pública, el principio de la monarquía constitucional—*que el rey reina pero no gobierna*—vá siendo una verdad. El monarca vá llegando á ser ese poder real descrito por Benjamín Constante, que ni legisla, ni ejecuta, ni aplica las leyes, que son las operaciones del gobierno;—una rueda de lujo en el mecanismo gubernamental. (1)

Los poderes del departamento ejecutivo realmente son ejercidos por el primer ministro, que escoge sus cólegas de gabinete, y es virtualmente elegido por la Cámara de los Comunes aunque reciba su nombramiento del monarca y obre en nombre de él. Es de advertir que la práctica ha establecido en Inglaterra que el individuo que es la síntesis de la mayoría, sea el primer lord de la tesorería, ó primer ministro, lo que ha venido á ser un principio constitucional; así como el que sea él, quien escoge sus cólegas de gabinete.

---

(1) FLORENTINO GONZALEZ —Lecciones de Derecho Constitucional—



El, es quien resume en sí, los principios de la mayoría, y sobre él están fijas las miradas de todos singularizándolo, para hacerlo responsable de todas las medidas del gobierno. De lo que resulta que el primer ministro, ó mejor dicho todos los ministros, son el eje de la administración, los verdaderos depositarios de la autoridad ejecutiva. Ellos son los que preparan la ley, los que la hacen sancionar; y aún cuando todos los miembros de la Cámara de los Lores y de los Comunes tengan el derecho de iniciar proyectos, correrán riesgos, si no se cobijan bajo el ala protectora del gabinete. Este es el que inicia, en verdad, las medidas, dado que el Parlamento no se ocupa sinó de los asuntos que él le somete. Tiene además de su autoridad moral y de la experiencia en el manejo de la cosa pública, un medio seguro de obligar á la mayoría parlamentaria á pronunciarse en un sentido determinado: la amenaza de dimisión colectiva. El mismo partido opositor teme llegar á extremos en la discusión de las medidas; pues si á virtud de exageradas doctrinas derrumbaran un ministerio, ese mismo partido, más tarde en el poder, estará obligado á sancionar las medidas inconvenientes que le hubieran servido de bandera en su campaña. El gabinete se mantiene mientras conserva la voluntad parlamentaria. (1) Por otra parte, la facultad de la Corona de nombrar Lores complementa y vigoriza al gabinete.

---

(1) Sobre este tópico, puede verse más extensamente, en la obra del Dr. M. A. Montes de Oca:—*Decisiones de Derecho Constitucional*, tomo II, p. 368 á 379.



—En cuanto al Poder Legislativo, en Inglaterra rige el sistema bicamarista. Una cámara la componen los *lores* que representan á la nobleza y que ejercen el poder por derecho propio, y la otra los *comunes*, compuesta de representantes elegidos por el pueblo y que representan en la monarquía el principio democrático.

Por lo que respecta á las atribuciones del Parlamento inglés, éstas son amplísimas, tanto constitucionales<sup>s</sup> como legislativas. El, cambió la religión del Estado, bajo Enrique VIII, María é Isabel; él, cambió el orden de sucesión al trono, bajo Guillermo III; él, reglamenta los derechos electorales; él, es la fuente del Poder Ejecutivo, por su acción sobre el gabinete; él, ejerce facultades judiciales vastas y variadas. Se explican, entónces, á pesar de su exageración incontrovertible, las repetidas palabras de De Lolme: «es un principio fundamental entre jurisconsultos ingleses que el parlamento puede hacerlo todo, salvo un hombre de una mujer y una mujer de un hombre.»

La idea de la omnipotencia del Parlamento, escribe el Dr. Montes de Oca, (lecs. cit.)—data de algunos siglos atrás. En 1258 el *Mad Parliament* (Parlamento de los locos) declaró: «su poder es supremo; su autoridad es siempre igual y siempre absoluta. No reconoce nada sobre él en la tierra. Ningún parlamento puede atar las manos á un parlamento futuro.»

En la época moderna, Blackstone escribe: «Su autoridad soberana y sin control puede hacer confirmar, extender, restringir, abrogar, revocar, renovar é inter-



pretar las leyes, sobre materias de toda denominación, eclesiásticas ó temporales, civiles, militares, marítimas ó criminales. Es al Parlamento que la Constitución de estos reinos ha confiado este poder despótico y absoluto que, en todo gobierno, debe residir en alguna parte. Todos los males, las quejas, los remedios, las determinaciones, fuera del curso ordinario de las leyes, todo es de competencia de este Tribunal extraordinario.» (1).

Para desembarazar de dificultades á un Parlamento tan omnímodo, fuerza es concederle privilegios enormes, que las mismas Cámaras decretan, aprecian y aplican. Cada una de ellas disfruta de sus privilegios con total independencia de la otra. La acción de ambas es idéntica y deciden, en los casos particulares, si existen los privilegios y si han sido heridos. Pueden, por sí solas, infligir á los culpables el condigno castigo; poder discrecional que ejercita no solo la Cámara de los Lores, que tiene las atribuciones y competencia de una Corte de Apelación, si que también la Cámara de los Comunes, cuyas actas dan fé de un sinúmero de órdenes de prisión y de arrestos.

Es verdad que, por resolución tomada en 1704 las Cámaras se inhibieron de crear nuevos privilegios; pero como basta una simple votación para decidir, en las dos Asambleas, si se han violado sus privilegios, la resolución es de mero aparato. Sin embargo, de acuerdo con ella, la tendencia moderna es, quizás, de disminuir la extensión de las facultades parlamentarias.

---

(1) BLACKSTONE.—Commentaires. (Trad. de Chompré) Tom. I, pág. 278.





La opinión pública miraba con un favor creciente la reivindicación de inmunidades que las Cámaras gestionaban durante la larga lucha sostenida con la Corona. El pueblo, amedrantado con la omnipotencia monárquica, se halagaba con los triunfos parlamentarios; pero hoy la población británica conoce la profundidad sugestiva que encierran las palabras de Lord Burleingh: «la Inglaterra no podría ser arruinada, sino por un parlamento;» y busca la ponderación y equilibrio que conducen á la restricción de los privilegios, hasta proporcionarlos á las exigencias que los motivan. (Montes de Oca.—lecs. cit.)

—

II. — Casi todos los historiadores están de acuerdo en que, cuando los Estados Unidos declararon su independencia, dice el Dr. Del Valle, los gobiernos que existían en las trece colonias, podían dividirse y agruparse en tres categorías que se han llamado: gobiernos provinciales, gobiernos de las cartas y gobiernos de los propietarios. Formaban el primer grupo las colonias de New-York, New-Hampshire, New-Jersey, Virginia, North Carolina, South Carolina y Georgia. Se encontraban en el segundo las colonias de Connecticut, Rhode Island y Massachussetts; y tenían gobierno de propietarios, las de Pensilvania, Delaware y Maryland.

a) Los gobiernos provinciales reposaban sobre la teoría general de que las colonias estaban bajo la completa dependencia de la Corona y sujetas á la voluntad real. Esto en teoría, pero en cuanto á la

práctica, todas ellas tenían este rasgo genérico: aseguraban la libertad civil y política de los colonos en la misma medida que esa libertad estaba asegurada para los ingleses en la madre patria; de tal modo, que no se establecía regla de gobierno para la colonia, que no hubiera sido aceptada por el pueblo inglés. La Corona nombraba el gobernador y lo removía á voluntad. El gobernador pués, era la entidad ejecutiva de la colonia; su campo de acción estaba limitado por las instrucciones reales y por el consejo provincial que también era nombrado por la Corona y que unas veces funcionaba como consejo de gobierno, y otras como cuerpo colegislador. Frente al gobernador y al consejo provincial, estaba la asamblea de representantes, elegidos en comicio público por los terratenientes y pobladores de la colonia. Esta era la rama popular del gobierno y en ella residía el poder legislativo colonial, de que participaba el consejo provincial como cámara alta, y el gobernador, con el derecho de veto y de disolución. Estos tres poderes, legislaban sobre todo asunto de interés local; establecían impuestos, reglamentaban el comercio, etc.; pero subordinando todo, al principio de que sus ordenanzas, reglamentos ó leyes, no debían ser repugnantes á las leyes y estatutos de Inglaterra, sinó por el contrario, ajustarse á ellas en cuanto fuera posible.

b) Al lado de los gobiernos provinciales existían los gobiernos de las cartas. Dice Story y con él el Dr. Del Valle, que las cartas eran verdaderas constituciones, en virtud de las cuales cada colonia era





un gran cuerpo político, con los poderes generales de gobierno en su propio territorio, aunque dependiente del reino de Inglaterra. Además, estos instrumentos, tenían el carácter de compromiso solemne y estaban revestidos con las formalidades de las leyes supremas, por escrito y bajo el sello real; de tal modo que siempre se entendió que el gobierno inglés no tenía el derecho de modificar las franquicias ó privilegios consignados en ella y cuando en los albores ya de la revolución (1774) el parlamento reformó la carta de Massachussets, todas las colonias se sintieron amenazadas, y Curtis dice que fué ésta una de las causas que precipitaron la revolución.

Estas cartas, no eran idénticas para todas las colonias. La de Massachussets, por ejemplo, otorgada en 1691 bajo el reinado de Guillermo y de Maria, establecía, el derecho real de nombrar el gobernador, teniente gobernador y secretario provinciales; acordándole al gobernador la facultad de vetar las leyes que sancionara la legistura local, y la prerogativa de disolución. Establecía también un consejo compuesto de veinte miembros, nombrados por la asamblea ó cámara de diputados, (1) y este consejo formaba la verdadera cámara alta de la colonia.

Rhode Island y Connecticut poseían cartas más adelantadas que Massachussets. En estas dos colonias el gobernador, la cámara alta y la cámara baja eran

---

(1) Atribucion ésta, de que fué despojada por la reforma de 1774, y que pasó á ser de la corona.

elegidos directamente por el pueblo, es decir por los terratenientes y pobladores de la colonia.

c) Los gobiernos de propietarios eran gobiernos *sui generis*, constituidos en virtud de concesiones reales hechas á una ó más personas que se llamaban propietarios y á los que se les entregaba no sólo el territorio para que lo poblasen y cultivasen, sinó también, todos ó la mayor parte de los poderes del gobierno local; á condición de reconocer su vasallaje á la soberanía de la corona inglesa.

Tomando por ejemplo la concesión de Pennsilvania otorgada por Carlos II en 1681, á Guillermo Penn, en ella se establecía además del principio ya indicado,—de que el propietario tendría el derecho de administración y de gobierno sobre las tierras concedidas,—que el propietario estaba obligado á pagar al rey de Inglaterra, dos tributos, uno que consistía en dos cueros de castor que debían ser entregados en el castillo de Windsor el primero de Enero de cada año—tributo simbólico del reconocimiento pleno de la soberanía suprema que residía en el rey y de la fidelidad y lealtad del vasallo,—y otro que consistía en darle la quinta parte del oro y de la plata que encontrara.

El propietario, con el derecho de administrar la colonia, tenía el de designar la persona que había de gobernarla; dictar leyes y fijar impuestos para atender los gastos públicos, *con el consejo y la aprobación de los hombres libres de la colonia ó de sus diputados*; designar los magistrados; usar del derecho





de gracia, excepto en los casos de homicidio alevoso ó de traición; dictar ordenanzas «que no restringieran, recargaran ó destruyeran el derecho ó intereses de una persona en relación á su vida, miembros, tenencia de la tierra, bienes ó efectos», esto en el caso urgente y en que no hubiera tiempo de convocar á los hombres libres de la colonia para el ejercicio de las facultades legislativas.

Además, la concesión consagraba el derecho de comerciar libremente con las otras colonias y la madre patria, de tal manera que, sin conexiones políticas entre sí, todas las colonias estaban vinculadas por el comercio. El propietario, vasallo de la Corona inglesa, no podía mantener relaciones de ningún género con los gobiernos extranjeros.

Es notable la constitución dada para Pennsylvania por su propietario Guillermo Penn en 1682 y que se puede ver in extracto en las ya citadas conferencias del Dr. Del Valle, p. 81, cap. II, (segunda edición).

—Estas colonias entre sí, y las tres clases de gobiernos que hemos estudiado, tenían muchos rasgos comunes, que en momentos y circunstancias dadas debían ayudar á la obra de la organización nacional. Desde luego, sus pobladores habían sidò en su origen, casi todos ingleses; hablaban todos el mismo idioma; tenían los mismos hábitos políticos y sociales, la misma religión y eran regidas por las mismas leyes. Por otra parte, el gobierno de todas las colonias, en el momento de su independencia, (1776), era, sinò idéntico, muy semejante. Todas habían dividido



el gobierno en tres departamentos: ejecutivo, legislativo y judicial, y en todas intervenía el pueblo para la discusión y sanción de las leyes, concurriendo á la elección de las dos cámaras y en algunos, aún del gobernador;—de ahí que, cuando desapareció la autoridad de la corona inglesa, el gobierno quedó de hecho constituido íntegramente con su asiento en el pueblo, con su organización propia y adecuada para todas las funciones que le están atribuidas. (Del Valle, confs. cits.)

—

III.—Rotas las relaciones entre Inglaterra y sus colonias de América, éstas empezaron á comprender, que una unión más estrecha se hacía necesaria para reivindicar más eficazmente sus derechos y proteger su libertad. Para ello, en 1774 Massachussets pidió que se formara un Congreso continental para deliberar sobre tan importante asunto. En consecuencia se nombraron delegados por las colonias, para componer el Congreso que debía reunirse en Filadelfia.

Los delegados del Congreso se reunieron el 4 de Setiembre de 1774, y después de haber nombrado sus funcionarios, convinieron en las reglas fundamentales de sus operaciones.

Tal fué la organización del primer Gobierno general y nacional, fundado bajo los auspicios y con el consentimiento del pueblo, obrando éste directamente como soberano, y sin la intervención de los agentes á quienes la administración de las Colonias estaba antes confiada.



El Congreso así formado ejerció *de hecho y de derecho* la autoridad soberana, no como agente delegado por los gobiernos de hecho de las colonias, sino en virtud de los poderes primitivos delegados del pueblo. Esta forma de gobierno subsistió hasta el establecimiento del Gobierno federativo en 1781. El primer acto de los delegados y el más importante, fué una resolución declarando que cada Colonia ó Provincia tendría derecho, de votar sobre las cuestiones sometidas al Congreso. Hicieron también una declaración de derecho en la que se establecía que, las Colonias debían gozar de los derechos comunes de la Inglaterra y participar de los beneficios de los estatutos ó reglamentos de la madre patria, vigentes en tiempo de la colonización, y que la experiencia había mostrado aplicables en las circunstancias de tiempo y de lugar; publicaron enseguida un manifiesto al pueblo inglés, á las colonias inglesas vecinas y al Rey, explicando todas sus quejas y pidiendo socorro y justicia.

En Mayo de 1775, hubo un segundo Congreso cuyos delegados autorizaron un reclutamiento de tropas, confiando su comando en jefe al General Washington; autorizaron también la emisión de dos millones de dollars en papel moneda, cuyo rescate era garantido por las colonias; hicieron reglamentos para la administración del ejército, y publicaron un manifiesto solemne de las causas de su toma de armas, una súplica al Rey pidiéndole modificase el sistema de gobierno, y un manifiesto al pueblo de la Gran



Bretaña solicitando su auxilio, y advirtiéndolo los peligros de una separación que parecía inminente.

Después de un sinnúmero de medidas tomadas por este mismo Congreso que condujeron progresivamente á la separación absoluta de la madre patria y á la resolución de mantener las libertades de las colonias, contra todos los azares de la guerra, no tardaron en venir actos más decisivos.

El 7 de Junio de 1776 se hicieron proposiciones concernientes á la independencia de las colonias, y se trajeron á discusión en Asamblea General. El 10 del mismo mes se decidió nombrar una comisión para preparar la declaración de que «las colonias unidas debían ser de derecho consideradas como estados libres é independientes; que estaban ya libertadas de la soberanía de la Inglaterra y que todo vínculo entre ellas y la Gran Bretaña, estaba y de derecho debía estar roto».

El 11 de Junio otra comisión fué nombrada para proyectar y fijar el plan de una Confederación entre las colonias.

Con respecto á la primera comisión formada para la redacción de la declaración de la independencia, el 28 de Junio se oyó su informe, y el 2 de Julio el Congreso lo adoptó y declaró de una manera pública y solemne: «que las Colonias estaban y debían estar de derecho, absueltas de toda fidelidad hácia la Corona; que el vínculo político que las unía á la Gran Bretaña, estaba roto completamente; que tenían pleno y entero derecho para declarar la guerra,





hacer la paz, contraer alianzas, comerciar y en general hacer todos los actos y todas las cosas de la misma manera que hacerlo pueden los estados independientes; siendo el acta definitivamente firmada por todos los representantes de los Estados el 4 de Julio.

A partir de la época de la declaración de la Independencia, se deben considerar las Colonias como formando una Nación, á lo ménos de hecho sometida á un Gobierno Central, y procediendo por el consentimiento general de la población de las Colonias. Verdad es que, los poderes de ese Gobierno no estaban ni podían estar todavía bien definidos, pero no obstante, ejerció en muchos casos una soberanía exclusiva, y su poder de revisión sobre los Estados, fué universalmente adoptado, en la mayor parte de las medidas á tomar, sinó lo fué en todas.

Durante el tiempo transcurrido desde la discusión de los artículos de la Confederación, hasta que ésta se hizo obligatoria para todos los Estados, es decir, desde Noviembre de 1777, hasta Marzo de 1781, el Congreso continuó ejerciendo los poderes del Gobierno General cuyos actos obligaban á todas las Colonias aún cuando se reconociera «que los Estados eran asociaciones soberanas é independientes». Es sin embargo evidente que estas expresiones debían entenderse en un sentido restringido y limitado, pues que la mayoría de los Estados podía, por sus medidas adoptadas en el Congreso, revisar y obligar á la minoría.

En el número de los poderes exclusivos del Congreso, estaban los de hacer la guerra, la paz, autorizar



las capturas, instituir tribunales de apelación para las presas, dirigir y vigilar las operaciones nacionales, militares y navales, contraer alianzas, hacer tratados y empréstitos, y emitir billetes de crédito en nombre de la Nación. Con respecto á los Gobiernos extranjeros, las Colonias estaban consideradas solamente como Estados Unidos, y es en esta calidad que tomaban el derecho de enviar y de recibir embajadores, de ser comprendidos en los tratados y en las alianzas, de ser admitidos en la comunidad de las naciones, de poder ejercer los derechos de la guerra y de reclamar la igualdad de la soberanía y de sus prerogativas.

En cuanto á la autoridad ejercida por el Congreso, antes de la adopción de la Confederación, pocas discusiones se levantaron sobre su legalidad durante la guerra de la revolución, porque el ardor con que se hacía, dejó poco tiempo para pesar y analizar semejantes cuestiones: *inter arma silent leges*. El pueblo, confiando en la prudencia y en el patriotismo del Congreso, le acordaba tácitamente la autoridad que él se arrogaba. Pero desde que estuvo organizado el Gobierno, la cuestión fué largamente discutida ante el tribunal supremo de los Estados Unidos; se presentó con motivo de un negocio, en el cual se pedía que el Congreso, decidiera como tribunal supremo, sobre un caso de captura, hecha antes de la ratificación de la Confederación. Se acabó por decidir que el Congreso antes de la Confederación, poseía por el consentimiento del pueblo de los Estados Unidos



la autoridad suprema y soberana para todos los actos nacionales, especialmente el poder de hacer la paz ó la guerra, é incidentalmente el derecho de juzgar en último resorte las apelaciones en los litigios sobre las presas, aún en oposición con la Legislación particular de su Estado; y que la autoridad actual ejercida por el Congreso, en lo que concernía á los asuntos de la nacionalidad, ofrecía la más fuerte prueba de su legitimidad, pues que emanaba de los representantes del pueblo y había sido ratificada por el pueblo mismo.

La Unión así formada, era el resultado de las exigencias de los tiempos. Por su naturaleza y por su objeto, se podía considerar como temporaria, existiendo solamente para mantener las libertades comunes, y la independencia de los Estados, y debiendo disolverse por la celebración de la paz con la Gran Bretaña, y por la realización misma de los proyectos de la revolución. Pero era evidente para todos los espíritus reflexivos, que, la separación de los Estados en comunidades soberanas é independientes, sin la fiscalización de un gobierno central, comprometería la paz y la seguridad común; era evidente que, aquella separación expondría á los Estados no solamente á ser conquistados de nuevo por la Inglaterra, en guerras separadas, sinó que, los dejaría sin fuerzas contra las disenciones civiles y las guerras interiores, de modo que, después de haberse reunido en su interés contra la Inglaterra, se convertirían por las intrigas de sus enemigos ó los celos tan fre-



cuentas entre vecinos, en instrumentos, que manos ambiciosas del exterior ó corrompidas del interior, pondrían en acción para destruir los unos por otros, y así caerían sucesivamente víctimas de la tiranía extranjera ó doméstica. Tales consideraciones debían ser necesariamente de gran peso para los ciudadanos honrados, amantes de su patria, independientemente de los beneficios que una unión permanente no podía dejar de producir en todos los Estados.

La comisión que según hemos dicho ya, fué nombrada el 11 de Junio de 1776 para proyectar y fijar el plan de una Confederación entre las Colonias, presentó su proyecto el 12 de Julio del mismo año, siendo éste, obra de M. Dickinson uno de sus miembros y diputado por Pennsylvania. Después de presentado el informe, se abrió la discusión y duró del 22 al 31 de Julio, y del 5 al 20 de Agosto siguiente. Este último día, el Congreso reunido en Asamblea General, pidió que se hiciera é imprimiera un nuevo informe para distribuirlo á todos los miembros.

Parece que no se ocuparon más de este asunto hasta el 8 de Abril de 1777. Desde aquella época hasta el 15 de Noviembre del mismo año no se volvió á tomar la discusión de los artículos; el 15 de Noviembre los artículos fueron leídos de nuevo y con varias enmiendas, y al fin adoptados por el Congreso. Se nombró entónces un comité para redactar una carta circular á los Estados, pidiéndoles autorizasen á sus representantes en el Congreso para firmar el acto en su nombre.



Apesar del enérgico y el reciente llamamiento hecho al patriotismo de los Estados por la carta circular, la convicción no penetró sinó lentamente en el espíritu de las legislaturas locales; se hicieron varias objeciones y se propusieron varias enmiendas que el Congreso las rechazó todas; no porque las juzgase todas inoportunas é impracticables, sinó á causa del peligro de devolver el proyecto así enmendado para ser revisado de nuevo por los Estados. En consecuencia el 26 de Junio de 1778, se prepararon copias para recibir las ratificaciones; estas comenzaron el 9 de Julio siguiente, y en el año 1778, todos los Estados habían ratificado con excepción del Delaware y del Maryland; se obtuvo por fin la ratificación del Delaware en 1779, y la del Maryland el 1° de Marzo de 1781. La Confederación se hizo entónces obligatoria para todos desde esta última fecha, y fué publicada con júbilo por el Congreso. (1)

IV.—La Constitución de los Estados Unidos es quizás de las fuentes constitucionales, la que más ha influido en el espíritu y en el carácter de nuestra actual Constitución Nacional. Tan es así, que los convencionales del 53 y los reformadores del 60, manifestaron claramente y sin ambages, que tomaban como pauta al dictar la ley fundamental de la Nación, la constitución de los Estados Unidos, sancionada en 1787 por el Congreso de Filadelfia, des-

---

(1).—Del Comentario abreviado de J. Story sobre la Constitución de los Estados Unidos, traducido por Nicolás Antonio Calvo.



pués de múltiples discusiones habidas en su seno y de cada una de las convenciones locales de los Estados. El mismo señor Sarmiento entrando al examen del preámbulo de la constitución del 53, y estableciendo la analogía que existe entre él y el de constitución de los Estados Unidos, concluía que, habiéndose propuesto ambos países, al dictar sus constituciones, iguales objetivos, era lógico—en caso de duda sobre la interpretación de un artículo de la constitución argentina—recurrir á los comentarios y á la jurisprudencia sentada por la Constitución Norteamericana. Y en ésto, hasta cierto punto, estaba en la verdad, pués, no sólo nuestra constitución se propone idénticos objetivos á los de la constitución de aquel país, sinó, que su contacto es tal, que muchas de sus cláusulas han sido copiadas de esta última, cayéndose en el error de no tener en cuenta los antecedentes nacionales. He aquí porqué algunas de ellas, á pesar de no pocos esfuerzos hechos por algunos de nuestros estadistas, no han podido recibir su aplicación, como ha sucedido con la institución del juicio por jurados; incorporada en la constitución federal del 53 y dejada en ella, á pesar de las tres ó cuatro reformas que ha sufrido por las convenciones subsiguientes.

Esta analogía de nuestra constitución con la de los Estados Unidos podrá verse más palmariamente, cotejando ambas leyes fundamentales. Para el efecto, en el apéndice incertamos esta última constitución, coi. lo que nos evitamos entrar en el análisis deta-



llado de ella, no sólo porque ésto daría lugar á que se extendieran estos apuntes más allá de los límites que nos hemos trazado, sinó porque su simple lectura, creemos, basta para darse una idea del espíritu y de la economía general de dicha constitución. Por otra parte, en el estudio de nuestra constitución que hace el catedrático de la materia doctor M. A. Montes de Oca, en sus *Lecciones sobre Derecho Constitucional*, se hallan no pocas anotaciones al respecto, y que reunidas constituyen por si solas un verdadero estudio de la constitución norte-americana.

—

A raíz de la declaración de la independencia de 1776, diversos Estados dictaron sus propias constituciones. Muchas de ellas estaban precedidas de un *bill* de declaraciones de derechos individuales. Algunos Estados, como el de Virginia, después de sancionada la constitución, pero en el mismo año de 1776, dictaron un *bill* especial que contenía los derechos y garantías individuales.—Pero no sucedía así con la constitución general á la cual debían sujetarse todos los Estados confederados.

En la constitución federal de los Estados Unidos tal como la sancionó la convención de 1787 y fué ratificada por los diversos Estados de la Unión, no existía este *bill* y fué ésta precisamente, según nos dice Ficknor Curtis, en su historia de la constitución de los Estados Unidos, la causa de las grandes dificultades con que se tropezó para obtener la ratificación del pueblo de los Estados Unidos. Muchos de



ellos la aceptaron con expresa declaración de que esperaban que se enmendaría esta omisión porque consideraban que una Constitución que no asegurase al individuo ciertas libertades y derechos, dejaba el campo abierto para que el gobierno se convirtiese en opresor, privando á los ciudadanos del uso libre de sus facultades individuales que sólo pueden ser ejercidas mejor según sus arbitrios, que bajos la dirección de los encargados del poder público.

De esto derivóse que, no bien sancionada la constitución, el Congreso se preocupó de la necesidad de declarar los derechos individuales, conviniéndose para ello que dicha omisión sería enmendada por el primer Congreso constituyente de la Unión que se reuniese.

Y así sucedió: decretado por el Congreso y ratificados por los Estados, quedó de hecho incorporado á la ley fundamental un *bill* más ó ménos completo de declaraciones, derechos y garantías, contenido en doce enmiendas, y con lo que quedó salvado uno de los vicios más serios y más graves que los opositores al régimen que se creaba, hicieron notar en la obra de la convención de 1787.

—

V.—Todas las constituciones dadas en Sud América durante la guerra de la Independencia, escribe el doctor Alberdi, (op. cit.) fueron expresión completa de la necesidad dominante de ese tiempo. Esa necesidad consistía en acabar con el poder político que la Europa había ejercido en este continente, empezando por la conquista y siguiendo por el coloniage; y co-





mo medio de garantir su completa extinción, se iba hasta arrebatarle cualquier clase de ascendiente en estos países. La independencia y la libertad exterior eran los vitales intereses que preocupaban á los legisladores de ese tiempo. Tenían razón; comprendían su época y sabían servirla.

Se hacía consistir y se definía todo el mal de América en su dependencia de un gobierno conquistador perteneciente á la Europa; se miraba por consiguiente todo el remedio del mal en el alejamiento del influjo de la Europa. Mientras combatíamos contra España disputándole palmo á palmo nuestro suelo americano, y contra el ejemplo monárquico de la Europa, disputándole la soberanía democrática de este continente, nuestros legisladores no veían nada más arriba de la necesidad de proclamar y asegurar nuestra independencia, y de sustituir los principios de igualdad y libertad como base del gobierno interior, en lugar del sistema monárquico que había regido antes en América y subsistía todavía en Europa.—La Europa nos era antipática por su dominación y por su monarquismo.

En ese período, en que la democracia y la independencia eran todo el propósito constitucional, la riqueza, el progreso material, el comercio, la población, la industria, en fin todos los intereses económicos, eran cosas accesorias, beneficios secundarios, intereses de segundo orden, mal conocidos y mal estudiados, y peor atendidos por supuesto. No dejaban de figurar escritos en nuestras constituciones, pero



sólo era en clase de pormenores y detalles destinados á hermosear el conjunto (1).

Contribuía á colocarnos en ese camino, el ejemplo de las dos grandes revoluciones que servían de modelo á la nuestra: la revolución de los Estados Unidos contra Inglaterra y más aún la Revolución Francesa de 1789.

En efecto, al poco tiempo de producido el levantamiento de la independencia en Norte-América, estalló en el continente europeo el profundo sacudimiento que trajo consigo la Revolución Francesa. Los espíritus reformadores en Francia pensaban que la causa principal del movimiento era el desconocimiento de las prerogativas individuales. La lucha por los derechos particulares del hombre se hizo sentir en todas las manifestaciones que precedieron á la revolución y que fueron coetáneos con ella, en los libros de los filósofos, en la prensa diaria, en la discusión de la Asamblea Constituyente. La necesidad de proclamar y reconocer los derechos del hombre era imperiosa. La toma de la Bastilla la preparó en el terreno de los hechos y la sanción legal se produjo enfáticamente por la Asamblea, el 26 de Agosto de 1789,

Cierto es que carecieron de brillo y de elocuencia las discusiones que se produjeron en ese momento; cierto es que, si se lee la crónica de la sesiones, se advierte que todos los juristas y legistas incipientes hicieron torneo de dicción, discutiendo puerilmente

---

(1) Dr. JUAN BAPTISTA ALBERDI.—Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, Cap. II.



el significado de palabras más ó ménos importantes empleadas en los artículos de la declaración colocada más tarde como proemio de la constitución de 1791; (Montes de Oca, op. cit.); pero no es ménos cierto que el espíritu y las doctrinas dominantes en Francia en aquella época, fueron consideradas como el *palladium* de las libertades, no sólo en aquel país y en algunos europeos, sinó hasta en las apartadas regiones de la América.

El ejemplo dado por la Revolución Francesa no podía ménos de ser seguido por los nuevos pueblos americanos que acababan de entrar en el concierto de los pueblos libres; —de ahí que bien puede decirse que, acabada con la revolución la acción de la Europa española en el continente americano, tomó su lugar la acción de la Europa francesa.

La influencia de la revolución del 89 y de las ideas de la época en la proclamación de los derechos del hombre, se hizo sentir en América desde los albores de su independencia.—Los anales argentinos aseveran la preferencia acordada á la ideas de la Francia Revolucionaria durante los primeros años de vida independiente.—Ellas no sólo coadyuvaron al emancipamiento americano con la propaganda y el ejemplo, sinó que, se infiltraron en la legislación de la época de tal modo, que en gran número de ensayos de constituciones y estatutos que sirvieron de fuente á nuestra actual constitución, copian casi á la letra preceptos constitucionales de la Francia revolucionaria. Véase un ejemplo:—El estatuto de 1815, inspirado en las ideas de



la Revolución Francesa y en la Constitución de 22 de Agosto de 1795, consigna que «todo hombre, en el Estado, debe sobrellevar *gustoso* cuantos sacrificios demande la patria, en sus necesidades y peligros, sin que se exceptúe el de la vida, sinó para el extranjero. (Cap. 6° Art. 3°).» Esta cláusula, mezcla de jacobinismo y de ingenuidad, que consagra un precepto incontrovertible con frases propias de un curso de moral política, fué copiado á la letra por el Reglamento de 1817.

Un segundo ejemplo:—En el mismo estatuto de 5 de Mayo de 1815 se destina el capítulo primero á tratar de los «Derechos que competen á todos los habitantes del Estado»; se definen en él, los derechos á la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. Observa el doctor del Valle, y con razón, que en esta parte el Estatuto de 1815 está inspirado en la Constitución francesa de 22 de Agosto de 1795, hasta en sus mismas ingenuidades. Hay una cláusula, inserta en el artículo 5° del capítulo 6°, que trata de los «Deberes de todo hombre en el Estado, y en que se dice que uno de ellos es el de merecer el grato y honroso título de hombre de bien, siendo buen padre de familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo.» Igual cosa dice el Reglamento de 1817 que copió á la letra las disposiciones del Estatuto de 1815, tanto en lo que se refiere á la declaración de derechos y garantías, como respecto de las declaraciones de los deberes de todo hombre en sociedad. Cosas semejantes se ocupan de establecer la Constitución de 1819 y la de 1826.



Un tercer ejemplo:—La Revolución Francesa consideró la división de los poderes como artículo de fe política, sancionando, en una de sus más memorables decisiones, esta cláusula: «Toda sociedad en que no esté asegurada la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes carece de constitución.» (Declaración de los derechos del hombre—art. 16).

Entre nosotros, los hombres que encabezaron el movimiento emancipador, imbuídos en las teorías de la Francia revolucionaria, acataron el principio, aún con todas sus exageraciones, y lo consignaron en las leyes orgánicas del país. Limadas sus asperezas, corregido en su absolutismo, lo promulga la constitución que nos rige.

El doctor Alberdi hace notar que el ejemplo de la Revolución Francesa nos comunicaba no sólo sus grandes principios, sinó hasta su nulidad reconocida en materia económica.

Sabido es que la revolución francesa que sirvió á todas las libertades, desconoció y persiguió la libertad de comercio. La Convención hizo de las aduanas un arma de guerra, dirigida especialmente contra la Inglaterra; esterilizando de ese modo la excelente medida de la supresión de las aduanas provinciales, decretada por la Asamblea Nacional. Napoleón acabó de echar la Francia en esa vía por el bloqueo continental, que se convirtió en base del régimen industrial y comercial de la Francia y de la Europa durante la vida del Imperio. Por resultado de ese sis-



tema, la industria europea se acostumbró á vivir de protección, de tarifas y prohibiciones.

De ahí porqué, y como lo hemos dicho ya, en ese período, en que la democracia y la independencia eran todo el propósito constitucional; la riqueza, el progreso material, el comercio, la población, la industria, en fin todos los intereses económicos, eran cosas accesorias, beneficios secundarios, intereses de segundo orden, mal conocidos, mal estudiados y peor entendidos; y que si bien figuraban en nuestras constituciones, lo era sólo en clase de pormenores y detalles destinados á hermosear el conjunto.

Era exactamente lo mismo, el fiel reflejo de lo que pasaba por entónces en Francia:—la gloria militar era el objeto supremo de ambición; el comercio, el bienestar material se presentaban como bienes destituidos de brillo; la pobreza y sobriedad de los republicanos de Esparta eran realzadas como virtudes dignas de imitación, y el lujo era considerado como el escollo de la moral y de la libertades públicas.

He ahí someramente demostrado, la influencia de las ideas francesas en el régimen constitucional argentino, tan importante como antecedente extranjero, para el estudio de las fuentes patrias que han precedido á la formación de nuestra vigente constitución.



# APÉNDICE







# APENDICE



## a).—LA PALABRA DIVINA

Uno de los textos más curiosos invocado por los teólogos, pertenece al profeta Isaías, que vivió 700 años antes de Jesucristo, y profetizó la venida del Mesías y la predicación de la palabra de Dios. El versículo de Isaías, citado por Solórzano, es el siguiente: «Palomas con tan arrebatado vuelo como cuando van á sus palomares. Los ya salvados arrojarán las saetas de su predicación á Italia, á Grecia y á las islas más apartadas y le traerán en retorno su oro y plata juntamente con ellos.»

Cualquiera creería que el texto daba lugar á la interpretación de los teólogos en la segunda parte, cuando habla de «las islas más apartadas y del *oro* y *plata* que traerán en retorno los ya salvados.»

No era ahí, sin embargo, donde los teólogos apoyaban el derecho de España al dominio de las tierras americanas; pues comprendían, sin duda, que esa parte del texto podía ser invocada, tanto por la corona de Castilla como por las de otras naciones descubridoras.



Se fundaban en la primera parte que habla de las «palomas, con tan arrebatado vuelo como cuando van á sus palomares,» sosteniendo que el profeta había vislumbrado la conquista y conversión de una raza por una de esas palomas, por cuenta del rey de España. Esa paloma era Colón, que en apresurado vuelo había venido en busca de la tierra Americana; pues Colón, en latín *Columbus*, significa paloma. Así interpretaba y comentaba el texto, Bozio, que es citado con respeto por Solórzano. (Del Valle. cons. cis.)

b.—REAL CÉDULA DE 10 DE MAYO DE 1680

La Real Cédula dada en Madrid á 10 de Mayo de 1680 que acordó fuerza legal á la *Recopilación de leyes de los reinos de las Indias*, con cuyo nombre es conocida, pone de manifiesto el fin que con ella se buscaba, en términos que excusa todo comentario. Son los siguientes, en su parte sustancial: «Desde el descubrimiento de nuestras Indias Occidentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano, siendo el primero y más principal cuidado de los señores Reyes nuestros gloriosos primogenitores, dar leyes con que aquellos reinos sean gobernados en paz y en justicia, se han despachado muchas Cédulas, Cartas, Provisiones, Ordenanzas, Instrucciones, Autos de Gobierno y otros despachos que por la dilatación y distancia de unas provincias á otras no han llegado á noticia de nuestros vasallos, con que se puede haber ocasionado grande perjuicio al buen gobierno y derecho de las par-



tes interesadas. Y Nos deseando ocurrir á estos inconvenientes y considerando que las materias son tan diversas, y los casos tantos y tan árdúos, y que todo lo proveído y acordado por Nos, es justo que llegue á noticia de todos para que universalmente sepan las leyes con que son gobernados, y deben guardar en materias de gobierno, justicia, guerra, hacienda y las demás, y las penas en que incurren los transgresores... Visto y consultado con Nos, gobernando el Consejo el Príncipe don Vicente Gonzaga, acordamos y mandamos, que las leyes en este libro contenidas y dadas para la buena gobernación y administración de justicia de nuestro Consejo de Indias, casa de Contratación de Sevilla, Indias Orientales y Occidentales, Islas y Tierra-Firme del Mar Océano, Norte y Sur, y sus viajes, Armadas y Navíos, y todo lo adyacente y dependiente que regimos y gobernamos por el dicho Consejo, se guarden, cumplan y ejecuten, y por ellas sean determinados todos los pleitos y negocios, que en estos y aquellos Reinos ocurrieren, aunque algunas sean nuevamente hechas y ordenadas y no publicadas ni pregonadas, y sean diferentes ó contrarias á otras leyes, capítulos de Cartas, y Pragmáticas de estos nuestros Reinos de Castilla, Cédulas, Cartas-acordadas, Provisiones, Ordenanzas, Instrucciones, Autos de Gobierno y otros despachos manuscritos ó impresos: todos los cuales es nuestra voluntad, que de ahora en adelante no tengan autoridad alguna, ni se juzgue por ellos, estando decididos en otra forma, ó expresamente revocados como por esta ley, á mayor abunda-



miento los revocamos, sinó solamente por las leyes de esta Recopilación, guardando en defecto de ellas lo ordenado por la ley segunda, título primero, libro segundo de esta Recopilación, y quedando en su fuerza y vigor las Cédulas y Ordenanzas dadas á nuestras Reales Audiencias, en lo que no fueren contrarias á las leyes de ella.»

c.—BULA DE ALEJANDRO VI.

La bula de Alejandro VI, á que Robertson hace referencia, fué expedida en 4 de Mayo de 1493, y acuerda á los soberanos de la España la propiedad de las tierras americanas en estos términos que reproduce Solórzano: «Por la autoridad del Omnipotente Dios á Nos en San Pedro concedida y del Vicariato de Jesucristo, que ejercemos en la tierra, con todos los Señoríos de ellas, Ciudades, Fuerzas, Lugares, Villas, Derechos, Jurisdicciones, y todas sus pertenencias, por el tenor de las presentes, *las damos, concedemos y asignamos perpetuamente á Vos, y á los Reyes de Castilla y de León; Vuestros herederos y sucesores:— Y hacemos, constituimos, y deputamos á Vos, y á los dichos vuestros herederos y sucesores, Señores de ellas con libre, lleno y absoluto poder, autoridad y jurisdicción, etc.*»

d.—CONSEJO DE INDIAS.

Algunos historiadores modernos, en ellos Prescott (Hist. of the Reing Ferd and Isabella, Vol. III, Capí-



tulo XVII, pág. 407, nota 4ª., Edic. de Londres 1849), y Barros Arana, interpretando erróneamente las fuentes históricas de que se han servido, dicen que el Consejo de Indias fué instituido por los Reyes Católicos. Prescott (loc. cit.) dice también que fué fundado por Fernando en 1511. Este dato histórico ha hecho incurrir en error á los escritores de segunda mano. Para quitar toda duda al respecto, nos basta citar las palabras de Solórzano (Política Indiana, Lib. V, Capítulo XV, núm. 2) cuya autoridad é información son irrefutables. Dice: «Y entre estos consejos es muy considerado y estimado el que *se instituyó* por el señor emperador *Carlos V*, á primero de Agosto de 1524..... Porque antes de esta formación no *tenían las cosas y causas de las Indias consejo particular por donde correr* y se despachaban por el de Castilla, *como accesoriamente unidas á él* ó por algunos graves varones, y Consejeros que de él se mandaban entresacar.»

Prescott ha citado también á Solórzano, y dice que éste se refiere á la reconstitución (remodelling) de este tribunal en tiempo de Carlos V; pero aquel escritor ha interpretado erróneamente al autor de la Política Indiana, que por sus palabras precitadas, ha querido decir muy distinta cosa, como lo dice también Gomara en el Cap. CCXVIII de su Historia de las Indias. (Lucio V. López — *Derecho Administrativo*.)

#### e.--JUICIO DE RESIDENCIA

Cuando los mandatarios terminaban las funciones



de su cargo por remoción ó ascensos, las leyes disponían que fueran residenciados, es decir, juzgados en los actos que habían desempeñado como gobernantes. El Consejo de Indias, proponía al Rey tres abogados residentes generalmente de América, y el Rey, señalaba uno de ellos para que bajo su dirección, se instruyese un sumario al funcionario cesante. El visitador ó encargado de instruir la *residencia*, se trasladaba al punto en que el funcionario había desempeñado su cargo y anunciaba á los habitantes de la provincia el punto en que se instalaba el tribunal, ante el cual debían presentarse las quejas que los ofendidos pudiesen tener contra el *residenciado*. La instrucción duraba de sesenta á noventa días, según la extensión del país, y una vez terminadas y oídas las defensas del gobernante ó de sus representantes, el visitador elevaba al Consejo de Indias, los antecedentes necesarios para resolver el caso. La sentencia del Consejo terminaba definitivamente el juicio. Los juicios de residencia no se instruían única y exclusivamente para averiguar los abusos que pudieran haber cometido los funcionarios en el ejercicio de su cargo. Las leyes disponían expresamente que se oyese también á aquellos que quisieran informar en pró de las virtudes y buenas acciones de los *residenciados*, y se prohibía que el informe se concretase exclusivamente á la pesquisa ó averiguación de la mala conducta de los empleados obligados á sufrir las consecuencias del juicio de residencia.

Apesar de las garantías que este procedimiento ofre-



cía para las personas vecindadas en las colonias españolas, los juicios de residencia, fueron frustráneos en la mayor parte de los casos, y frecuentemente, el favoritismo real y la influencia personal, obtuvieron que los jueces usaran no sólo de lenidad para castigar á los reos, sinó para excusarlos en muchas ocasiones, de los cargos que contra ellos formulaban sus victimas. (Solórzano, *Política Indiana*, Lib. V, capítulo X.)

f.—ELECCIÓN DE DIPUTADOS (*Const. de 1819*)

Este punto fué motivo de un extenso debate: La comisión dijo: que la Cámara de Representantes no debía ser tan pequeña que presentara fácil acceso á cualquier complot ó careciese de la consideración correspondiente, ni tan numerosa que las deliberaciones se dificultasen ó fuesen tumultuarias, infringiendo al mismo tiempo á los fondos nacionales, un gravámen innecesario, consideraciones que son dignas de tenerse en cuenta en todos los tiempos, y el Congreso aceptó sin dificultad que la base de la representación fuera de 25,000 habitantes ó una fracción de 16.000 calculando que sobre ella la cámara de diputados llegaría á 50 miembros más ó menos. Pero surgió una cuestión delicada y del más alto interés, y era la de saber si para los efectos de la distribución de asientos se debía tomar por punto de partida las provincias como distrito general, ó cada una de las ciudades que entraban en su jurisdicción. Los antecedentes del país





eran diversos. En 1810, la designación de los diputados la habían hecho las ciudades cabezas de partido ó de departamento, de acuerdo con las resoluciones adoptadas en los días de la revolución y con la circular de la Junta Provisoria de 27 de Mayo.

Del mismo modo se eligieron los de la Asamblea disuelta el 8 de Octubre de 1812, los de la Asamblea Constituyente de 1813 y los que formaban el Congreso que en ese momento debatía la constitución. Pero el Estatuto de 1815 atribuía la representación, no á las ciudades, sinó á las Provincias que eran las que formaban el verdadero distrito electoral, porque las subdivisiones de ellas únicamente servían para elegir los electores que, en la asamblea provincial, le designaban los diputados al Congreso.

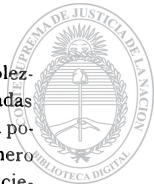
No hay para que decir que los partidarios de la representación de las ciudades encarnaban las tendencias particularistas de cada localidad, mientras que la tendencia unitaria se manifestaba en favor del distrito provincial.

Sostenían los primeros que debía respetarse los precedentes establecidos desde 1810, excluyendo el Estatuto Provisorio que no fué aceptado por las provincias, no sólo porque esa era la tradición argentina, sinó también porque con ese sistema se compensaban los inconvenientes del centralismo unitario de toda la constitución. Alegaban que las ciudades de una misma provincia tenían muchas veces intereses contradictorios y que había conveniencia en que esos intereses tuvieran representación propia en la asamblea



nacional, lo que no sucedería con el distrito provincial, porque la influencia de la ciudad capital prevalecería, con exclusión de las subalternas, por muchas circunstancias, y, entre otras, por la dificultad de congregarse en las asambleas generales que tal sistema requería.

Los adversarios de estas ideas contestaban que los antecedentes no debían invocarse contra las ventajas de un mejor sistema, porque con semejante doctrina se impedía el progreso de las instituciones. Que las ciudades, como tales, no tenían derecho alguno para exigir representación propia, porque no eran entidades políticas, sinó centros de vida social. El sistema de representación, decían, pertenece exclusivamente á los pueblos libres y no es otra cosa que una sustitución, en lugar de las reuniones en masa que hacían los pueblos libres de la antigüedad, para deliberar sobre los asuntos de utilidad común, las cuales es imposible practicar en el estado actual de nuestras sociedades; lo que antes se hacía por todos los ciudadanos personalmente, ahora se hace por representantes; de manera que la representación estriba en el derecho inherente á cada ciudadano de concurrir á la formación de las leyes bajo cuyo imperio ha de vivir; ella, pues, debe calcularse únicamente por el número de ciudadanos que encierra la nación, y así la población es la base y elemento único que debe tenerse en cuenta. La Nación establece la proporción que ha de haber entre el número de representantes y el total de ciudadanos, y este cálculo es obra de la con-



veniencia social. Más, las secciones que se establezcan no deben ser otras que las provincias tomadas cada una por entero, porque solo así presentan una población capaz de tener por división común el número propuesto de 25,000. Si las ciudades ó villas hicieran el nombramiento de diputados separadamente, la base de la representación ya no podría ser la población y todo el sistema se desquiciaría, porque habría diputados que representarían 25,000 habitantes y otros que no representarían sinó 20, 15 ó 10.000. El inconveniente de que cada ciudad no tenga representantes propios, está compensado con la ventaja de que el concurso de todas ellas sea requerido para la representación de la provincia; y si los electores sacrificasen sus deberes al ascendiente de las capitales, ésta no sería la consecuencia del sistema, sinó de la falta de firmeza y del espíritu público, sin que fuera un mal, sinó por el contrario, un bien que quedaran excluidas del Congreso las pequeñas rivalidades locales por los intereses más altos de carácter general.

La discusión se prolongó desde el 11 hasta el 20 de Agosto, y concluyó por la transacción del artículo constitucional ya citado que se limita á fijar la base de la representación, y por la cláusula final que libra al congreso la decisión sobre el sistema que se debe adoptar en lo futuro, manteniendo en el intervalo, la representación por ciudades del Reglamento del año 17. (Del Valle confs. cit.).

g.—DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO

Según la práctica establecida por el Congreso para la discusión de estos graves asuntos, el proyecto de decreto se presentó con un detenido informe escrito que sustancialmente decía: que las provincias de la Unión habían proclamado de un modo decidido y constante, el sistema representativo republicano; que ésta no era la opinión del momento, sinó el voto popular reflexivo y permanente de toda la nación, y que la única cuestión que quedaba pendiente podía fijarse en estos términos: «¿se ha de gobernar bajo la forma de administración federal ó de unidad? ¿se afianzará mejor el orden, la libertad y la prosperidad de la República, dividiéndose en tantos Estados como provincias que, aliadas políticamente bajo un gobierno federal para la dirección de los negocios nacionales, se reserven el resto de soberanía necesaria para su dirección particular, ó formando de todas las provincias un Estado consolidado bajo un gobierno central y encargado del régimen interior de todo? ¿cuál de estas formas será más á propósito para organizar, conservar y hacer feliz á la República Argentina?»

La comisión declaraba que la bondad de una forma de gobierno dependía del estado de la sociedad á la cual se aplicaba, y que la mejor era la que aseguraba más eficazmente los derechos del hombre, importando, para determinar la preferencia, pulsar, en cada Nación, las relaciones sociales y considerar prácticamente, sus circunstancias físicas, morales y





políticas—entre las circunstancias físicas encontraba como más notable la despoblación del país—muchas de las provincias no pasaban de 15.000 habitantes esparcidos á grandes distancias, pobres, á pesar de la feracidad del suelo; y preguntaba ¿será prudente despedazar la Nación en muchas fracciones con el nombre de Estados, cuando de todas ellas apenas puede formarse una república de 500.000 habitantes? La federación, en tales circunstancias y con tan reducido número de habitantes, no alcanzaría á organizar una representación conveniente, porque ó tendrían los pueblos que elegirla entre toda clase de gente, aún entre incapaces de ejercer los derechos políticos, ó se verían obligados á concentrarla en el pequeño número de prepotentes,—constituyendo, por el primer camino, una democracia destructora, y por el segundo una oligarquía opresora. A esto se agregaban las circunstancias morales del país, en abierta oposición con la forma de gobierno federal, comenzando por las habituales adquiridas en dos siglos, bajo el gobierno español, y siguiendo con los años de la primera época de la revolución.

Las asambleas representativas de pueblo, decía, la separación de los tres poderes y la balanza con que deben contrapesarse las cámaras legislativas, son los tres grandes descubrimientos que se han hecho en el arte de constituir un gobierno libre, y era indudable que la masa general de los habitantes de las provincias carecía de la instrucción que demanda la organización de los tres departamentos de gobierno en



cada Estado, en cuya mayor parte faltarían seguramente hombres preparados para el desempeño de las funciones públicas.

La experiencia lo demostraba. En muchas provincias no se habían establecido todavía asambleas representativas; la mayor parte no tenía tribunales de justicia; varios ciudadanos de Tucumán habían pretendido traer las apelaciones de sus pleitos al tribunal de la Capital; un diputado de Santa Fé promovió igual solicitud con el gobierno nacional. Por lo que habían hecho y por lo que había sucedido en el período de aislamiento, se podía predecir lo que inevitablemente sucedería en un gobierno federal permanente que, sin poderes divididos é independientes, se alzaría con todo el poder público y no saldría de ese terreno sinó para caer en la oligarquía ó en la demagogía. El período de aislamiento no había predisposto las provincias al gobierno federal porque esa época había sido una lección práctica y terrible. En los seis años corridos las provincias habían tenido en sus manos los elementos y el poder de organizarse; pero, con excepción de muy pocas, las demás habían retrocedido en materia de gobierno; algunas no tenían instituciones ni buenas ni malas, y en ellas no había más ley que el capricho del que la gobernaba. La disolución del gobierno general había producido también la separación de las ciudades subalternas, separación sostenida por la más irrevocable resolución de no subordinarse á sus antiguas capitales. En tal estado el país podía reorganizarse con el sis-



tema de unidad; pero sería imposible convertir en estados soberanos las campañas desiertas y pueblos míseros.

Circunstancias políticas concurrían en el mismo sentido: los fines de toda asociación política son la seguridad y la libertad; pero la primera debe preceder á la última, y no sería posible afianzar la seguridad interior en un país despoblado, de grande extensión, sin darle al gobierno acción fácil, rápida y abierta, la que no se obtendría con la organización complicada y débil del sistema federal. La seguridad exterior, igualmente, reclamaba la organización de un gobierno con esos mismos atributos, y así, después de pulsadas las circunstancias del país, de consultada la propia experiencia y los documentos que presentaba la historia, concluía la comisión que el gobierno representativo de la República consolidado en unidad de régimen, era el único que salvaba los inconvenientes indicados y garantizaba los derechos sociales, reuniendo las ventajas de los gobiernos libres y apartando sus defectos.

Tomaba en cuenta, al concluir, el ejemplo de los Estados Unidos, pero observaba la diferencia enorme entre las circunstancias de aquel país y el Argentino, observando que los Estados Americanos, que al emanciparse se confederaron, no hicieron una transición violenta de una forma de gobierno á otra, sino que perfeccionaron una organización tan antigua como su existencia; mientras que lo contrario sucedería si las Provincias Unidas del Rio de la Plata, cuya

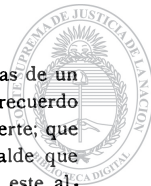


tradición era el gobierno central, se organizaban bajo la forma federal. Hasta aquí el informe de la comisión de negocios constitucionales.

El Dr. Castro amplió el informe escrito con un discurso sustancial, analítico y detallado, cimentado principalmente sobre la incapacidad de los pueblos argentinos para formar Estados federales, por su despoblación, su pobreza y su ignorancia, haciendo constar, entre otras circunstancias, que era tanta la falta de hombres preparados para el gobierno en las provincias, que en muchas de ellas los gobernadores eran quienes conocían en grado de apelación de los casos de justicia, por falta de letrados. Santa Fé no tenía un solo abogado; la provincia de Corrientes no tenía sino uno: el Dr. Cosío; Entre Ríos y Misiones no tenían ninguno, y según lo afirmaba el diputado General D. Lucio Mansilla, los asuntos criminales se decidían en los tribunales con arreglo á las ordenanzas militares de Colón.

El diputado Acosta, por Corrientes, insistió en análogas demostraciones, ilustrando el caso con el ejemplo de lo que ocurría en su provincia, donde la asamblea legislativa se componía de cinco individuos, de los cuales bastaban tres para despotizarla; donde no había otro poder judicial que dos alcaldes ordinarios que sentenciaban sin audiencia de los reos, sin acusación ni defensa; alcaldes legos, leguísimos, según decía el Dr. Acosta, que cuando más consultaban la opinión de un clérigo: Ah! señores! agregaba el diputado, por Corrientes cuando me acuerdo de la opinión de un





eclesiástico que jamás ha saludado las tácticas de un cuerpo legislativo; y que escándalo cuando recuerdo que este eclesiástico firmaba sentencias de muerte; que de éste no hay mas recurso que al otro alcalde que se llama alcalde mayor, y ¿quién aconseja á este alcalde mayor, sinó el mismo clérigo que aconsejó al primero al sentenciar en 1ª instancia?

Se opuso con tenacidad al proyecto de la comisión y votó por el sistema federal el diputado Galisteo, de la provincia de Santa Fé, sosteniendo que las circunstancias físicas, políticas y morales del país, que había invocado la comisión en defensa de la unidad, aconsejaban adoptar el sistema federal, principiando por las distancias que separaban los centros poblados de las provincias, y concluyendo por preguntar si restablecida la unidad no se volvería á un poder análogo al de los reyes de España.

Hizo valer la diversidad de ideas en materias fundamentales prevalentes en los diversos pueblos argentinos, é invocó como ejemplo, lo que ocurría en la cuestión religiosa, oponiendo al liberalismo del gobierno de Buenos Aires, el sentimiento católico, apostólico, romano, de los pueblos del interior, y manifestándose decididamente adverso á la libertad de cultos que Buenos Aires había declarado.

El Dr. D. Juan José Passo intervino en el debate para proponer que se postergara la deliberación sobre el asunto, hasta que se pudieran armonizar las ideas divergentes que prevalecían en las provincias, anticipando su opinión en favor de una forma mixta de unidad y federación.



El diputado Gorriti puso la autoridad de su palabra al servicio del proyecto de lo comisión, que fue sancionado, finalmente, como ya sabemos, en la sesión del 19 de Julio por 42 votos contra 11.

Merece notarse la circunstancia de que en este debate no tomaron parte los representantes más caracterizados de la idea federal, comenzando por Dorrego, y se deduce de uno de los discursos del Dr. Passo que su silencio calculado causó grande extrañeza. Probablemente por razones de táctica parlamentaria, prefirieron esperar el proyecto de constitución para combatirlo en toda su integridad. (Del Valle confs. cits.)

#### *h.*—LEY DE JULIO 3 DE 1827

Esta ley ordenaba en su primer artículo, que se hiciera el nombramiento de presidente de la República con calidad de provisorio, hasta la reunión de una convención nacional que debía convocarse de acuerdo con lo que disponía el artículo 7°.

Las funciones del Presidente debían limitarse á lo concerniente á paz, guerra, relaciones exteriores y hacienda nacional; al desempeño de las funciones que le atribuía la ley del Banco Nacional; y á la dirección y gobierno de la ciudad y territorio de Buenos Aires (Artículos 2°, 3° y 4°).

El artículo 5° establecía que el Congreso General se abstendría de tratar de otros negocios que no fueran los expresados en el artículo segundo, á no ser en un caso urgentísimo.



El 6° decidía que si las provincias que se habían pronunciado por la separación de sus diputados, insistían en su remoción, después de tener conocimiento de esa ley, cesarían éstos, desde luego, en el ejercicio de sus funciones.

El 7° encargaba al Ejecutivo Provisorio que procediera á invitar á las provincias á las más pronta reunión de una convención nacional que podría componerse de un diputado por provincia, y se reuniría en el lugar que se designase.

El objeto de la convención debía ser arreglar su misma representación en su forma y en el número de sus miembros; nombrar presidente de la República; proveer cuanto estimare conveniente en las actuales circunstancias nacionales; recibir los votos de las provincias sobre la aceptación ó repulsa de la constitución ó su postergación hasta mejor oportunidad (art. 8°).

El artículo 9° prescribía que la ciudad de Buenos Aires y su territorio designaran representantes, como lo hacían anteriormente para deliberar sobre su carácter político y nombrar sus diputados á la convención nacional (art. 10°).

El Congreso recomendaba á las provincias que conservaran un cuerpo deliberante hasta la instalación del nuevo Congreso (art. 11°).

El artículo 12° decía: que el presidente debía emplear todos sus esfuerzos para hacer cesar la guerra civil, á cuyo efecto quedaba autorizado para los gastos necesarios; y finalmente el 13° recomendaba al



nuevo presidente, la adopción de las medidas más eficaces y enérgicas para que todos los pueblos concurriesen á la guerra con el Brasil del modo que tan imperiosamente demandaba el honor de la República (Del Valle).

*i.*—PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DEL DOCTOR  
ALBERDI

«Nos los representantes de las provincias de la Confederación Argentina, reunidos en Congreso general constituyente, invocando el nombre de Dios, Legislador de todo lo creado, y la autoridad de los pueblos que representamos, en orden á formar un Estado federativo, establecer y definir sus poderes nacionales, fijar los derechos naturales de sus habitantes y reglar las garantías públicas de orden interior, de seguridad exterior y de progreso material é inteligente, por el aumento y mejora de su población, por la construcción de grandes vías de transporte, por la navegación libre de los ríos, por las franquicias dadas á la industria y al comercio y por el fomento de la educación popular, hemos acordado y sancionado la siguiente:—»



# CONSTITUCION DE LA CONFEDERACION ARGENTINA

---

## PRIMERA PARTE

---

### **Principios, derechos y garantías fundamentales**

---

#### CAPÍTULO PRIMERO

##### *Disposiciones generales*

Art. 1. La República Argentina se constituye en un Estado federativo, dividido en provincias, que conservan la soberanía no delegada expresamente por esta constitución al gobierno central.

Art. 2. El gobierno de la República es democrático, representativo, federal. Las autoridades que lo ejercen tienen su asiento . . . ciudad que se declara federal.

Art. 3. La Confederación adopta y sostiene el culto católico, y garantiza la libertad de los demás.

Art. 4. La Confederación garantiza á las provincias el sistema republicano, la integridad de su territorio, su soberanía y su paz interior.

Art. 5. Interviene sin requisición en su territorio al solo efecto de restablecer el orden perturbado por la sedición.

Art. 6. Los actos públicos de una provincia gozan de entera fe en las demás.



Art. 7. La Confederación garantiza la estabilidad de las constituciones provinciales, con tal que no sean contrarias á la constitución general, para lo cual serán revisadas por el Congreso ántes de su sanción.

Art. 8. Los gastos de la Confederación serán sostenidos por un tesoro federal creado con impuestos soportados por todas las provincias.

Art. 9. Ninguna provincia podrá imponer derechos de tránsito ni de carácter aduanero sobre artículos de producción nacional ó extranjera, que procedan ó se dirijan por su territorio á otra provincia.

Art. 10. No serán preferidos los puertos de una provincia á los de otra, en cuanto á regulaciones aduaneras.

Art. 11. Los buques destinados de una provincia á otra no serán obligados á entrar, anclar y pagar derechos por causa del tránsito.

Art. 12. Los ciudadanos de cada provincia serán considerados ciudadanos en las otras.

Art. 13. La extradición civil y criminal es sancionada como principio entre las provincias de la Confederación.

Art. 14. Dos ó más provincias no podrán formar una sola sin anuencia del Congreso.

Art. 15. Esta constitución, sus leyes orgánicas y los tratados con las naciones extranjeras son la ley suprema de la Confederación. No hay más autoridades supremas que las autoridades generales de la Confederación.

CAPÍTULO II.

*Derecho público argentino.*



Art. 16. La constitución garantiza los siguientes derechos á todos los habitantes de la Confederación, sean naturales ó extranjeros :

De libertad

Todos tienen la libertad de trabajar y ejercer cualquier industria ,

—De ejercer la navegación y el comercio de todo género ,

—De peticionar á todas las autoridades ,

—De entrar, permanecer, andar y salir del territorio sin pasaporte ,

—De publicar por la prensa sin censura previa ,

—De disponer de sus propiedades de todo género y en toda forma ,

—De asociarse y reunirse con fines lícitos ,

—De profesar todo culto ,

—De enseñar y aprender.

De igualdad

Art. 17. La ley no reconoce diferencia de clase ni persona. No hay prerogativas de sangre, ni de nacimiento, no hay fueros personales; no hay privilegios, ni títulos de nobleza. Todos son admisibles á los empleos. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. La ley civil no reconoce diferencia de extranjeros y nacionales.

De propiedad

Art. 18. La propiedad es inviolable. Nadie puede ser privado de ella sinó en virtud de ley ó de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de pública utilidad debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone contribuciones. Ningún servicio personal es exigible sinó en virtud de ley ó de sentencia fundada en ley. Todo autor ó inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra ó descubrimiento. La confiscación y el descomiso de bienes son abolidos para siempre. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones ni exigir auxilios. Ningún particular puede ser obligado á dar alojamiento en su casa á un militar.

De seguridad

Art. 19. Nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso.

Ninguno puede ser juzgado por comisiones especiales, ni sacado de los jueces designados por la ley ántes del hecho de la causa.

Nadie puede ser obligado á declarar contra sí mismo.

No es eficaz la orden de arresto que no emane de autoridad revestida del poder de arrestar y se apoye en una ley.

El derecho de defensa judicial es inviolable.

Afianzado el resultado civil de un pleito, no puede ser preso el que no es responsable de pena aflictiva.







El tormento y los castigos horribles son abolidos para siempre y en todas circunstancias. Son prohibidos los azotes y las ejecuciones por medio del' cuchillo, de la lanza y del fuego. Las cárceles húmedas, oscuras y mortíferas deben ser destruidas. La infamia del condenado no pasa á su familia.

La casa de todo hombre es inviolable.

Son inviolables la correspondencia epistolar, el secreto de los papeles privados y los libros de comercio.

Art. 20. Las leyes reglan el uso de estas garantías de derecho público; pero el Congreso no podrá dar ley que con ocasión de reglamentar ú organizar su ejercicio, las disminuya, restrinja ó adultere en su esencia.

### CAPÍTULO III.

#### *Derecho público deferido á los extranjeros.*

Art. 21. Ningún extranjero es más privilegiado que otro. Todos gozan de los derechos civiles inherentes al ciudadano, y pueden comprar, vender, locar, ejercer industrias y profesiones, darse á todo trabajo; poseer toda clase de propiedades y disponer de ellas en cualquier forma; entrar y salir del país con ellas, frecuentar con sus buques los puertos de la República, navegar en sus ríos y costas. Están libres de empréstitos forzosos, de exacciones y requisiciones militares. Disfrutan de entera libertad de conciencia y



pueden construir capillas en cualquier lugar de la República. Sus contratos matrimoniales no pueden ser invalidos porque carezcan de conformidad con los requisitos religiosos de cualquier creencia, si estuviesen legalmente celebrados.

No son obligados á admitir la ciudadanía.

Gozan de estas garantías sin necesidad de tratados y ninguna cuestión de guerra puede ser causa de que se suspenda su ejercicio.

Son admisibles á los empleos, según las condiciones de la ley, que en ningún caso puede excluirlos por sólo el motivo de su origen.

Obtienen naturalización, residiendo dos años continuos en el país; la obtienen sin este requisito los colonos, los que se establecen en lugares habitados por indígenas ó en tierras despobladas; los que emprenden y realizan grandes trabajos de utilidad pública; los que introducen grandes fortunas en el país; los que se recomienden por invenciones ó aplicaciones de grande utilidad general para la República.

Art. 22. La constitución no exige la reciprocidad para la concesión de estas garantías en favor de los extranjeros de cualquier país.

Art. 23. Las leyes y los tratados reglan el ejercicio de estas garantías, sin poderlas alterar, ni disminuir.

#### CAPÍTULO IV

##### *Garantías públicas de orden y de progreso*

Art. 24. Todo Argentino es soldado de la guardia



nacional. Son exceptuados por treinta años los Argentinos por naturalización.

Art. 25. La fuerza armada no puede deliberar; su rol es completamente pasivo.

Art. 26. Toda persona ó reunión de personas que asuma el título ó representación del pueblo, se arrogue sus derechos ó peticione á su nombre, comete sedición.

Art. 27. Toda autoridad usurpada es ineficaz; sus actos son nulos. Toda decisión acordada por requisición directa ó indirecta de un ejército ó de una reunión de pueblo, es nula de derecho y carece de eficacia.

Art. 28. Declarado en estado de sitio un lugar de la Confederación, queda suspenso el imperio de la constitución dentro de su recinto. La autoridad en tales casos ni juzga, ni condena, ni aplica castigos por sí misma, y la suspensión de la seguridad personal no le da más poder que el de arrestar ó trasladar las personas á otro punto dentro de la Confederación, cuando ellas no prefieren salir fuera.

Art. 29. El presidente, los ministros y los miembros del Congreso pueden ser acusados por haber dejado sin ejecución las promesas de la constitución en el término fijado por ella, por haber comprometido y frustrado el progreso de la República. Pueden serlo igualmente por los crímenes de traición, concusión, dilapidación y violación de la constitución y de las leyes.

Art. 30. Deben prestar caución juratoria, al tomar



posesión de su puesto, de que cumplirán lealmente con la constitución, ejecutando y haciendo cumplir sus disposiciones á la letra, y promoviendo la realización de sus fines relativos á la población, construcción de caminos y canales, educación del pueblo y demás reformas de progreso, contenidos en el preámbulo de la constitución.

Art. 31. La constitución garantiza la reforma de las leyes civiles, comerciales y administrativas, sobre las bases declaradas en su derecho público.

Art. 32. La constitución asegura en beneficio de todas las clases del Estado la instrucción gratuita, que será sostenida con fondos nacionales destinados de un modo irrevocable y especial á ese destino.

Art. 33. La inmigración no podrá ser restringida, ni limitada de ningún modo, en ninguna circunstancia, ni por pretexto alguno.

Art. 34. La navegación de los ríos interiores es libre para todas las banderas.

Art. 35. Las relaciones de la Confederación con las naciones extranjeras respecto á comercio, navegación y mútua frecuencia serán consignadas y escritas en tratados, que tendrán por bases las garantías constitucionales deferidas á los extranjeros. El gobierno tiene el deber de promoverlos.

Art. 36. Las leyes orgánicas que reglen el ejercicio de estas garantías de orden y de progreso, no podrán disminuirlas ni desvirtuarlas por excepciones.

Art. 37. La constitución es suceptible de reformarse en todas sus partes; pero ninguna reforma se admitirá en el espacio de diez años.



Art. 38. La necesidad de la reforma es declarada por el Congreso permanente, pero sólo se efectúa por un Congreso ó Convención convocada al efecto.

Art. 39. Es ineficaz la proposición de reforma que no es apoyada por dos terceras partes del Congreso, ó por dos terceras partes de las legislaturas provinciales.

---

## SEGUNDA PARTE

---

### **Autoridades de la Confederación**

---

#### SECCIÓN 1ª. — Autoridades generales

##### CAPÍTULO PRIMERO

##### *Del poder legislativo*

Art. 40. Un Congreso federal compuesto de dos Cámaras, una de senadores de las Provincias, y otra de diputados de la Nación, será investido del poder legislativo de la Confederación.

Art. 41. El orador es inviolable, la tribuna es libre; ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones ó discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.

Art. 42. Sólo puede ser arrestado por delitos contra la constitución.

Art. 43. Sus servicios son remunerados por el tesoro de la Confederación.



Art. 44. El Congreso se reúne indispensablemente en sesiones ordinarias todos los años desde el 1° de Agosto hasta el 31 de Diciembre. Puede también ser convocado extraordinariamente por el poder ejecutivo federal.

Art. 45. Las provincias reglan por sus leyes respectivas el tiempo, lugar y modo de proceder á la elección de senadores y de representantes; pero el Congreso puede expedir leyes supremas que alteren el sistema local.

Art. 46. Cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto á su validez.

Art. 47. Ellas hacen sus reglamentos, compelen á sus miembros ausentes á concurrir á las sesiones, reprimen su inconducta con penas discrecionales, y hasta pueden excluir un miembro de su seno.

Art. 48. Los eclesiásticos regulares no pueden ser miembros del Congreso, ni los gobernadores de provincia por la de su mando.

Art. 49. En caso de vacante, el gobierno de provincia hace proceder á la elección legal de un nuevo miembro.

Art. 50. Ninguna Cámara entra en sesión sin la mayoría absoluta de sus miembros.

Art. 51. Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente.

Del Senado de las Provincias

Art. 52. El Senado representa las provincias en su soberanía respectiva.



Art. 53. Se compone de catorce senadores elegidos por la legislatura de cada provincia.

Art. 54. Cada provincia elige dos senadores, uno efectivo y otro suplente.

Art. 55. Se renueva el Senado por terceras partes cada dos años, eligiéndose cuatro en el tercer bienio.

Art. 56. Duran seis años en el ejercicio de su mandato y son reeligibles indefinidamente.

Art. 57. Son requisitos para ser elegido senador :— tener la edad de treinta y cinco años, haber sido cuatro años ciudadano de la Confederación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuertes, ó de una entrada equivalente.

Art. 58. El Senado juzga las acusaciones entabladas por la Cámara de diputados. Ninguno es declarado culpable sinó á mayoría de los dos tercios de los miembros presentes.

Art. 59. Su fallo no tiene más efecto que la remoción del acusado. La justicia ordinaria conoce del resto.

Art. 60. Sólo el Senado inicia las reformas de la constitución.

Cámara de diputados de la Nación

Art. 61. La Cámara de diputados representa la nación en globo, y sus miembros son elegidos por el pueblo de las provincias, que se consideran á este fin como distritos electorales de un solo Estado. Cada diputado representa á la nación, no al pueblo que lo elige.



Art. 62. Para ser electo diputado, se requiere haber cumplido la edad de veinte cinco y años, tener dos años de ciudadanía en ejercicio y el goce de una renta ó entrada anual de mil pesos fuertes.

Art. 63. La Cámara de diputados elegirá en razón de uno por cada veinte mil habitantes; pero ninguna provincia dejará de tener un diputado á lo ménos.

Art. 65. A la Cámara de diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones y sobre reclutamiento de tropas.

Art. 66. Sólo ella ejerce el derecho de acusación por causas políticas.—La ley regla el procedimiento de estos juicios.

Atribuciones del Congreso

Art. 67. Corresponde al Congreso *en el ramo de lo interior*:

1° Reglar la administración interior de la Confederación, expidiendo las leyes necesarias para poner la constitución en ejercicio.

2° Crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores, conceder amnistías generales.

3° Proveer lo conducente á la prosperidad, defensa y seguridad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, estimulando el progreso de la instrucción y de la industria, de la inmigración, de la construcción de ferrocarriles y canales navegables, de la colonización de las tierras desiertas y habitadas por indígenas, de la plantificación de nuevas industrias, de





la importación de capitales extranjeros, de la explotación de los ríos navegables, por leyes protectoras de esos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo.

4° Reglar la navegación y el comercio interior.

5° Legislar en materia civil, comercial y penal.

6° Admitir ó desechar los motivos de dimisión del Presidente, y declarar el caso de proceder ó nó á nueva elección; hacer el escrutinio y rectificación de ella.

7° Dar facultades especiales al poder ejecutivo para expedir reglamentos con fuerza de ley, en los casos exigidos por la constitución.

Art. 68. El Congreso *en materia de relaciones exteriores* :

1° Provee lo conveniente á la defensa y seguridad exterior del país.

2° Declara la guerra y hace la paz.

3° Aprueba ó desecha los tratados concluidos con las naciones extranjeras.

4° Regla el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras.

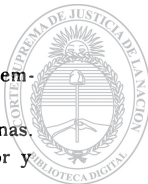
Art. 69. En el ramo *de rentas y de hacienda*, el Congreso :

1° Aprueba y desecha la cuenta de gastos de la administración de la Confederación.

2° Fija anualmente el presupuesto de esos gastos.

3° Impone y suprime contribuciones, y regla su cobro y distribución.

4° Contrae deudas nacionales, regla el pago de las



existentes, designando fondos al efecto, y decreta empréstitos.

5° Habilita puertos mayores, crea y suprime aduanas.

6° Hace sellar moneda, fija su peso, ley, valor y tipo.

7° Fija la base de los pesos y medidas para toda la Confederación.

8° Dispone del uso y de la venta de las tierras públicas ó nacionales.

Art. 70. Son atribuciones del Congreso en el *ramo de guerra*:

1° Aprobar ó desechar las declaraciones de sitio, hechas durante su receso.

2° Fijar cada año el número de fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pié.

3° Aprobar ó desechar la declaración de guerra que hiciese el poder ejecutivo.

4° Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Confederación y la salida de las tropas nacionales fuera de él.

5° Declarar en estado de sitio uno ó varios puntos de la Confederación en caso de conmoción interior.

Del modo de hacer las leyes

Art. 71. Las leyes pueden ser proyectadas por cualquiera de los miembros del Congreso ó por el Presidente de la Confederación en mensaje dirigido á la legislatura.

Art. 72. Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión á la otra



Cámara.—Aprobado por ambas, pasa al poder ejecutivo de la Confederación para su exámen, y si también obtiene su aprobación, le sanciona como ley.

Art. 73. Se reputa aprobado por el Presidente de la Confederación ó por la Cámara revisora todo proyecto no devuelto en el término de quince días.

Art. 74. Todo proyecto desechado totalmente por la Cámara revisora ó por el Presidente es diferido para la sesión del año venidero.

Art. 75. Desechado en parte, vuelve con sus objeciones á la Cámara de su origen, que le discute de nuevo; y si lo aprueba por mayoría de dos tercios, pasa otra vez á la Cámara de revisión.

Si ambas lo prueban por igual mayoría, el proyecto es ley, y pasa al Presidente para su promulgación.

Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto queda para la sesión del año venidero.

Art. 76. Ninguna discusión del Congreso es ley sin la aprobación del Presidente. Sólo él promulga las leyes. Toda determinación rechazada por él necesita de la sanción de los dos tercios de ambas Cámaras para que pueda ejecutarse.

## CAPÍTULO II

### *Del poder ejecutivo*

Art. 77. Un ciudadano con el título de *Presidente de la Confederación Argentina*, desempeña el poder ejecutivo del Estado.

Art. 78. Para ser elegido Presidente, se requiere



haber nacido en el territorio argentino, ó ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero, tener treinta años de edad y las demás calidades requeridas para ser electo diputado.

Art. 79. El Presidente dura en su empleo el término de seis años, y no puede ser reelecto sinó con intervalo de un período.

Art. 80. *Su elección* se hace del siguiente modo: Cada provincia nombra según la ley de elecciones populares cierto número de electores, igual al número total de diputados y senadores que envía al Congreso. No pueden ser electores el diputado, el senador, ni el empleado á sueldo que depende del Presidente de la Confederación.

Reunidos los electores en sus provincias respectivas, el 1° de Agosto del año en que concluye la presidencia anterior, proceden á elegir Presidente conforme á su ley de elecciones provinciales.

Se hacen dos listas de todos los individuos electos, y, firmadas por los electores, se remiten cerradas y selladas, la una al presidente de la legislatura provincial, en cuyo registro permanece cerrada y secreta, y la otra al presidente del senado general de las provincias.

Reunido el Congreso en la sala del Senado, procede á la apertura de las listas, hace el escrutinio de los votos, y el que resultase tener mayor número de sufragios es proclamado Presidente. Resultando varios candidatos con igual mayoría de votos, ó no habiendo mayoría absoluta, elegirá el Congreso entre los tres



que hubiesen obtenido mayor número de sufragios. En este caso, los votos serán tomados por provincia, teniendo cada provincia un voto; y sin la mayoría presente de todas las provincias no será válida esta elección.

Art. 81. En caso de muerte, dimisión ó inhabilidad del Presidente de la Confederación, será reemplazado por el presidente del Senado con el título de *Vice-presidente de la Confederación*, quien deberá expedir inmediatamente, en los dos primeros casos, las medidas conducentes á la elección de nuevo Presidente, en la forma que determina el artículo anterior.

Art. 82. El Presidente disfruta de un sueldo pagado por el tesoro de la Confederación, que no puede ser alterado durante el período de su gobierno.

Art. 83. El Presidente de la Confederación cesa en el poder el día mismo en que espira su período de seis años, sin que evento alguno pueda ser motivo de que se complete más tarde; y le sucederá el candidato electo, ó el presidente del Senado interinamente, si hubiese impedimento.

Art. 84. Al tomar posesión de su cargo, el Presidente prestará juramento en manos del presidente del Senado, estando reunido todo el Congreso, en los términos siguientes:—«Yo N . . . N . . . juro que desempeñaré el cargo de Presidente con lealtad y buena fe; que mi política será ajustada á las palabras y á las intenciones de la constitución; que protegeré los intereses morales del país por el mantenimiento de la religión del Estado y la tolerancia de las otras,



y fomentaré su progreso material estimulando la inmigración, emprendiendo vias de comunicación y protegiendo la libertad del comercio, de la industria y del trabajo. Si así no lo hiciere, Dios y la Confederación me lo demanden.»

Art. 85. El Presidente de la Confederación tiene las siguientes *atribuciones*:

*En lo interior :*

1ª Es el jefe supremo de la Confederación, y tiene á su cargo la administración y gobierno general del país.

2ª Expide los reglamentos é instrucciones que son necesarios para la ejecución de las leyes generales de la Confederación, cuidando de no alterar su espíritu por excepciones reglamentarias.

3ª Es el jefe inmediato y local de la ciudad federal de su residencia.

4ª Participa de la formación de las leyes con arreglo á la constitución, las sanciona y promulga.

5ª Nombra los magistrados de los tribunales federales y militares de la Confederación con acuerdo del Senado de las provincias, ó sin él, hasta su reunión, si está en receso.

6ª Destituye á los empleados de su creación, por justos motivos, con acuerdo del Senado.

7ª Concede indultos particulares, en la misma forma.

8ª Concede jubilaciones, retiros, licencias y goce de montes píos, conforme á las leyes generales de la Confederación.

9ª Presenta para los arzobispados, obispados, dig-



nidades y prebendas de las iglesias catedrales, á propuesta en terna del Senado.

10ª Ejerce los derechos del patronato nacional respecto de las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas del Estado.

11ª Concede el pase ó retiene los decretos de los concilios, las bulas, breves y rescriptos del Pontífice de Roma, con acuerdo del Senado; requiriéndose una ley, cuando contienen disposiciones generales y permanentes.

12ª Nombra y remueve por sí los ministros del despacho, los oficiales de sus secretarías, los ministros diplomáticos, los agentes y cónsules destinados á países extranjeros.

13ª Da cuenta periódicamente al Congreso del estado de la Confederación, prorroga sus sesiones ordinarias, ó le convoca á sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden ó de progreso lo requieren.

14ª Le recuerda anualmente en sus memorias el estado de las reformas prometidas por la constitución en el capítulo de las garantías públicas de progreso, y tiene á su cargo especial el deber de proponerlas.

*En el ramo de hacienda :*

15ª Es atribución del Presidente hacer recaudar las rentas de la Confederación, y decretar su inversión con arreglo á la ley ó presupuestos de gastos nacionales.

*En el ramo de relaciones extranjeras :*

16ª El Presidente concluye y firma tratados de paz, de comercio, de navegación, de alianza y de neutrali-



dad, concordatos y otras negociaciones requeridas por el mantenimiento de buenas relaciones con las potencias extranjeras; recibe sus ministros y admite sus cónsules.

17<sup>a</sup> Inicia y promueve los tratados con arreglo á lo prescrito por el art. 35 de la constitución, y sobre las bases del derecho público deferido á los extranjeros en el capítulo III.

*En asuntos de guerra:*

18<sup>a</sup> Es comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra de la Confederación.

19<sup>a</sup> Provee los empleos militares de la Confederación: con acuerdo del Senado de las provincias en la concesión de los empleos ó grados de oficiales superiores del ejército y armada; y por sí sólo en el campo de batalla.

20<sup>a</sup> Dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres, corre con su organización y distribución según las necesidades del Estado.

21<sup>a</sup> Declara la guerra con aprobación del Congreso, concede patentes de corso y cartas de represalia.

22<sup>a</sup> Declara en estado de sitio uno ó varios puntos de la Confederación en caso de ataque exterior, por un término limitado y con acuerdo del Senado de las provincias.

En caso de conmoción interior, sólo tiene esa facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde á este cuerpo.

El Presidente la ejerce con las limitaciones previstas por el art. 28 de la constitución.





Art. 86. El Presidente es responsable, y puede ser acusado en el año siguiente al período de su mando por todos los actos de su gobierno en que haya infringido intencionalmente la constitución, ó comprometido el progreso del país, retardando el aumento de la población, omitiendo la construcción de vías, embarazando la libertad de comercio, ó exponiendo la tranquilidad del Estado.—La ley regla el procedimiento de estos juicios.

De los ministros del Poder ejecutivo

Art. 87. Puede ser nombrado ministro el ciudadano que reúne las calidades requeridas para ser diputado de la Confederación.

Art. 88. El ministro refrenda y legaliza los actos del Presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia; pero no ejerce autoridad por sí sólo.

Art. 89. El ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.

Art. 90. Una ley determina el número de ministros del gobierno de la Confederación, y señala los ramos de su despacho respectivo.

Art. 91. Los ministros presentan anualmente al Congreso el presupuesto de gastos de la Confederación en sus departamentos respectivos, y la cuenta de la inversión dada á los fondos votados el año precedente.



Art. 92. Los ministros pueden ser acusados como cómplices de los actos culpables del Presidente, y como principales agentes, por los actos de su despacho en que hubiesen infringido la constitución y las leyes, ó comprometido el progreso de la población del país, la construcción de vias de transporte, la libertad de comercio y de navegación, la paz y la seguridad del Estado. Pueden serlo igualmente por los crímenes de traición y concusión, y por haber cooperado á que queden sin ejecución las reformas de progreso prometidas y garantidas por la constitución.

### CAPÍTULO III

#### *Del Poder Judicial*

Art. 93. El Poder judicial de la Confederación es ejercido por una Corte suprema y por tribunales inferiores creados por la ley de la Confederación. En ningún caso el Presidente de la República puede ejercer funciones judiciales, avocarse el conocimiento de causas pendientes ó restablecer las fenecidas.

Art. 94. Los jueces son inamovibles y reciben sueldo de la Confederación. Sólo pueden ser destituidos por sentencia.

Art. 95. Son responsables de los actos de infidencia, corrupción ó tiranía en el ejercicio de sus funciones, y pueden ser acusados.

Art 96. Las leyes determinan el modo de hacer efectiva esta responsabilidad, el número y calidades de los miembros de los tribunales federales, el valor



de sus sueldos, el lugar de su establecimiento, la extensión de sus atribuciones y la manera de proceder en sus juicios.

Art. 97. Corresponde á la Corte suprema y á los tribunales federales el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre los hechos regidos por la constitución, por las leyes generales del Estado y por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas pertenecientes á embajadores, ó á otros agentes, ministros y cónsules de países extranjeros residentes en la Confederación, y de la Confederación residentes en países extranjeros; de las causas del almirantazgo ó de la jurisdicción marítima.

Art. 98. Conocen igualmente de las causas ocurridas entre dos ó más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; entre una provincia y sus propios vecinos; entre una provincia y un Estado ó un ciudadano extranjero.

#### SECCIÓN IIª.—Autoridades ó Gobiernos de Provincia

Art. 99. Las provincias conservan todo el poder que no delegan expresamente á la Confederación.

Art. 100. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas.

Art. 101. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del gobierno general.

Art. 102. Cada provincia hace su constitución; pero



no puede alterar en ella los principios fundamentales de la constitución general del Estado.

Art. 103. A este fin el Congreso examina toda constitución provincial ántes de ponerse en ejecución.

Art. 104. Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración, de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con aprobación del Congreso general.

Art. 105. Las provincias no ejercen el poder que delegan á la Confederación.—No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; no pueden expedir leyes sobre comercio ó navegación interior ó exterior, que afecten á las otras provincias; ni establecer aduanas provinciales; ni contraer deudas gravando sus rentas ó bienes públicos, sin acuerdo del Congreso federal; ni acuñar moneda; ni legislar sobre peajes, caminos y postas; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra, ni levantar ejércitos; nombrar ni recibir agentes extranjeros.

Art. 106. Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra á otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas á la Corte suprema y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición ó asonada, que el gobierno general debe sofocar y reprimir, conforme á la ley.

Art. 107. Los gobernadores de provincia y los funcionarios que dependen de ellos son agentes naturales del gobierno general, para hacer cumplir la constitución y las leyes generales de la Confederación.

---





## j.—CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (1)

---

Nos, el pueblo de los Estados Unidos, con el objeto de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, afirmar la quietud doméstica, proveer á la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América.

### ARTÍCULO 1.

SEC. I.—Todas las facultades legislativas que por esta Constitución se conceden, residirán en un Congreso de los Estados-Unidos, el cual se compondrá de un senado y de una cámara de representantes.

SEC. II.—1. La cámara de representantes se compondrá de miembros elegidos cada dos años por el pueblo de los varios estados, y los electores de cada estado tendrán las condiciones que se requieren para

---

(1) Formada en el año 1787, por una convención de Delegados que se reunieron en Filadelfia, de los Estados de Nueva Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, la Carolina del Norte, la Carolina del Sud y Georgia.



ser electores de la rama más numerosa de la legislatura del estado.

2. Para ser representante se requiere, haber cumplido veinticinco años, haber sido siete años ciudadano de los Estados-Unidos, y hallarse, al tiempo de su elección, residiendo en el estado en que fuese elegido.

3. Los representantes y las contribuciones directas se repartirán entre los varios estados que compongan esta Unión, según el número respectivo de sus habitantes, el cual se determinará añadiendo al número total de personas libres, incluidas las que están obligadas á servidumbre por un cierto número de años, y excluidos los indios que no paguen contribuciones, tres quintos de todas las demás personas. El censo actual se hará dentro de los tres años de la primera reunión del Congreso de los Estados Unidos, y desde entónces, al cumplimiento de cada diez años, en la forma que determine la ley. El número de representantes no excederá de uno por cada treinta mil habitantes; pero cada estado deberá tener á lo ménos un representante, y miéntras se forme ese censo, el Estado de Nueva Hampshire podrá elegir tres, Massachussets ocho, Rhode Island y las Plantaciones de Providencia uno, Connecticut cinco, Nueva-York seis, Nueva Jersey cuatro, Pennsylvania ocho, Delaware uno, Maryland seis, Virginia diez, la Carolina del Norte cinco, la Carolina del Sud cinco, y Georgia tres.

4. Cuando ocurran vacantes en la representación de algún estado, el ejecutivo del mismo dará las órdenes



convenientes para que se efectúe la elección para llenar esas vacantes.

5. La cámara de representantes elegirá su presidente y demás empleados, y en ella residirá exclusivamente el derecho de acusación pública.

SEC. III.—1. El senado de los Estados-Unidos se compondrá de dos senadores por cada estado, elegidos por la legislatura del mismo, por seis años: y cada senador tendrá un voto.

2. Inmediatamente después que se hayan reunido, á consecuencia de la primera elección, se dividirán, con tanta igualdad como sea posible, en tres clases. Las sillas de los senadores de la primera clase quedarán vacantes á la terminación de dos años; las de la segunda clase á los cuatro años, y las de la tercera á los seis años; de modo que cada dos años se elegirá una tercera parte. Si hubiere vacantes por dimisiones ú otras causas, durante el receso de la legislatura de cualquier estado, el ejecutivo del mismo puede hacer nombramientos provisionales hasta la primera reunión de la legislatura, la cual proveerá entónces esas vacantes.

3. Para ser senador se requiere haber cumplido treinta años; haber sido nueve años ciudadano de los Estados-Unidos, y hallarse, al tiempo de su elección, residiendo en el estado en donde fuere elegido.

4. El vice-presidente de los Estados-Unidos será presidente del senado; pero no tendrá voto sinó en caso de empate en las votaciones.

5. El senado elegirá sus otros empleados, y también





un presidente pro tempore, en ausencia del vice-presidente, ó cuando éste se halle desempeñando las funciones de presidente de los Estados-Unidos.

6. El senado tendrá exclusivamente el derecho de juzgar todos los casos de acusación pública. Cuando se reuna con este objeto, lo hará sobre juramento ó afirmación. Cuando se juzgue al presidente de los Estados-Unidos presidirá el Justicia principal; y nadie podrá ser declarado convicto sinó por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.

7. Las sentencias en caso de acusación pública no excedarán de la privación del empleo é inhabilitación para poder obtener y gozar ningún otro honorífico, de responsabilidad ó productivo, de los Estados-Unidos; pero la parte convicta quedará sin embargo sujeta á ser acusada, juzgada, sentenciada y castigada con arreglo á la ley.

SEC. IV.—1. El tiempo, lugar y modo en que se ha de efectuar la elección de senadores y representantes, serán determinados en cada estado por su legislatura; pero el Congreso puede en cualquier tiempo, por ley, hacer ó variar esos arreglos, con excepción de los lugares en que deben elegirse los senadores.

2. El Congreso se reunirá una vez al año cuando ménos, y esta reunión se verificará el primer lunes de Diciembre, á ménos que por una ley se señale otro día.

SEC. V.—1. Cada cámara será juez de las elecciones, escrutinios, y calificaciones de sus respectivos miembros, y la mayoría de cada una de ellas consti-



tuirá quorum para poder deliberar; pero un número menor puede emplazarse de día en día, y estará autorizado para compeler á los miembros ausentes á asistir, del modo y bajo las penas que determine cada cámara.

2. Cada cámara podrá establecer las reglas de sus procedimientos, castigar á sus miembros por mala conducta, y con el asentimiento de los dos tercios, espulsar á un miembro.

3. Cada cámara llevará un diario de sus procedimientos, y de tiempo en tiempo lo publicará, excepto aquello que juzgue necesario mantener en secreto; y los votos en pró y en contra de los miembros de cada cámara sobre cualquier cuestión, se expresarán en el diario, siempre que lo desee la quinta parte de los miembros presentes.

4. Ninguna de las cámaras, durante la sesión del Congreso, podrá, sin el consentimiento de la otra, suspender sus tareas por más de tres días, ni señalar otro lugar que aquel en que se hallaren celebrando sus sesiones.

SEC. VI.—1. Los senadores y representantes recibirán una compensación por sus servicios, la cual será determinada por ley, y pagada por el tesoro de los Estados-Unidos. Gozarán en todos los casos, excepto en los de traición, felonía, ó de atentado contra la paz, del privilegio de no ser arrestados mientras asistan á las sesiones de sus respectivas cámaras, ni cuando se dirijan á ellas ó vuelvan de ellas; y fuera de allí, no podrán suscitárseles cuestiones por ninguno de sus discursos ni debates.



2. Ningún senador ni representante, durante el tiempo para que ha sido elegido, podrá ser nombrado para ningún empleo civil bajo la autoridad de los Estados-Unidos, el cual haya sido creado, ó cuyos emolumentos hayan sido aumentados durante ese período; y ninguna persona que esté ocupando un empleo de los Estados-Unidos podrá ser miembro de ninguna de las dos Cámaras del Congreso, mientras permanezca en su empleo.

SEC. VII.—1. Todo proyecto de ley para levantar renta, tendrá origen en la cámara de representantes; pero el senado podrá proponer ó concurrir con enmiendas como en los demás proyectos de ley.

2. Todo proyecto aprobado por la cámara de representantes y el senado, antes de tener fuerza de ley, será presentado al presidente de los Estados Unidos: si él lo aprueba lo firmará; pero si nó, lo devolverá con sus objeciones á la Cámara en donde tuvo su origen, y esta hará sentar por extenso en su diario las objeciones, y procederá á reconsiderarlo. Si después de esta reconsideración fuese aprobado el proyecto de ley por los dos tercios de la cámara, se enviará, juntamente con las objeciones, á la otra cámara, la cual también lo reconsiderará, y siendo aprobado por los dos tercios de ella tendrá fuerza de ley. Pero en todos los casos como éste, se han de tomar los votos por sí y por nó, y se expresará en el diario de cada cámara respectivamente el nombre de las personas que han votado en pró y en contra. Si algún proyecto de ley no fuese devuelto por el presidente en el término



de diez días (exceptuando los domingos), desde que se le haya presentado dicho proyecto será ley, como si él lo hubiese firmado, á ménos que el Congreso haya impedido su devolución, por haber suspendido sus sesiones, en cuyo caso no será ley.

SEC. VIII.—El Congreso está facultado:

1. Para establecer y cobrar contribuciones, derechos, impuestos y sisas, para pagar la deudas y proveer á la común defensa y bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los derechos, impuestos y sisas serán enteramente uniformes en todos los Estados Unidos.

2. Para contraer empréstitos sobre el crédito de los Estados Unidos.

3. Para reglamentar el comercio con las naciones extranjeras, y entre los varios estados, y con las tribus indias.

4. Para establecer una regla uniforme de naturalización, y leyes uniformes sobre bancarrotas en todos los Estados Unidos.

5. Para acuñar moneda, determinar el valor de ésta y el de las extranjeras, y establecer el patron de pesos y medidas.

6. Para proveer al castigo de los falsificadores de obligaciones y moneda corriente de los Estados Unidos.

7. Para establecer oficinas de correos y caminos postales.

8. Para promover el adelanto de las ciencias y artes útiles, garantiendo á los autores é inventores, por



un tiempo limitado, el derecho exclusivo á sus respectivos escritos y descubrimientos.

9. Para constituir tribunales inferiores á la corte suprema.

10. Para definir y castigar los actos de piraterías y delitos capitales cometidos en alta mar, y las ofensas contra el derecho de gentes.

11. Para declarar la guerra, conceder patentes de corso y represalias, y formar reglamentos para las presas que se hagan en mar ó en tierra.

12. Para levantar tropas y mantenerlas; pero no destinará dinero con ese objeto por un término que exceda de dos años.

13. para proveer y sostener una armada,

14. Para formar ordenanzas para el gobierno y arreglo de las fuerzas marítimas y terrestres.

15. Para disponer del llamamiento de las milicias con objeto de hacer cumplir las leyes de la Unión, contener las insurrecciones y rechazar las invasiones.

16. Para proveer á la organización, armamento y disciplina de la milicia, y para el gobierno de la parte de ésta que estuviese empleada al servicio de los Estados Unidos, reservando á los estados respectivamente el nombramiento de los oficiales y la facultad de instruir y ejercitar la milicia según la disciplina dispuesta por el Congreso.

17. Para ejercer una legislación exclusiva, en cualesquiera casos, sobre el distrito, no excediendo de diez millas cuadradas, que por cesión de los estados particulares y aceptación del Congreso, venga á ser el



asiento del gobierno de los Estados Unidos; y para ejercer igual autoridad sobre todos los lugares comprados con el consentimiento de la legislatura del estado á que pertenecieren, para construir fortalezas, almacenes, arsenales, astilleros y otras obras necesarias.

18. Para hacer todas las leyes necesarias y convenientes para la ejecución de las precedentes atribuciones, y de todas las demás concedidas por esta constitución al gobierno de los Estados Unidos, ó á cualquiera de sus departamentos ó empleados.

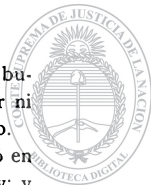
SEC. IX.—1. La inmigración ó importación de las personas que algunos de los estados existentes hoy creyesen conveniente admitir, no será prohibida por el Congreso antes del año de mil ochocientos ocho; pero se podrá imponer sobre tal importación una contribución ó derecho que no exceda de diez pesos por persona.

2. El privilegio del acto de *habeas corpus*, no se suspenderá sinó cuando, en casos de rebelión ó invasión, lo requiera la seguridad pública.

3. No se aprobará ningún proyecto de ley para condenar sin forma de juicio, ni ninguna ley retroactiva.

4. No se impondrá ninguna capitación ni otra clase de contribución directa, sinó en proporción al censo ó enumeración que se ha dicho antes debe formarse.

5. No se impondrá ninguna contribución ni derecho sobre artículos exportados de ningún Estado. No se dará ninguna preferencia, por ningún reglamento de comercio ó de rentas, á los puertos de un Estado



sobre los de otro: tampoco estarán obligados los buques despachados de un Estado para otro á abrir ni cerrar registro, ni á pagar derechos en otro Estado.

6. No se extraerá ningún dinero del tesoro, sinó en consecuencia de aplicaciones determinadas por ley; y de tiempo en tiempo se publicará con regularidad una relación y cuenta de los dineros públicos recibidos y gastados.

7. No se concederá ningún título de nobleza por los Estados Unidos; y ninguna persona que se halle ocupando un puesto productivo y de responsabilidad en los mismos, podrá sin el consentimiento del Congreso, aceptar ningún presente, emolumento, empleo ó título de cualquier clase, de ningún rey, príncipe, ni potencia extranjera.

SEC. X.—1. Ningún Estado podrá hacer tratado, alianza ó confederación; dar patentes de corso y represalias; acuñar moneda; emitir billetes de crédito; hacer válida por el pago de las deudas otra cosa que monedas de oro y plata; aprobar ningún proyecto de ley para condenar sin forma de juicio, ni ninguna ley retroactiva, ni leyes que tiendan á anular los contratos, ni conceder ningún título de nobleza.

2. Ningún Estado podrá, sin el consentimiento del Congreso, imponer contribuciones ni derechos sobre las importaciones ó exportaciones, excepto los que sean absolutamente necesarios para ejecutar sus leyes de inspección: y el producto neto de todos los derechos é impuestos cargados por algún Estado sobre las importaciones y exportaciones pertenecerá al tesoro de



los Estados Unidos, y todas esas leyes estarán sujetas á la revisión del Congreso. Ningún Estado, sin el consentimiento del Congreso podrá imponer ningún derecho de tonelaje, mantener tropas ó buques de guerra en tiempo de paz, entrar en ningún convenio ó pacto con otro Estado; ó con una potencia extranjera, ó empeñarse en guerra, á ménos que sea actualmente invadido, ó que esté en un peligro tan inminente que no admita demora.

## ARTÍCULO II.

SEC. I.—1. El poder ejecutivo residirá en un presidente de los Estados Unidos de América. Estará en posesión de su empleo durante cuatro años: el vicepresidente será nombrado por el mismo término, y los dos serán elegidos juntamente como sigue:

2. Cada estado nombrará, del modo que su legislatura determine, un número de electores igual al total de senadores y representantes que dicho Estado tenga derecho á enviar al Congreso; pero ningún senador ni representante, ni ninguna persona que ocupe un empleo de responsabilidad ó productivo de los Estados Unidos, podrá ser nombrado elector.

3. Los electores se reunirán en sus respectivos Estados y votarán por cédulas por dos personas, de las cuales una, por lo ménos, no ha de ser del mismo estado que ellos. Y formarán una lista de todas las personas por quienes se ha votado y del número de votos que ha obtenido cada uno; cuya lista firmarán, certificarán, y remitirán sellada al asiento del gobierno





de los Estados-Unidos, dirigida al presidente del Senado. El presidente del Senado, en presencia del Senado y Cámara de Representantes, abrirá todos los certificados, y entónces se contarán los votos. La persona que tenga mayor número de votos será el presidente, siempre que este número sea la mayoría de la totalidad de electores nombrados; y si hubieré más de uno que reuna esa mayoría y que tenga igual número de votos, entónces la cámara de representantes elegirá inmediatamente por cédulas á uno de ellos para presidente; y si nadie obtuviese mayoría, entónces dicha cámara elegirá del mismo modo, entre los cinco que hayan obtenido mayor número en la lista, uno para presidente. Pero al elegir el presidente los votos se tomarán por estados, teniendo la representación de cada estado un voto; un quorum para este objeto lo formará un número de miembros de los dos tercios de los estados, y para hacer una elección será necesaria una mayoría de todos los estados. En todos los casos, despues de la elección del presidente, la persona que reuna el mayor número de votos de los electores será el vice-presidente. Pero si quedasen dos ó más que tuviesen igual número de votos, el senado elegirá entre ellos, por cédula, el vice-presidente.

4. El Congreso puede determinar el día en que han de ser elegidos los electores, y el día que ellos deben dar sus votos; el cual día será el mismo en todos los Estados-Unidos.

5: No será elegible para el cargo de presidente sinó un ciudadano de nacimiento, ó que haya sido ciuda-



no de los Estados-Unidos al tiempo de adoptarse esta constitución; ni será tampoco elegible para el cargo, quien no haya cumplido treinta y cinco años, y residido catorce años en los Estados-Unidos.

6. En caso de separación del presidente de su empleo, ó de muerte, renuncia ó incapacidad para desempeñar las facultades y deberes de dicho empleo, éste recaerá en el vice-presidente; y el Congreso puede, por una ley, proveer para el caso de separación, muerte, renuncia ó incapacidad del presidente y vice-presidente, declarando qué funcionario obrará entónces como presidente; y dicho funcionario desempeñará el empleo hasta que cese la incapacidad ó que se elija un presidente.

7. El presidente recibirá en épocas determinadas una compensación por sus servicios, la cual no podrá ser aumentada ni disminuida durante el período para el cual ha sido elegido, y no recibirán durante ese período, ningún otro emolumento de los Estados-Unidos ni de ningún otro de ellos.

8. Antes de tomar posesión de su empleo, prestará el siguiente juramento ó afirmación:

« Juro (ó afirmo) solemnemente que desempeñaré con fidelidad el empleo de Presidente de los Estados Unidos, y que conservaré, protegeré y defenderé del mejor modo que pueda la Constitución de los Estados Unidos.»

SEC. II. 1. El presidente será el comandante en jefe del ejército y armada de los Estados Unidos, y de la milicia de los varios estados, cuando esté en actual servicio de los Estados Unidos; puede requerir la opinión por escrito del principal funcionario de



cada uno de los departamentos del ejecutivo, sobre todo lo que tenga relación con los deberes de sus respectivos empleos, y tendrá la facultad de conceder la suspensión de algun castigo y el perdon por ofensas contra los Estados Unidos, excepto en los casos de acusación contra funcionarios públicos.

2. Podrá, por y con consulta y consentimiento del senado hacer tratados, siempre que convengan dos tercios de los senadores presentes; y designará por y con consulta y consentimiento del senado, nombrará embajadores, otros ministros públicos y cónsules, jueces de la corte suprema, y todos los demás empleados de los Estados Unidos cuyos nombramientos no estén por esta constitución especificados, y los cuales serán establecidos por ley. Pero el Congreso puede, por una ley, conferir al presidente sólo, á las cortes judiciales, ó á los jefes de departamentos, cuando lo tenga por conveniente, el nombramiento de los empleados inferiores.

3. El presidente podrá proveer todas las vacantes que puedan ocurrir durante el receso del Senado, dando comisiones que concluirán al fin de su próximo período.

SEC. III.—De tiempo en tiempo presentará al Congreso, un informe del estado de la Union, y recomendará á su consideración aquellas medidas que creyere necesarias y convenientes; puede, en casos extraordinarios, convocar las dos cámaras legislativas, ó cualquiera de ellas, y en caso de desacuerdo entre ellas sobre el aplazamiento de las sesiones, puede



aplazarlas para el día que le parezca conveniente; recibirá embajadores y otros ministros públicos; cuidará de que se ejecuten fielmente las leyes, y dará sus despachos á todos los empleados de los Estados Unidos.

SEC. IV.—El presidente, vice-presidente y todos los empleados civiles de los Estados Unidos, serán destituidos de sus empleos cuando sean acusados y convictos de traición, cohecho, ó de otros graves crímenes y de mala conducta.

### ARTÍCULO III.

SEC. I.—El poder judicial de los Estados Unidos residirá en una corte suprema y en aquellos tribunales inferiores que más adelante disponga y establezca el Congreso. Los jueces de la corte suprema y de los tribunales inferiores, permanecerán en sus empleos durante su buena conducta, y recibirán en épocas determinadas, una compensación por sus servicios, la cual no será disminuida mientras continuen en sus empleos.

SEC. II.—El poder judicial se extenderá á todos los casos en derecho y equidad, que emanen de esta constitucion, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados hechos ó que se hicieren bajo su autoridad: á todos los casos relativos al almirantazgo y jurisdicción marítima, á las controversias en que los Estados Unidos sean una de las partes: á las que se susciten entre dos ó más estados, entre un estado y ciu-



dadanos de otro estado, entre ciudadanos de diferentes estados, entre ciudadanos del mismo estado reclamando tierras concedidas por diversos estados, y entre un estado ó sus ciudadanos, y estados, ciudadanos ó súbditos extranjeros.

2. La corte suprema tendrá jurisdicción originaria en todos los casos relativos á embajadores, otros ministros públicos y cónsules, y en aquellos en que un estado sea una de las partes. En todos los demás casos antes mencionados, la corte suprema tendrá jurisdicción de apelación, tanto con respecto al derecho como al hecho, con las excepciones y bajo los reglamentos que hiciere el Congreso.

3. El juicio de todos los crímenes, excepto en el caso de acusación pública, será por jurados, y los juicios tendrán lugar en el estado en donde se haya cometido el crimen; pero cuando no se hubiere cometido en ningún estado, se verificará el juicio en lugar ó lugares que el Congreso haya designado por una ley.

SEC. III.—1. La traición contra los Estados-Unidos consistirá solamente en tomar las armas contra ellos, ó en unirse á sus enemigos dándoles ayuda y socorro. Para ser convicto de traición se necesita la declaración de dos testigos de haberse cometido patentamente ese acto, ó por confesión en tribunal abierto.

2. El Congreso tendrá facultad para designar el castigo de la traición; pero ninguna sentencia por traición producirá corrupción de la sangre ó confiscación, sinó durante la vida de la persona sentenciada.

## ARTÍCULO IV.



SEC. I.—Todo estado dará entera fé y crédito á los actos públicos, registros y expedientes judiciales de los demás estados; y el Congreso por leyes generales puede determinar el modo en que han de probarse esos actos, registros y expedientes judiciales, y sus efectos.

SEC. II.—1. Los ciudadanos de cada estado gozarán de todos los privilegios é inmunidades de ciudadanos en los demás estados.

2. Cualquier persona acusada, en un estado, de traición, felonía ú otro crimen, que huyere de la justicia y fuese hallada en otro estado, será, á petición de la autoridad ejecutiva de estado de donde se escapó, entregada para ser conducida al estado á cuya jurisdicción estuviese sujeto el crimen.

3. Ninguna persona condenada á servir ó á trabajar en un estado por las leyes del mismo, y que se escapare á otro, podrá, por ninguna ley ni reglamento de éste, considerarse libre de aquel servicio ó trabajo, sinó que será entregada cuando la reclame la parte á quien corresponda dicho servicio ó trabajo.

SEC. III.—El Congreso puede admitir nuevos estados en esta Unión; pero no se formará ni se eregirá ningun nuevo estado dentro de la jurisdicción de otro estado, ni se formará ningún estado por la unión de dos ó más estados, ó partes de estados, sin el consentimiento de las legislaturas de los estados interesados, é igualmente del Congreso.



2. El Congreso podrá disponer de los territorios ó cualquiera otra clase de propiedades pertenecientes á los Estados-Unidos, y establecer el orden y reglas necesarias relativas á ellos; y nada se dispondrá en esta constitución que pueda perjudicar ningún derecho de los Estados-Unidos, ó de algunos de los estados en particular.

SEC. IV.—Los Estados-Unidos garantizarán á cada uno de los estados de la unión una forma republicana de gobierno, y los protegerán contra cualquiera invasión; y á solicitud de la legislatura ó del ejecutivo (cuando la legislatura no pueda ser convocada), contra violencia doméstica.

## ARTÍCULO V.

1. El Congreso, siempre que los dos tercios de ambas cámaras lo crean necesario, deberá proponer enmiendas á esta constitución; ó á petición de la legislatura de los dos tercios de los varios estados, deberá convocar una convención para poner enmiendas, las cuales, en cualquiera de los dos casos, serán válidas para todos los objetos y propósitos como parte de esta constitución, luego que sean ratificadas por las legislaturas de los tres cuartos de los varios estados, ó por convenciones reunidas en tres cuartos de éstos, según el uno ó el otro modo de ratificación que haya dispuesto el congreso; con tal que ninguna enmienda que pudiere hacerse antes del año de mil ochocientos ocho, altere en manera alguna las cláusulas primera



y cuarta de la sección novena del artículo primero, y que ningún estado, sin su consentimiento, sea privado de su sufragio igual en el senado.

## ARTÍCULO VI.

1. Todas las deudas y compromisos contraídos antes de la adopción de esta constitución, serán tan válidos contra los Estados-Unidos bajo esta constitución como bajo la confederación.

2. Esta constitución, y las leyes de los Estados-Unidos, que en virtud de ella se hicieren, y todos los tratados hechos y por hacer, autorizados por los Estados-Unidos, serán ley suprema del país; y los jueces de cada estado estarán sujetos á ella, sin embargo de cualquier cosa que en contrario haya en la constitución ó las leyes de cualquier estado.

3. Los senadores y representantes ya mencionados, y los miembros de las legislaturas de los varios estados, y todos los empleados de los departamentos ejecutivo y judicial, tanto de los Estados-Unidos como de los varios estados, se obligarán por juramento ó afirmación á sostener esta constitución; pero jamás se requerirá ningún testimonio religioso como una condición para ningún empleo ó cargo público en los Estados-Unidos.

## ARTÍCULO VII.

1. La ratificación de las convenciones de nueve estados será suficiente para el establecimiento de



esta constitución entre los estados que la hubieren ratificado.



*Hecha en convención con el consentimiento unánime de los estados presentes el día diez y siete de Setiembre, en el año de nuestro Señor mil seiscientos ochenta y siete, y el duodécimo de la independencia de los Estados-Unidos de América.*

## ENMIENDAS

*A la Constitución de los Estados-Unidos, ratificada según las Disposiciones del artículo quinto de la Constitución que precede.*

ART. I.—El Congreso no podrá hacer ninguna ley estableciendo una religión, ó prohibiendo el libre ejercicio de ninguna, ó restringiendo la libertad de la palabra ó de la prensa, ó el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir justicia al gobierno.

ART. II.—Siendo necesaria una milicia bien arreglada para la seguridad de un estado libre, no podrá coartarse al pueblo el derecho de tener y llevar armas.

ART. III.—En tiempo de paz no podrá ser alojado ningún soldado en ninguna casa sin el consentimiento de su dueño, ni tampoco en tiempo de guerra sinó en la forma prescrita por la ley.

ART. IV,—No se violará el derecho del pueblo que



le asegure contra registros y embargos arbitrarios en sus personas, domicilio, papeles y efectos; y no se expedirá ninguna orden sinó sobre causa probable, apoyada con juramento ó afirmación, y describiendo con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas ó cosas que deben ser embargadas.

ART. V.—Nadie estará obligado á contestar cargos sobre un crimen capital, ó en cualquier modo infamante, sinó por denuncia ó acusación ante un gran jurado; excepto en los casos relativos á las fuerzas de mar ó tierra, ó á la milicia estando en servicio activo en tiempo de guerra, ó en caso de público peligro: nadie estará sujeto á correr dos veces el riesgo de perder la vida ó algún miembro por el mismo delito; ni estará obligado en ninguna causa criminal á ser testigo contra sí mismo, ni será privado de la vida, la libertad, ó la propiedad, sin las formalidades de un procedimiento legal; ni podrá tomarse ninguna propiedad privada para uso público, sin justa compensación.

ART. VI.—En todas las causas criminales tendrá el acusado el derecho á que se le juzgue pronta y públicamente por un jurado imparcial del estado y distrito en donde haya sido antes fijado por la ley, y á ser informado de la naturaleza y causa de la acusación, y á ser careado con los testigos que declaren contra él; á tener medios compulsorios para obtener testigos á su favor, y á tener el auxilio de abogado en su defensa.

ART. VII.—En las causas civiles en que el valor que



se cuestiona no exceda de veinte pesos, será mantenido el derecho á ser juzgado por jurados; y ningún hecho juzgado por jurado podrá ser examinado de nuevo por ningún tribunal de los Estados-Unidos sino de conformidad con el derecho común.

ART. VIII.—No se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán desmedidas multas, ni se aplicarán penas crueles y desusadas.

ART. IX.—La enumeración en la constitución de ciertos derechos no podrá entenderse para negar ó desvirtuar otros retenidos por el pueblo.

ART. X. Las facultades no delegadas á los Estados-Unidos por esta Constitución, ni negadas por ella á los estados, son reservadas á los estados respectivamente ó al pueblo. (1)

ART. XI.—No se entenderá que el poder judicial de los Estados-Unidos pueda extenderse hasta las causas sobre puntos de derecho y equidad, que hayan sido iniciadas ó continuadas contra uno de los Estados-Unidos por ciudadanos de otro estado, ó por ciudadanos ú súbditos de una potencia estrangera. (2)

ART. XII.—1. Los electores se reunirán en sus respectivos estados y votarán por cédulas por presidente y vice-presidente, uno de los cuales, por lo ménos, no será habitante del mismo estado que ellos. Nombra-

---

(1) Estas diez primeras enmiendas fueron agregadas á la constitución el 15 de Diciembre de 1791.

(2) Esta enmienda fué propuesta á las Legislaturas de los diversos Estados por el tercer Congreso de 5 de Setiembre de 1794; y fué declarado en un mensaje del Presidente del Congreso de fecha 8 de Enero de 1798, que había sido ratificada por las Legislaturas de las tres cuartas partes de los Estados.



rán en sus cédulas la persona por quien se ha votado para presidente, y en cédulas distintas la persona por quien se ha votado para vice-presidente; y harán distintas listas de todas las personas por quienes se ha votado para presidente, y de todas las personas por quienes se ha votado para vice-presidente, y el número de votos por cada una; cuyas listas firmarán y certificarán, y remitirán selladas al asiento del gobierno de los Estados-Unidos, dirigidas al presidente del senado. El presidente del senado, en presencia del senado y de la cámara de representantes, abrirá todos los certificados, y los votos serán entónces contados. 2. La persona que reuna mayor número de votos para presidente, será el presidente, si ese número fuese una mayoría del número total de electores nombrados; y si ninguno tuviese esa mayoría, entónces de entre las personas que tuviesen más votos; no excediendo de tres, de la lista de aquellos por quienes se hubiere votado para presidente, la cámara de representantes elegirá inmediatamente, por cédula, el presidente. Pero al elegir presidente, los votos serán tomados por Estado, teniendo la representación de cada Estado un solo voto; un quorum para este objeto consistirá en un miembro ó miembros de los dos tercios de los Estados, y una mayoría de todos los Estados será necesaria para la elección. Y si antes del próximo cuatro de marzo la cámara de representantes no hubiese elegido un presidente, habiendo pasado á ella el derecho de elección, entónces el vice-presidente hará las veces de presidente, como en el caso de



muerte, ú otra incapacidad constitucional del presidente.

2. La persona que tenga el mayor número de votos como vice-presidente, será vice-presidente, si ese número fuese una mayoría del número total de electores, nombrados; y si ninguna persona obtuviese mayoría, entónces de los dos números más altos de la lista, el Senado elegirá el vice-presidente:—un quorum para este objeto consistirá en los dos tercios del número total de senadores, y una mayoría del número total será necesaria para una elección.

3. Pero ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente, será elegible para el de vice-presidente de los Estados-Unidos. (1)

ART. XIII.—1. No existirá la esclavitud ni la involuntaria servidumbre dentro de los Estados Unidos, ni en ningún paraje sujeto á su jurisdicción, excepto por sentencia legal, como castigo por crímenes cometidos.

2. El Congreso tendrá facultad para poner en vigencia este artículo por una legislación adecuada. (2)

Art. XIV.—1. Todas las personas nacidas ó naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas á su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en que residan. Ningún Estado promulgará ni ejecutará leyes que restrinjan los privilegios ó inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ningún Estado privará á persona alguna de la vida, de

---

(1) Esta enmienda fué promulgada el 25 de Setiembre de 1804.

(2) Promulgada el 18 de Diciembre de 1865.



la libertad, ni de la propiedad, sin llenar los debidos procedimientos legales, ni podrá negar dentro de su jurisdicción á persona alguna, la protección de las leyes, igual para todos.

2. Los representantes se repartirán entre los varios Estados de la Unión, según su población respectiva, contando el número total de personas en cada Estado, con excepción de los indios que no pagan impuestos. Pero cuando el derecho de votar en cualquier elección, para elegir electores, sea para nombrar Presidente y Vice-Presidente de los Estados-Unidos, ó Representantes al Congreso, ó empleados ejecutivos ó judiciales de un Estado, ó miembros de la legislatura del mismo, se negará á alguno de los habitantes masculinos de dicho Estado, teniendo 21 años de edad, y siendo ciudadano de los Estados Unidos: ó de cualquier otra manera se restringiese ese derecho, excepto por haber tomado parte en la rebelión, ó por otro crimen, la base de la representación de ese Estado, será reducida en una proporción igual al número de esos ciudadanos, masculinos, con relación al número total de ciudadanos de 21 años de edad que cuente dicho Estado.

3. Ninguna persona podrá ser elegida Senador ó Representante en el Congreso, ni elector de Presidente, y Vice-Presidente, ni podrá llenar empleo alguno civil ó militar en los Estados Unidos ni en ninguno de los Estados, si habiendo previamente prestado juramento de sostener la Constitución de los Estados Unidos como miembro del Congreso, ó empleado de los



Estados-Unidos ó como miembro de cualquier legislatura de Estado, ó como empleado judicial ó ejecutivo de cualquier Estado, hubiera tomado parte en insurrección ó rebelión contra los Estados-Unidos ó hubiese dado auxilio ó aliento á los enemigos de los Estados-Unidos. Pero el Congreso fuese por un voto de dos terceras partes de cada Cámara remover esta incapacidad.

4. La validez de la deuda pública de los Estados-Unidos autorizada por ley, incluyendo las deudas incurridas para pagos de pensiones y premios por servicios hechos, para suprimir la insurrección ó rebelión, no será cuestionada. Pero ni los Estados-Unidos, ni Estado alguno, reconocerán ni pagarán deuda ú obligación alguna, que se haya incurrido para auxiliar la insurrección ó rebelión contra los Estados-Unidos, ni reclamo alguno por emancipación ó pérdida de esclavos; sinó que todas esas deudas, obligaciones y reclamos, se considerarán ilegales, nulas y sin valor.

5. El Congreso tendrá facultad para poner en vigencia las disposiciones de este artículo por una legislación adecuada. (1)

ART. XV.—1. El derecho de todos los ciudadanos de los Estados-Unidos para votar, no será negado ni restringido por los Estados-Unidos, ni por ninguno de los Estados, en razón de la raza, del color ó de la prévia condición de servidumbre.

---

(1) Promulgada el 28 de Julio de 1868.



2. El Congreso tendrá facultad para poner en vigencia las disposiciones de este artículo, por una legislación adecuada. (1)

---

(1) Promulgada el 30 de Marzo de 1870.—Esta Enmienda y la anterior fueron agregadas después de la tremenda guerra de sucesión que hubo de dividir en dos fracciones la grande Unión Americana,

FIN





# ÍNDICE

---



## CAPÍTULO I

### ANTECEDENTES PATRIOS

SUMARIO:—I. Carácter de la legislación de Indias. La religión y la Co-Pág rona durante la época colonial. Sistema restrictivo en la administra- ción.—II. El Rey.—III. Consejo de Indias.—IV. Casa de contratación. —V. Virreynato del Río de la Plata. Antecedentes de su erección.— VI. Virreyes.—VII. Intendencias.—VIII. Audiencias.—IX. Cabildos.— X. Consulado.....	3
--	---

## CAPÍTULO II.

SUMARIO:—I. Revolución de Mayo.—II. Junta provisional gubernativa.— III. Incorporación de los diputados.—Juntas provinciales.—IV. Crea- ción del Triunvirato.—V. Reglamento de la Junta Conservadora.—VI. Estatuto provisional de 1811.—VII. Asamblea de 1812.—VIII. Segundo Triunvirato.—IX. Asamblea de 1813.—X. Directorio.—XI. Creación de nuevas provincias.—XII. Estatuto provisional de 1813.....	44
---	----

## CAPÍTULO III

SUMARIO:—I. Congreso de Tucumán.—La independencia.—Debate sobre la forma de gobierno.—II. Reglamento Provisorio de 1817.—III. Con- stitución de 1819.—IV. Disolución nacional.—V. Tratados interprovin- ciales anteriores a la Presidencia.—VI. Congreso de 1826.—Ley de capital.—VII. VII Constitución de 1826.—Su rechazo.—VIII. Tratados interprovinciales posteriores a la Presidencia.—IX. La Tiranía.....	73
--	----



## CAPÍTULO IV

SUMARIO:—I. Acuerdo de 1852 sobre la representación exterior.—II. Acuerdo de San Nicolás.—III. La Confederación y el Estado de Buenos Aires.—IV. Proyecto Constitucional de Alberdi.—V. Constitución de 1853.—VI. Pacto de 11 de Noviembre de 1859.—VII. Convención Provincial de 1860.—VIII.—Convenio de unión de 6 de Junio.—IX. Convención Nacional de 1860.—X. Reorganización Nacional.—XI. Convención de 1866.—XII. Convención de 1898.....	135
--	-----

## CAPÍTULO V

## ANTECEDENTES EXTRANJEROS

SUMARIO:—I. La Constitución de Inglaterra: <i>a)</i> tratados, <i>b)</i> cartas, <i>c)</i> estatutos, <i>d)</i> <i>common law</i> .—Sistema representativo.—Reseña de los poderes de la Gran Bretaña.—II. Las Colonias Inglesas de Norte-América.—III. Confederación de los Estados Unidos.—VI. Constitución de los Estados Unidos.—Enmiendas.—V. Influencia de las ideas francesas en el régimen constitucional argentino.....	164
APÉNDICE.....	213

---

# ERRATAS NOTABLES



Pág.	Línea	Donde dice:	Léase:
3	12	el programa	al programa
15	4	en cantidad	entidad
30	7	trono español,	trono español
46	12	los había	las había
55	15	abrogándose	arrogándose
57	2	sin ó	sinó
74	11	estaba en peligro	estaba en peligro;
91	20	ó contribuciones	á contribuciones
92	11	compelar	compeler
111	11	se regían	se regirían
122	7	dequ ince	de quince
139	14	en el Brasil	con el Brasil
142	22	un voto	su voto
145	17	se refieren	se refiriesen
152	10	diferido	deferido
152	22	é interiores	ó interiores
153	3	Constitucional	(suprimase)
160	15	de la Nación que refrenda- rán, etc.	de la Nación y refrendarán, etc.
204	7	difinía	definía
206	18	en la proclamación	de la proclamación
206	26	que en gran número	que un gran número